

PILAR CERNUDA

MONCLOA

CONFIDENCIAL



LOS SECRETOS DE LOS
PRESIDENTES EN ESPAÑA



Índice

Agradecimientos

Prólogo

La Moncloa, ese oscuro objeto de deseo
Fraga y Fidel Castro, a gritos
Los ¿chistes? de Aznar
Futuros ministros: sorpresa, sorpresa
Enemigos pero también amigos
Barones, con «B»
La agenda de Pepe Bono
«Federico Sánchez» y la Guardia Civil
La indiferencia de ZP
Todos los hombres del presidente: los asistentes
Una «invitada» terrorífica
Fraga y Felipe: el combate del siglo
La tentación de dimitir
¿Quién capitalizó el independentismo?
¿Aznar celoso del rey?
Vacaciones con polémica
La guerra de Aznar
Secuestrados
¿Decir «no» al monarca?
Secretarias: guardando secretos
De Os Peares a Os Peares
11-M: el peor día de Aznar
Una visita a los bonsáis
Tres encuentros, cero pactos
Regalos y regalazos
El escaño de Orense
Esperanza, Susana, Cristina

La hiriente «sinceridad» de Sarko
Suárez nunca tuvo un debate de investidura
La expresidenta acude al expresidente
Tartar de solomillo y otras delicias de La Moncloa
No al rescate y sí a la banca
Los papeles por el suelo
Cherchez la femme
... Y Rajoy salió a pelear

Créditos

Agradecimientos

Son muchas las personas a las que debo agradecer la posibilidad de contar estas historias, sobre todo y por encima de todo a los presidentes del Gobierno de España y a los de los gobiernos regionales, que me dieron oportunidad de conocer de primera mano sus experiencias, objetivos, compromisos e ilusiones. Pero también merecen mención especial, y mi agradecimiento, los compañeros con los que compartí vida profesional y confidencias presidenciales, así como los que han escrito libros que me han servido de recordatorio. El tiempo lleva al olvido, pero las páginas bien escritas siempre permanecen.

Y por supuesto, en estas líneas es indispensable incluir a Ymelda Navajo y Mónica Liberman, almas de La Esfera de los Libros, que me propusieron escribir sobre los presidentes de la democracia.

Prólogo

Cuatro décadas han transcurrido desde que se celebraron las primeras elecciones democráticas en España, cuatro décadas que siguieron a casi cuatro décadas de dictadura. Cuatro décadas de esperanza, dificultades y transformaciones profundas que dieron un vuelco al país. Cuatro décadas en las que fue necesario tomar decisiones difíciles, pero indispensables para crear una democracia, asentarla y consolidarla.

Un año antes del 15-J, el 15 de junio de 1977 —fecha que marcó el inicio de esa democracia, pues se celebraron las primeras elecciones con participación de todos los partidos políticos—, el rey Juan Carlos señaló con su dedo entonces poderoso a un presidente al que nadie daba como posible sustituto de Carlos Arias Navarro, último presidente de los gobiernos de Franco, al que el monarca confirmó en su cargo porque necesitaba unos meses de tiempo para que se dieran los cambios legales necesarios que le permitirían poner en marcha el proceso democrático. Para ello, contó con la ayuda inestimable de otro presidente, el de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda.

El rey arrancó a Arias Navarro, de mala manera, su dimisión. Mala manera porque este se resistía, pero don Juan Carlos se resistió más aún a que continuara en su puesto y, además, tenía diseñada la operación que colocaría a Suárez en la presidencia del Gobierno y que ha sido muy contada: logró la colaboración de muy pocos consejeros del reino pero, sobre todo, con la del mencionado Torcuato, que maniobró todo lo que pudo y más para que Adolfo Suárez formara parte de la terna que el Consejo del Reino entregaba al rey para que eligiera presidente. Suárez era en ese momento ministro secretario general del Movimiento, había sido exgobernador de Segovia y exdirector

general de RTVE. Un hombre por tanto de incuestionable trayectoria franquista.

La espina de ser designado, no elegido, se la quitó Adolfo Suárez antes de que se transcurriera un año de su nombramiento, después de poner en marcha, impulsado por el rey, una serie de iniciativas que fueron recibidas con distinto entusiasmo por parte de la sociedad española, entre ellas la legalización del Partido Comunista. Se la quitó, pues, el 15-J, cuando fue elegido presidente en urna, con una mayoría de españoles avalándole como el candidato más votado.

Adolfo Suárez fue el primero de los seis presidentes de la democracia, pero en ese tiempo una treintena de españoles han ostentado el cargo de presidentes de un gobierno autonómico, entre los que destacan siempre los de las comunidades históricas —País Vasco, Cataluña y Galicia—, así como los andaluces por la vastedad de esa región que ha marcado el ritmo político al ser la de mayor número de habitantes. Como ocurre con Cataluña, Madrid o Valencia, a las que los políticos de todo signo han dedicado siempre especial atención.

Otros presidentes, sin embargo, han logrado protagonismo no por la relevancia de sus respectivas regiones, sino por su personalidad, sus propuestas, la manera de luchar con uñas y dientes por la defensa de sus ciudadanos, con frecuencia a costa de graves enfrentamientos con el Gobierno central, aunque el presidente de turno fuera de su mismo partido. Fue el caso del extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que las tuvo tiesas con Rodríguez Zapatero, al que le presentó su dimisión —y ZP la aceptó de inmediato, con excesiva presteza— porque no compartía su punto de vista respecto a Cataluña, entre otras cuestiones. Adivinaba Ibarra que se estaban sentando las bases para fomentar el independentismo. O fue el caso de José Bono, un socialista que se hizo fuerte e importante en la presidencia de Castilla La Mancha, lo que llevó a Zapatero a ofrecerle el ministerio de Defensa primero y la presidencia de las Cortes después. Bono también presentó la dimisión como ministro a Zapatero, pues tampoco estaba de acuerdo con sus decisiones sobre Cataluña y el nuevo Estatut.

Con frecuencia la relevancia de una comunidad autonómica ha estado marcada por la personalidad o no personalidad de su presidente, y quizá el caso más significativo es el de Extremadura, una región que no se encuentra entre las más relevantes por extensión territorial, número de habitantes o nivel económico, y que sin embargo tanto el mencionado Rodríguez Ibarra como Guillermo Fernández Vara y José Antonio Monago, de diferentes partidos,

lograron que se convirtiera en un referente político permanente. En Galicia, Fraga consiguió que su región no pasara inadvertida; no había semana en la que no se produjera algún acontecimiento o una iniciativa que provocara polémica, con admiración una veces y rechazo otras. Fraga marcó tanto el hecho galaico con su arrolladora personalidad que Galicia no volvió a colocarse entre las regiones más emblemáticas hasta la presidencia de Núñez Feijóo. Y antes de Fraga, para bien o para mal, los diferentes presidentes no dejaron excesiva huella. La prueba del algodón es preguntar a cualquier español, incluido algún gallego, la lista de sus presidentes.

Sin embargo, pocos olvidarán mencionar a Juan Hormaechea en Cantabria, por ejemplo, permanentemente en el ojo del huracán. O a José María Aznar en Castilla y León, aunque Aznar pasará a la historia por su controvertido segundo mandato presidencial. Y será Juan Vicente Herrera quien haya dejado el recuerdo de presidente más completo en esa también vasta región, aunque con muchos menos habitantes que Andalucía.

Desgraciadamente los casos de corrupción de algunos presidentes regionales han contaminado el nombre de sus regiones, pagando justos por pecadores, sobre todo en Andalucía, Valencia y Cataluña, aunque Baleares no se queda atrás. En cuanto a las veleidades independentistas, siempre tan problemáticas, se han desarrollado en Cataluña y País Vasco de desigual manera.

En Cataluña ha calado el independentismo provocando el principal problema político que tiene hoy y va a tener en el futuro el presidente del Gobierno de España, mientras que en el País Vasco, una vez «desaparecido» Juan José Ibarretxe, se han apaciguado los ánimos, aunque el nuevo *lehendakari*, Íñigo Urkullu, no desaprovecha la oportunidad de reivindicar mayores dosis de soberanismo. Incluso el presidente que gobernó entre los dos, Patxi López, coqueteó con la reivindicación permanente de que los vascos tenían más derechos que el resto de los españoles, lo que provocó su distanciamiento con el Partido Popular de Antonio Basagoiti, que le había «regalado» el acceso a la presidencia del Gobierno vasco *gratis et amore*.

Los «saltos» de las presidencias de gobiernos autonómicos a la política nacional han sido frecuentes, pero no menos frecuentes han sido los «saltos» en dirección contraria, sobre todo cuando se trataba de un ministro al que se mandaba de candidato para ver si arañaba votos al adversario apoyándose en la popularidad que daba ser ministro.

En todos los casos de mala gana, como quien es enviado a galeras; pero también en todos los casos agradeciendo al presidente de turno la oportunidad de ser candidato a trabajar por los ciudadanos de la tierra que ama tanto y a la que tanto debe...

Algo así dijo Manuel Chaves cuando, siendo ministro de Trabajo, Felipe González le comunicó que sería candidato al gobierno andaluz. Días antes, al rumorearse que eso podía ocurrir, Chaves fue preguntado por unos periodistas sobre el asunto y lo negó rotundamente. Cuando le insistieron que eso estaba hecho, respondió con un contundente: «Solo seré candidato si soy conducido por la Guardia Civil». En cuanto se confirmó que lo sería, tardó apenas minutos en agradecer públicamente a Felipe González la oportunidad de trabajar por los ciudadanos de su tierra... Chaves, al menos, fue elegido presidente y se mantuvo durante diecinueve años. Hizo mucho por Andalucía, pero salió, junto a su sucesor José Antonio Griñán, con más pena que gloria. Sin embargo, no todos los ministros tuvieron la suerte de dejar el ministerio para convertirse en presidentes de gobiernos autonómicos.

Caso parecido al de Chaves fue el de Juan Fernando López Aguilar, que cuando era ministro de Justicia se vio obligado a dejar el Gobierno para convertirse en candidato por el PSOE a la presidencia del gobierno canario. Antes había confesado que quería continuar en el ministerio, pero cuando le «tocó» Canarias, le faltó tiempo para expresar su satisfacción, agradecimiento al presidente por la confianza y por la oportunidad de trabajar por la gente de su tierra... No fue presidente. En Canarias, se sabía de antemano, el presidente sería de Coalición Canaria durante muchos años, porque la animadversión entre PP y PSOE era tal que los dos partidos estaban dispuestos a coaligarse con CC para impedir que gobernara el adversario. Y CC siempre pedía, a cambio, la presidencia del gobierno regional y daba al partido coaligado la vicepresidencia.

No era Canarias la excepción. Miguel Angel Revilla sabe mucho sobre las ventajas de que el Partido Socialista esté dispuesto a cualquier cosa con tal de que el PP no gobierne en Cantabria. El Partido Popular solo ha gobernado en esa región cuando logró mayoría absoluta. Revilla, que no ganó nunca, ha sido presidente gracias a los socialistas. Quizá por eso se permite el lujo de ser tan heterodoxo, irritante a veces por lenguaraz: tiene todas las de ganar, porque con la aparición de nuevos partidos las mayorías absolutas son difíciles de alcanzar.

Estos últimos cuarenta años, probablemente los más estables de la historia de España, finalizan de manera convulsa precisamente porque la proliferación de nuevos dirigentes con diferentes prioridades, exceso de ambiciones y escaso sentido de Estado, agranda las dificultades para elegir un presidente. Hasta ahora, siempre había unos nacionalistas catalanes, vascos, andalucistas o canarios dispuestos a prestar su apoyo al candidato de la lista ganadora, pero las elecciones de diciembre de 2015, con cuatro partidos nacionales, dejaron mermados de escaños a populares y socialistas, y los problemas para formar gobierno han llevado al país a una situación hasta entonces nunca vivida: partidos populistas e independentistas pretendían aprovechar la situación para poner sus exigencias sobre la mesa, que PP y PSOE se negaban a aceptar.

Todo se complicó con la animadversión de Pedro Sánchez hacia el PP en general y Rajoy en particular, lo que impedía una gran coalición como la de otros países de nuestro entorno, o que Sánchez diera a Mariano Rajoy un puñado de votos de abstención para permitirle gobernar. Se amparaba en que el Comité Federal de su partido había determinado que el PSOE nunca apoyaría un gobierno de Rajoy. Pero, como decían voces muy cualificadas de los socialistas, una cosa era no apoyar un gobierno y otra, muy distinta, permitir que gobernara quien había ganado dos elecciones mientras el principal partido de la oposición empeoraba sus resultados hasta colocarse en la cota más baja de su historia. La polémica sobre permitir o no el gobierno de Rajoy provocó la crisis interna más grave vivida nunca en el PSOE, partido que por otra parte sabía bastante de tensiones internas. Pero ninguna como la de octubre de 2016, con una reunión de su Comité Federal que obligó a Pedro Sánchez a dimitir de la secretaría general pero, lo que era aún peor, dejó al partido gravemente herido. Para algunos dirigentes, herido de muerte. Y todo por el desacuerdo sobre quién debía ser presidente del Gobierno de España.

Finalizan, por tanto, las cuatro décadas prodigiosas con varias investiduras fallidas y nuevas generaciones de políticos que, al contrario de la trayectoria del PSOE y el PP de siempre tiran para lo suyo y anteponen sus intereses a los de los españoles.

Esas cuatro décadas que provocaron admiración en el mundo están escribiendo su epílogo con una España social y políticamente dividida, la lucha por la presidencia del Gobierno, provocando situaciones de enfrentamientos personales nunca vistos y los presidentes regionales socialistas enfrentados entre sí y mirando con recelo a la dirección nacional.

Pero, al mismo tiempo, con temor a moverse demasiado por si se cumple aquello que una vez dijo un vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra: «El que se mueve no sale en la foto».

El problema es que hoy no hay ni foto. Salió movida cuando se puso sobre la mesa la necesidad de llegar a acuerdos para elegir un presidente de la nación. Elección que ha llevado a fracturas de imposible reconstrucción.

La Moncloa, ese oscuro objeto de deseo

Alberga el despacho desde el que se ejerce el poder político, el despacho desde el que se decide el destino de los españoles, el despacho que ansían los dirigentes de todos los partidos: el despacho del presidente del Gobierno.

El palacio de La Moncloa no fue construido para acoger al primer ministro o jefe del Gobierno, pero la historia y los acontecimientos del día a día obligaron a cambiar los planes previstos. Allí tuvo que acomodarse Adolfo Suárez por los problemas de seguridad que sufría España en los primeros años de la democracia, cuando ETA atacaba con toda su fuerza y que, después, se incrementaron aún más.

Suárez, una vez designado presidente del Gobierno por el rey don Juan Carlos en 1976, se instaló en el paseo de la Castellana nº 3, en el antiguo palacete de Villamejor que había sido comprado a sus dueños en tiempos de Alfonso XIII para acoger al presidente del Consejo de Ministros, como se llamaba entonces al jefe del Gobierno. Durante el mandato de Francisco Franco tuvo allí su despacho durante años el almirante Carrero Blanco, como ministro de la Presidencia, vicepresidente y después presidente del Gobierno. Tras su muerte lo ocupó Arias Navarro.

Suárez y sobre todo su mujer, Amparo Illana —una mujer muy familiar y muy culta a la que le gustaba más el contacto con la calle que el trato con la gente del poder—, se encontraban bien en aquel lugar, en el centro de Madrid con todo a mano; pero a las pocas semanas de instalarse, el responsable de seguridad del presidente colocó sobre su mesa unas fotografías hechas desde el hotel situado frente a la residencia presidencial. En ellas se veía

perfectamente a Adolfo Suárez en mangas de camisa trabajando en su mesa. La dinámica terrorista de ETA, que había asesinado a Carrero Blanco apenas tres años antes y que, en aquellos primeros tiempos de democracia, se hacía notar trágicamente con numerosos atentados, aconsejó cambiar la sede de presidencia, y, después de analizar otras ubicaciones —entre ellas el palacio de Buenavista, sede entonces del Ministerio del Ejército, en la plaza de Cibeles y muy cerca del Congreso de los Diputados—, se optó finalmente por el palacio de La Moncloa, apartado del centro de Madrid y que por su aislamiento ofrecía más garantías.

Se aprovecharon las vacaciones de verano para acondicionarlo mínimamente, pero lo cierto es que, cuando se trasladó la familia Suárez, el palacete ofrecía un aspecto deprimente, oscuro, viejo y destartado. Esto provocó una fuerte desazón en Amparo, que tiempo después sufrió una profunda depresión a la que contribuyó no poco el ambiente de La Moncloa y las condiciones en las que se encontraba el palacete, que tuvo que sufrir sucesivas obras de acondicionamiento. Entre otros motivos porque allí, además de albergar el despacho del presidente y los de sus colaboradores, debía residir una familia.

La Moncloa es un complejo de edificios con el palacio como punto de referencia, un antiguo palacete que encargó Carlos IV para su esposa la reina María Luisa. En el siglo XIX la reina Isabel II lo donó al Estado y se convirtió después en residencia de los jefes de Gobierno. Fue prácticamente destruido durante los bombardeos de la Guerra Civil y Franco mandó reconstruirlo para que se utilizara como residencia de los jefes de Estado extranjeros que visitaban oficialmente España. Que, por cierto, eran muy pocos, pues en tiempos del franquismo no había muchos gobiernos que quisieran mantener relaciones estrechas con una dictadura. Con la excepción del presidente Eisenhower, al que se recibió con una auténtica apoteosis como prueba de la aceptación del régimen franquista y del fin del aislamiento internacional que sufría España desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente estadounidense fue el jefe de Estado más importante que albergó La Moncloa en tiempos de Franco. Otros fueron el dictador dominicano Leónidas Trujillo, el rey Mohamed V de Marruecos, el emperador etíope Haile Selassie o el rey Saud de Arabia Saudí.

Cuando en 1976 Adolfo Suárez se vio obligado a trasladar allí su residencia familiar y el despacho oficial, los servicios de Presidencia ocuparon no solo el palacio sino los edificios cercanos pertenecientes al

Ministerio de Agricultura. De hecho, aún hoy se llaman «Semillas» e «I. N. I. A» —Instituto Nacional de Investigación Agraria— los dos edificios más señoriales del complejo. En etapas sucesivas se levantaron varios pabellones de menos relevancia para acoger los diferentes departamentos adscritos a la Presidencia, entre ellos las vicepresidencias. Felipe González emprendió la obra de mayor envergadura cuando encargó construir lo que se llama Edificio del Consejo, con la sala donde se celebran las reuniones del Consejo de Ministros, el despacho de trabajo del presidente —hay otro protocolario— y, en la planta baja, además de diferentes salas, un gran salón —el Salón de Tapices— para recepciones, cenas y almuerzos con jefes de Estado y Gobierno. En ocasiones especiales se celebran también las ruedas de prensa con personalidades muy relevantes que concentran a un número destacado de periodistas.

La primera planta de palacio se acondicionó, en tiempos de Suárez, como residencia familiar, con la mayoría de los muebles pertenecientes a Patrimonio del Estado y muchos de ellos nada apropiados para niños. Comentaba Suárez alguna vez que sus hijos pequeños tenían terror a pasar durante la noche por el vestíbulo distribuidor en el que desembocaba la escalera que subía desde la planta baja —donde se encontraban los despachos— a la residencia, pues en el centro había una mesa redonda, muy oscura, con patas que representaban diablos con expresión feroz. A Amparo Illana lo que más le molestaba e incrementaba la melancolía —que no la abandonó durante los años de presidencia de su marido— era la escasa intimidad familiar. Esa escalera era la única de salida y si quería ir a la calle estaba obligada a atravesar la planta baja, donde se desarrollaba la actividad de la Presidencia, plagada siempre de miembros del equipo de Adolfo Suárez, funcionarios y miembros de la seguridad. Nunca se quejó de falta de amabilidad en su presencia, todo lo contrario, pero siempre tuvo la impresión de que en La Moncloa se encontraba permanentemente vigilada. Era imposible tomar una iniciativa tan simple como dar un paseo por el jardín sin que se enterara todo el mundo. Años después se acondicionó una escalera lateral para uso de la familia, sin necesidad de atravesar el vestíbulo del palacio donde podían encontrarse, incluso, con dignatarios extranjeros que acudían a entrevistarse con el presidente español.

La mujer de Leopoldo Calvo-Sotelo, hija del que había sido ministro de Educación de Franco, Ibáñez Martín, y a la que por tanto le afectaban menos las cuestiones protocolarias y los compromisos oficiales porque había vivido con ellos, no dudó en tomar decisiones para convertir en más acogedoras las

estancias de arriba, menos impersonales, menos «oficiales». Entre otras razones porque allí debían vivir el matrimonio y sus ocho hijos, con espacio para jugar, estudiar y sentir cierto respiro una vez que el padre dejara atrás sus compromisos oficiales. Pidió muebles funcionales apropiados para gente joven y también quiso disponer de un lugar en el que Leopoldo pudiera tocar el piano, una de sus pasiones. La presidencia de Calvo-Sotelo apenas duró un año y medio, tiempo muy breve en el que, sin embargo, tuvo que lidiar con una España tensa tras el intento de golpe de Estado del 23-F y la celebración del juicio a los encausados. Y tiempo también en el que tomó una de las decisiones que serían fundamentales para el futuro del país: el ingreso de España en la OTAN. El matrimonio Calvo-Sotelo fue el que mejor logró equilibrar su vida personal con la oficial, quizá por ser padres de familia numerosa que siempre buscaron preservar su espacio privado; quizá porque Pilar había vivido en un clima en el que el cargo de su padre no le había impedido crecer en un ambiente similar al de sus compañeras de clase, sin diferencias por ser hija de un ministro; y quizá también porque el interés auténtico del matrimonio, interés real, por el mundo de la cultura, les llevó a mantener su actividad habitual de acudir al teatro, a conciertos, al cine o a los restaurantes de siempre sin avisos previos para ser tratados como presidente y esposa, acompañados solo por una obligada y discreta escolta.

La Moncloa vivió una profunda transformación durante los catorce años de la presidencia de Felipe González. Además de la construcción del edificio del Consejo, ya mencionado, se acondicionó como comedor la sala en la que hasta entonces se celebraban las reuniones de los ministros. Se convirtió la sala de columnas, continuación del vestíbulo, en un amplio salón con grandes ventanales abiertos al jardín. Se pintó y se amuebló de blanco. El efecto era espectacular por la luminosidad. Contaba con varios espacios para sofás y tresillos, mesas bajas muy sólidas de mármol claro y plantas que daban la impresión de que el jardín se prolongaba hacia el interior del palacio. Mientras no se finalizaron las obras del edificio del Consejo allí se celebraban las reuniones de Felipe González con sus interlocutores; pocos de ellos eran recibidos en su despacho oficial, a la entrada de La Moncloa, a la derecha, amueblado con muebles clásicos de gran valor artístico e histórico pero nada prácticos.

Sin embargo, la contribución más conocida de Felipe González al complejo de La Moncloa no fueron los nuevos y necesarios edificios administrativos, ni siquiera su espectacular colección de bonsáis que

cambiaron la fisonomía de los jardines, sino la construcción de lo que se llamó la Bodeguilla. No era una construcción al uso, un añadido, un anexo. Estaba allí, pero nadie la había utilizado. Fue descubierta por Javier, el hijo menor de Adolfo Suárez, cuando estaba jugando un día en el jardín. Le llenó de curiosidad lo que parecía una puerta situada en la parte posterior del palacio y, tras comprobar que efectivamente era una puerta que daba a una especie de habitación oscura y abandonada, anunció su «descubrimiento». Tras investigar en los archivos de palacio comprobaron que, efectivamente, había una mantequería en la parte posterior del edificio que no se reconstruyó cuando se decidió acometer las obras, tras años de abandono, después de la destrucción durante la Guerra Civil.

Con Felipe González ya como presidente, alguien le habló de esa estancia, tuvo curiosidad por verla y decidió acondicionarla para reuniones privadas, fuera del protocolo de las estancias oficiales. En lugar de mantequería se transformó en una bodega, alargada, pintada de blanco, con azulejos en algunas zonas. Se colocaron muebles cómodos y sencillos, sofás y unas mesas. Felipe González y Carmen Romero decidieron celebrar allí reuniones los viernes por la noche con gente de diferentes sectores sociales, sobre todo culturales, para cambiar impresiones y puntos de vista y, en cierto sentido, para que el presidente conociera de primera mano cómo se respiraba en esos ambientes, cuáles eran los problemas. Sin embargo, como pronto se supo, era el presidente el que llevaba la voz cantante. Le gustaba más hablar que escuchar, pero no había nadie en España que no quisiera ser invitado a esos encuentros. Se convirtió en algo así como un símbolo de estatus: si no conocías la Bodeguilla, te faltaba un largo camino por recorrer antes de ser alguien en tu círculo profesional. De hecho, el nombre de la Bodeguilla traspasó fronteras y fueron innumerables los dignatarios extranjeros que, en su visita oficial a La Moncloa, pedían conocer aquel lugar de quien tanta gente hablaba y en donde el propio presidente preparaba personalmente la cena de sus invitados si se encontraba en confianza. A Felipe González le gusta cocinar, fundamentalmente pescados. Y le gusta sobre todo agasajar a sus amigos con platos guisados para ellos. Finalizada la presidencia de González, la Bodeguilla cayó en desuso. Aznar no quiso utilizar una estancia tan ligada al felipismo y Zapatero no la recuperó. Fue la aportación más conocida de Felipe González al complejo de La Moncloa, que ha crecido a lo largo de los años hasta el punto de que hoy cuenta con doce edificios además del palacio y varios aparcamientos.

En este espacio se encuentran la Presidencia del Gobierno y las vicepresidencias, el Ministerio de la Presidencia —con la Secretaría de Estado de Comunicación, que está activa veinticuatro horas al día los trescientos sesenta y cinco del año—, los servicios de seguridad y cafeterías para los empleados. Adolfo Suárez pidió que hicieran las obras necesarias en la piscina para ser utilizada, pues estaba destrozada por la falta de uso. Felipe González, además de acondicionar parte del jardín para sus bonsáis, construyó un huerto al fondo del mismo. Cuando su gran amiga Pilar Miró, siempre delicada de salud, tuvo que ser operada de su grave lesión cardiaca, desde La Moncloa le llegaban cajas de verduras cuidadas y elegidas personalmente por el presidente, que de esa forma quería cooperar en su recuperación.

Aznar era un gran aficionado al pádel, lo que dio al tenor Plácido Domingo la idea de regalarle una pista desmontable que se instaló sobre la de tenis y que desapareció una vez que Aznar dejó la presidencia. Zapatero, que sucedió a Aznar, pidió que en ese lugar colocaran unas canastas para jugar al baloncesto. Rajoy utiliza los amplios jardines de La Moncloa para correr algunos kilómetros los fines de semana, y entre semana dedica una hora diaria a la cinta de correr al mismo tiempo que sigue las noticias por televisión. También Zapatero era aficionado al *footing*, pero lo que le gustaba era salir de La Moncloa con su ropa y zapatillas de deporte. Se le trazó un circuito por los montes de El Pardo que, cuando era utilizado por el presidente, se preservaba discretamente del público, no diciendo que estaba cortada para que pudiera correr Zapatero, sino que se acotaba el espacio —como se hace con zonas de El Pardo por diversas razones técnicas, forestales o para garantizar la tranquilidad de los jabalíes, corzos o zorros que viven libremente—, de manera que nadie pudiera pensar que determinados caminos estaban vedados para que el presidente del Gobierno hiciera deporte.

En tiempos de Felipe González, además de dar un giro espectacular al Salón de Columnas, también se eligieron cuadros modernos para sustituir a los clásicos aportados por Patrimonio Nacional. Tanto González como los sucesivos presidentes decoraron sus despachos y zonas privadas con firmas de pintores españoles contemporáneos. Ana Botella decidió llevar a La Moncloa algunos de los muebles de su residencia, entre ellos los sofás rojos que se habían hecho famosos porque aparecían en todas las fotografías que ilustraban las entrevistas que se le hacían a Aznar en su domicilio. Fue la única «presidenta» que se llevó sus muebles.

Elvira Fernández, «Viri», que dejó su trabajo en Telefónica porque lo consideraba incompatible con sus nuevas funciones como esposa del presidente del Gobierno, también dio su toque personal a la zona familiar de La Moncloa, pero en su caso no encargó muebles nuevos, sino que pasó días en los almacenes de La Moncloa y Patrimonio eligiendo los que le parecían más apropiados para la nueva vida que iban a tener su marido, ella y sus dos hijos. Otra de las iniciativas de Viri fue que los menús oficiales y los canapés que se servían en las recepciones se hacían «en casa», donde había personal y medios apropiados para ello, en lugar de encargarlos a restaurantes.

Un lugar que provoca morbo nada más pronunciar su nombre es el búnker de La Moncloa. Morbo que acompaña a todas las zonas de alta seguridad, y más si son subterráneas, que se han construido dentro y fuera de España para resguardar a las altas autoridades del Estado en situación de emergencia, o para estar en comunicación con aquellos centros de poder desde los que se deben tomar decisiones en caso de crisis. El de La Moncloa lo mandó construir Felipe González y consiste en un espacio de varias plantas, en el que trabajan de forma permanente medio centenar de funcionarios que rotan por turnos para garantizar que nada falle si se produce una alerta. Son unos ocho mil metros cuadrados de superficie que pueden albergar hasta doscientas personas. Cuenta con los más sofisticados elementos técnicos y de comunicación, quirófano, vacunas y fármacos, e incluso un estudio de televisión con la tecnología necesaria para poder emitir un comunicado en las condiciones más desfavorables.

Cuando se construyó, todos los operarios tuvieron que firmar un contrato de estricta confidencialidad, lo que es habitual en ese tipo de obras, y aunque se conocen muchos de sus datos, desde el número de estancias hasta el grosor de sus muros o un esquema de los planos, todo lo relacionado con sus sistemas tecnológicos o de comunicación es absolutamente secreto. Allí se han mantenido importantes reuniones cuando se produjo la crisis de los Balcanes y los bombardeos de la OTAN durante la guerra de Kosovo, o cuando en el 11-S se produjeron los ataques contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono. Son frecuentes las reuniones militares en las que es necesario comunicarse con varios centros nacionales e internacionales.

Como anécdota, aunque no lo fue porque se trató de una complicada operación en la que el menor error podía provocar el caos, apuntar que en el búnker de La Moncloa, el 31 de diciembre del año 2001, se encerró un equipo de expertos al frente del cual se puso el vicepresidente del Gobierno,

Francisco Álvarez Cascos. Pasaron allí la noche en vela y la mañana siguiente para coordinar la puesta en circulación del euro a partir de las cero horas del día 1 de enero del año 2002. Desde el búnker de La Moncloa se hizo el seguimiento pormenorizado del cambio de la peseta al euro. Eso obligaba a mantener el contacto entre los distintos organismos estatales que intervenían en la operación, que se ponía en marcha en toda España y en los países de la UE que habían suscrito el cambio de moneda. Todo debía estar a punto para actuar en el mismo instante en el que pudiera surgir un problema, así como garantizar que los suministros de la nueva moneda llegarían a donde debían llegar y en el momento previsto.



Fraga y Fidel Castro, a gritos

Pocas veces han existido dos políticos más viscerales, más opuestos en ideología y al mismo tiempo con tantos puntos en común: Fidel Castro y Manuel Fraga Iribarne, dos temperamentos llamados a entenderse... y a chocar.

Manuel Fraga era hijo de un gallego que emigró a Cuba y allí se casó con una navarra con la que tuvo doce hijos. El político español que durante años aspiró, sin éxito, a la presidencia del Gobierno de España, y que se convirtió en el más carismático de los presidentes de su tierra, Galicia, vivió en Cuba desde los dos a los cuatro años, cuando regresó con sus padres definitivamente a Villalba, Lugo. Fidel Castro, por su parte, era hijo de un emigrante gallego, de Láncara, una aldea de Lugo, y de la misma manera que Fraga siempre ansió regresar a la tierra en la que había vivido parte de su infancia, Fidel siempre quiso conocer la tierra de origen de su familia. No era fácil: a los dos les separaba no solo un océano, sino sus propias historias personales y políticas. Sin embargo, les unía el tesón y el afán de hacer lo que siempre habían querido.

Fidel no tenía más obstáculo para viajar a España que la incomodidad que su visita podía provocar en las autoridades españolas, que no acababan de cursarle una invitación formal. Así que el presidente cubano, que no aceptaba un «no» por respuesta —o una ambigüedad calculada para no caer en el «no»—, no se arredró y en el año 1984, cuando regresaba a La Habana tras un viaje a Moscú, se «inventó» una escala técnica en el aeropuerto de Barajas que provocó una reunión con Felipe González y una rueda de prensa en el propio aeropuerto. Luego, en el año 1992, participó en la Cumbre Iberoamericana que se celebraba en España, la cual culminó con una visita a

la Expo de Sevilla, desde donde se trasladó a Santiago para visitar su tierra de origen. Allí fue el invitado especial de Manuel Fraga Iribarne, presidente gallego, al que había conocido un año antes, cuando Fraga se había plantado en Cuba a pesar de las reticencias del presidente de su partido, José María Aznar, que no quería saber nada de Fidel. Pero la cabezonería de Fraga, que utilizó como argumento que un presidente del gobierno de Galicia tenía que conocer cómo vivían los gallegos en otros países, se impuso sobre la contrariedad que provocaba a Aznar ese viaje, tan mal visto por la comunidad cubana de Miami, con la que el PP mantenía lazos políticos muy estrechos. Aznar, por otra parte, nunca se habría atrevido a poner límite a las iniciativas de Fraga y mucho menos a prohibírselas: por respeto al fundador del partido y probablemente por temor a su reacción, que solía ser visceral y con gritos de por medio si hacía falta. Fraga, siempre respetuoso con las formas y que además nunca dio puntada sin hilo, había comunicado con antelación sus intenciones al rey, al presidente Felipe González, al presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y también al presidente de los Estados Unidos, George Bush. Todos ellos le dieron luz verde, incluso el norteamericano.

Fue un viaje sorprendente por la simpatía mutua que desde el primer momento se demostraron los dos dirigentes políticos, conservador uno, comunista y dictador el otro, y por el trato que dispensó Fidel Castro a quien consideraba su invitado de honor, al que dio tratamiento de jefe de Estado hasta el punto de que estaba en el aeropuerto de La Habana cuando aterrizó el avión de Fraga —con varias horas de retraso debido a una avería— y le acompañó casi permanentemente durante los días que duró su estancia en Cuba. Aparecía de improviso y mantenían conversaciones inacabables; la mayoría de ellas de tipo político, pero también otras que sorprendían a sus acompañantes. La misma noche de la llegada Fidel acompañó a Fraga a la Villa Laguito, la casa de protocolo que de forma habitual se reserva para las visitas de Estado. Mientras el séquito de Fraga tomaba una cena ligera, los dos presidentes, el cubano y el gallego, se encerraron a solas en una sala aparte. Se les oía, pero tanto los españoles como los cubanos hacían como que estaban muy pendientes del cambio de impresiones con sus respectivos interlocutores. Unos y otros hacían alarde de que no se debía escuchar lo que ocurría en el cuarto de al lado, donde presumiblemente Castro y Fraga hablaban de sus planteamientos políticos.

Sin embargo, pronto se vio que algo no iba bien. El tono de los presidentes era cada vez más alto y los rostros de incomodidad y de preocupación en los

dos séquitos ya no se podían disimular. Los gallegos sabían hasta dónde podía llegar el carácter temperamental de Fraga, y los cubanos conocían también la furia con la que podía responder el Comandante. Aquello iba a peor: al tono alto le sucedieron los gritos y los miembros de los dos séquitos se quedaron sin habla, mudos, a la espera de acontecimientos. De pronto se escuchó algo parecido a un golpe sobre la mesa y la voz de Fraga que decía: «¡¡¡Pues en las fiestas de San Froilán, uno de Villalba reventó cuando tomaba la tapa ochenta y dos!!!». Y con un tono más suave pero perfectamente audible se oyó decir a Fidel: «Me gana usted».

Aquel viaje fue un éxito, Fidel se volcó con Fraga y los dos disfrutaron de sus muchos puntos de coincidencia a pesar de que eran muy distintos en todo lo relacionado con sus ideas políticas y sociales. Como ocurre con las personas de fuerte personalidad, los polos opuestos se atraen y se produjo una enorme empatía entre ellos.

El propio Fraga contó a esta periodista sus impresiones de aquella visita que para él tuvo una enorme carga emocional: «Una de las veces vino a buscarme a la casa de hospedaje oficial para llevarme a dar un paseo en barco. En el coche llevaba la metralleta junto a los pies. Nos apartamos del camino porque quería enseñarme una plantación y luego me mostró su refugio, el lugar donde se encerraba para descansar. Navegamos, paseamos un poco y comimos en su yate, un antiguo barco militar ruso reconvertido. Ahí conversamos a fondo de todos los temas que yo quería tratar con él, desde la situación interna de Cuba hasta el bloqueo de los Estados Unidos, las relaciones con España o la situación de los gallegos en Cuba. En un buen tono, debo confesarlo».

Mismo tono que no se produjo meses después. Al finalizar el viaje a La Habana Fraga invitó a Castro a visitar Galicia para conocer así la tierra de sus ancestros e insistió en que debía hacerlo cuanto antes. Y lo hizo. Como hemos mencionado, en cuanto acabó la Cumbre Iberoamericana del año 1992 y la visita a la Expo de Sevilla de los jefes de Estado y de Gobierno que habían acudido a la ciudad andaluza, el avión de Fidel puso rumbo a Santiago. Fraga quería que Castro, en su primer viaje a Galicia, se sintiera tan bien como él lo había estado en Cuba. El dirigente cubano visitó Láncara, donde todavía vivía una prima suya, recorrió Galicia, comió copiosa y deliciosamente, bebió los mejores vinos, conoció las joyas artísticas y naturales de la tierra de sus padres y la sonrisa no desapareció de su rostro ni un momento. Todo iba como la seda entre los dos políticos, igual que había ocurrido en Cuba. Los malos

pronósticos no se habían cumplido. Fraga y Fidel eran capaces de conversar y de sentirse cómodos juntos a pesar del mundo y la ideología que les separaba. Hasta que el último día todo se vino abajo.

La noche anterior al fin del viaje Fraga invitó a Castro a cenar en Santiago, en el Hotel Araguañey, y le propuso que se sumara a la cena Mario Vázquez Raña, hijo de un gallego de Avión, Orense, que había emigrado a América en los años veinte del pasado siglo y que había logrado convertirse en un empresario de éxito. Su hijo Mario era uno de los empresarios más influyentes de México, entre otras razones por la amplitud de sus negocios, varios de ellos en el mundo de la comunicación y el deporte olímpico. Siempre había mantenido sus vínculos afectivos con Galicia, a donde viajaba periódicamente para disfrutar en familia en su mansión de Avión, lugar en el que residen o pasan sus vacaciones las familias de algunos de los empresarios mexicanos más conocidos, hijos y nietos de quienes habían salido de allí porque no encontraban más posibilidad de sobrevivir que emigrar a América.

La cena a tres en el Araguañey la ha contado Vázquez Raña —que falleció en el año 2015— con pelos y señales. No siempre un hombre tiene la oportunidad de ser testigo único del choque de dos fuerzas de la naturaleza. No un huracán y un tornado, sino Fidel Castro y Manuel Fraga Iribarne. Vázquez Raña explicó después que tenía la sensación de que, como al día siguiente finalizaba la visita de Fidel, Fraga se sentía incómodo porque no había tenido la oportunidad de decirle a Castro lo que pensaba de la dictadura cubana; así que en esa cena, último acto del programa, empezó a hablarle de la falta de democracia en Cuba, de la detención de quienes no compartían su política, de la falta de libertades y de cómo estaba llevando al pueblo cubano a la miseria. Le conminó para que pusiera en marcha cuanto antes el proceso que llevaría a la democracia y lo hizo en un tono que a Fidel le llenó de ira. Según Vázquez Raña, nadie había hablado a Fidel con tanta contundencia, abordando las cuestiones que todo el mundo criticaba a sus espaldas.

Según Vázquez Raña, que no pronunció palabra mientras duró la discusión, el rostro de Fidel Castro enrojecía de ira por segundos, mientras trataba de interrumpir a un Fraga que no estaba dispuesto a que nadie le quitara la palabra. Fidel se levantó de la silla y consiguió pronunciar una frase de protesta mientras Fraga seguía encadenando reproches, Castro trataba de hacerse escuchar alzando más la voz hasta que Fidel se levantó y se fue. Hay discrepancia de versiones. Unos dicen que el encuentro terminó allí mismo con una frase lapidaria de Fraga: «Adiós, comandante. ¡¡Nos veremos en el

infierno!!». La otra versión asegura que esa frase la pronunció Fraga en el aeropuerto, al despedir a un Castro que se marchó horas antes de lo previsto, pues se fue a Lavacolla directamente desde el hotel donde se había celebrado la tormentosa cena. Pero las dos versiones coinciden en que Fraga pronunció esa frase hiriente al hombre que en Cuba, y fuera de Cuba, nadie se atreve a levantar la voz.



Los ¿chistes? de Aznar

Aznar tenía un complejo cuando era presidente... y cuando dejó de serlo. No era especialmente grave, pero le hacía sentirse incómodo: no sabía contar chistes. Estaba rodeado de amigos que triunfaban en las citas sociales porque disponían de un amplio repertorio de chistes con los que provocaban carcajadas y se convertían en el alma de esas reuniones, con frecuencia aburridas. En fin, el propio Aznar debía de darse cuenta de que tenía fama de aburrido.

Lo era. Mientras fue presidente conseguía la atención de todos por su enorme poder y porque, además, cualquier historia o sucedido que contara era interesante, incluso importante. Como presidente del Gobierno sus interlocutores, nacionales e internacionales, se encontraban siempre en lo más alto y, por tanto, cualquier dato que diera Aznar sobre sus conversaciones con otros presidentes, con ministros, con los personajes de la cultura, la empresa, la banca o la Iglesia, siempre atraía la atención. No dejaba de ser algo que podía dar una pista sobre cómo iba el país, o Europa, o qué se cocía en los ambientes más selectos, los que solo conocen los privilegiados. Una vez que dejó La Moncloa mantuvo importantes relaciones dentro y fuera de España. Más bien fuera que dentro, porque entró en el circuito de conferencias de expresidentes que, con frecuencia, coincidían en foros y reuniones de todo tipo. Además entró también a formar parte del entorno de Rupert Murdoch, el magnate de la comunicación, lo que amplió considerablemente el círculo social del expresidente. Pero él seguía con la espinita de que no era un hombre al que la gente buscara con ahínco en cualquier encuentro. No provocaba las discusiones apasionantes que hacen que un personaje se convierta en eso, en

personaje. Y mucho menos provocaba las carcajadas que suponen el triunfo definitivo en fiestas y reuniones amenazadas por el aburrimiento.

Una vez que dejó la presidencia del Gobierno impuso como costumbre, al menos una vez al año y generalmente en Navidad, invitar a comer en Casa Ciriaco, enfrente del Ayuntamiento de Madrid, al grupo de personas que habían formado parte de su equipo de trabajo desde hacía años en el gobierno de Castilla y León, en la oposición y en la presidencia del Gobierno central. Desde su eterna secretaria Milagros —fallecida cuando Aznar ya había dejado La Moncloa— hasta sus conductores Estanis y Vilches, o los dos periodistas que le acompañaron un tiempo en esas etapas, Miguel Ángel Rodríguez y Paco de Diego, así como su eterno jefe de gabinete, Antonio Cámara. Algunos de ellos tenían un trato con Aznar que era casi familiar. De hecho Ana Botella era protectora indiscutible del grupo e incluso confidente o hasta cuidadora. Los periodistas que acompañaron a Aznar en un viaje oficial a un país asiático recuerdan cómo Botella no se separó de la cama de hospital en la que hubo que ingresar de urgencia a Antonio Cámara. En esos almuerzos anuales, ajenos a cualquier tipo de protocolo, la sobremesa se centraba siempre en ver quién contaba la historia más divertida, la anécdota más jugosa, el chiste más ingenioso. Todos se esforzaban en el repertorio, excepto Aznar. Sabía muy bien que tenía muchas virtudes, pero desde luego Dios no le había concedido la del sentido del humor. O al menos no sabe contar chistes.

Hasta que un día se cansó de reír con los demás y que nadie se riera con él. En 2008 llegó al almuerzo preparado para el evento. En el momento cumbre en el que empezaban a escucharse los primeros chistes, Aznar sacó unos folios y se puso a leer unos chistes que llevaba escritos. Con su tono habitual, monocorde, sin inflexiones de voz, como quien lee un discurso, ligando un chiste con otro. La escena era tan surrealista que los comensales no pudieron evitar las carcajadas. No por la gracia de los chistes, sino de la situación. Reían a mandíbula batiente. Ni escuchaban siquiera lo que leía Aznar, con imparable risa contagiosa, limpiándose los ojos de las lágrimas que no podían contener, incapaces de mantener la compostura. El presidente, feliz de comprobar que había triunfado, siguió con su lectura, convencido de que su selección de chistes era verdaderamente acertada. Un exitazo.



Futuros ministros: sorpresa, sorpresa

Los presidentes, todos ellos, han caído en la pequeña o gran vanidad de demostrar permanentemente que manejar los hilos del poder. Una de las actitudes que han utilizado para fomentar el halo de misterio que se supone a quien debe tomar grandes decisiones, las más importantes, ha sido fomentar el secretismo respecto a la elección de sus principales equipos: los de gobierno. En su afán de que no trascendieran sus intenciones han llegado a romper los nervios de más de una personalidad, de demostrados nervios de acero, que «sentían» que iban a ser llamados para ser ministros, incluso habían recibido alguna señal propiciatoria —o pensaban que era una señal— y que, sin embargo, no vieron satisfechas sus expectativas hasta el último minuto, cuando ya estaba a punto de sonar la campana que anunciaba que Presidencia, o el presidente en persona, se disponía a anunciar la lista de un nuevo gobierno.

El primero de Felipe González fue el que se esperaba, el que todo el mundo suponía. Formaban parte de él los hombres —solo había hombres— que le habían ayudado en los complicados años posteriores a su elección como secretario general en Suresnes y durante los primeros años de democracia en los que, desde las primeras elecciones, las de 1977, se convirtió en líder de la oposición. Allí estaban en aquella aventura de primer gobierno socialista, respaldado por aplastante mayoría absoluta, desde Alfonso Guerra hasta Miguel Boyer, pasando por Javier Solana, José María Maravall, Joaquín Almunia, Narcis Serra, Carlos Solchaga... No hubo sorpresas, era «la gente» de Felipe, aunque algunos de ellos no le habían acompañado después de Suresnes, cuando se llamaba «Isidoro». Un Isidoro

clandestino al que controlaba la policía de Franco cuando dejó su Sevilla natal para vivir en Madrid, donde el partido le metió en un lugar que era poco más que una habitación en un piso del centro de la ciudad; ni siquiera contaba con un baño propio, algo habitual para otros vecinos en su misma situación.

De allí lo sacó el empresario Enrique Sarasola, uno de los mejores amigos de Felipe González hasta el día en que murió. Sarasola se quedó espantado ante la vivienda que había buscado el PSOE para su nuevo secretario general. Pocos fueron los socialistas madrileños que aceptaron de buen grado y desde el primer momento a Felipe González tras ser elegido secretario general en Suresnes, y entre ellos destacaban los hermanos Javier y Luis Solana. Con el tiempo se formó el grupo de incondicionales que ayudó a González en su peripecia política en la oposición. Y ocuparon los más importantes ministerios cuando ganó las elecciones de 1982. No hubo, por tanto, sorpresas. Ni siquiera lo fue Fernando Morán, diplomático preparado para ocupar la cartera de Asuntos Exteriores —donde dio algún que otro problema al presidente— y que había ejercido un papel destacado en el PSP de Tierno Galván que fue engullido por el PSOE junto a otros grupos socialistas.

Fue años más tarde cuando Felipe González descubrió que tenía «su punto» alentar la rumorología respecto a sus intenciones cada vez que remodelaba sus gobiernos o unas nuevas elecciones obligaban a nombrar uno nuevo. Sin embargo, nunca asombró con un ministro o ministra que provocara desconcierto por su trayectoria o porque no se le conocía vinculación con el socialismo o con Felipe González. La sorpresa estaba, en todo caso, porque sus nombres no habían aparecido nunca en las listas de «ministrables», que siempre proliferan en los días previos a que se produzcan nombramientos... o determinados «comunicadores» piensan que se van a producir.

Sí produjeron sorpresas algunas ausencias, como ocurrió con Enrique Múgica en el año 1982. Todo el mundo daba por hecho, incluso él mismo, que formaría parte del primer gobierno de Felipe González, pero quedó fuera hasta 1986, cuando González le nombró ministro de Justicia. Se contaba en círculos socialistas, a finales de 1982, que Felipe González contaba a su vez que, en los días previos a su toma de posesión como presidente, al llegar un día a casa, muy tarde, encontró a Múgica esperándole delante de la puerta, en su coche, porque quería saber si le iba a hacer ministro. Si es cierta la historia sobre González y Múgica solo ellos lo saben, pero se ha mencionado a menudo como ejemplo de la forma en que los presidentes se sienten presionados por sus amigos..., y los amigos se sienten decepcionados por la

actuación de aquellos a quienes consideraban amigos y no les cogen el teléfono cuando quieren saber si cuentan con ellos como compañeros de viaje.

Si desde el entorno de Felipe trascendió esta historia que no deja en buen lugar a Múgica —ni a quien la dio a conocer—, peor es lo que contaba Zapatero —y lo contaba a todo el que le quería escuchar— que una de las razones por las que nombró ministro de Justicia a Juan Fernando López Aguilar fue porque se lo suplicó con lágrimas en los ojos. No fue bien tratado López Aguilar por un Zapatero que, además, adelantaba a los periodistas abiertamente que abandonaría el ministerio pues pensaba mandarle a Canarias como candidato a la presidencia del gobierno regional. Cuando López Aguilar leyó la noticia —tan contrastada que procedía del propio presidente—, el ministro no dudó en abordar a quienes la habían escrito para decirles que no era cierta, que se lo había preguntado al presidente en persona y que Zapatero le respondió que si quería ir. López Aguilar le respondió que no —siempre según su versión—, entre otras razones porque tenía pendientes unas reformas judiciales que le gustaría culminar. Zapatero le tranquilizó diciéndole que entonces seguiría como ministro. A los dos días se anunció oficialmente que sería candidato a la presidencia del gobierno canario. Se comprende así que haya tantos hombres y mujeres importantes que hayan salido desencantados de la política.

Los nervios ante una posible crisis de gobierno, ya mencionados, se acrecientan cuando sin haber pensado nunca que existía la posibilidad de ocupar una cartera ministerial porque no se ha recibido ninguna señal en ese sentido, ni aparece en las quinielas, de pronto le llega a alguien el rumor de que el presidente ha pronunciado su nombre. Ocurrió en el año 1993, cuando el presidente Felipe González tardó unos días en concretar el Gobierno. Llamaba uno a uno a los ministros y les pedía discreción, pero algunos de ellos no tuvieron ningún pudor en contar lo que sabían a los periodistas de confianza, pensando, con razón, que otros ya tanteados por Felipe González también se irían de la lengua. Uno de los llamados por el presidente le preguntó si se iban a producir muchos cambios y él le adelantó alguno, entre ellos que quería contar con una persona que hasta entonces no había tenido ningún cargo político aunque era muy conocida por su trayectoria profesional. Un periodista que llevaba todo el día colgado al teléfono para saber cómo se estaban desarrollando las conversaciones para formar gobierno habló con este hombre, ministrable, para ver si efectivamente iba a formar parte del nuevo gabinete. Lo encontró exultante, lo que provocó que el periodista le preguntara

si conocía algún nombre seguro más, si Felipe González le había hablado de otros ministros. Y, en su euforia, le dijo lo de ese nuevo ministro, al que llamaremos «C».

Le faltó tiempo al periodista para llamarle con el mismo objetivo, que le diera más nombres para ir completando la lista. El caso es que C. no sabía nada, ni de él ni de nadie, y se quedó perplejo cuando supo que Felipe González contaba con él. «¿Pero es seguro? Me voy de viaje a pasar el fin de semana fuera. Si es seguro me quedo». «Pues mejor que te quedes». Se quedó. El domingo llamó al periodista: «Nada, no me ha llamado». El periodista se tiró a la piscina, porque podían haberse producido cambios de última hora: «Tranquilo, te llamará». Y le llamó al día siguiente.

En el futuro los presidentes fueron más cautos al informar sobre los cambios, incluso a la gente más cercana. Porque no fue la de C. la única filtración. José María Aznar presumía de apuntar los nombres de posibles ministros en un cuaderno azul, e incluso le comentó a Josep Piqué que tenía su nombre escrito en ese cuaderno desde que lo había conocido en una cena en casa de un conocido empresario en Barcelona. Le explicó que le había impresionado su forma de analizar la actualidad política y económica, su cultura y su sólida formación. ¿Sería verdad que en efecto apuntó su nombre o simplemente lo guardó en la cabeza? Alguien que ha tenido la oportunidad de ver el cuaderno azul del entonces presidente —o que Aznar decía que era su cuaderno azul— y que no desperdició la ocasión de abrirlo y echar un vistazo, asegura que allí no tenía apuntada ninguna lista. Ni cosa parecida. Aznar fue quizá el presidente que más alarde hizo de sorprender con sus nombramientos y hay que confesar que lo consiguió.

Cada vez que anunciaba una remodelación o una crisis dejaba a alguien boquiabierto. Y a varios decepcionados en la cuneta. Su secretismo llegó a tal punto que cuando Loyola de Palacio dejó el Ministerio de Agricultura en 1999 para convertirse en vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Transportes y Energía, nadie del equipo de Aznar se preocupó por desmentir el rumor de que iba a ser sustituida por Elena Pisonero, en aquel momento secretaria de Estado de Comercio. Tanta credibilidad se dio al rumor que Pisonero llegó a recibir ramos de flores con tarjetas de enhorabuena. Hecho que se propagó inmediatamente y dio más fuerza a lo que algunos consideraban ya noticia confirmada, aunque Pisonero seguía sin recibir ninguna llamada.

Al mediodía de la jornada en que se iba a anunciar el nombre del sustituto de Loyola de Palacio en Agricultura, un grupo de mujeres periodistas, que en aquellos años se reunían de forma regular con políticos, almorzaba con Aznar en La Moncloa. En la mesa estaban, además de las seis periodistas, el secretario de Estado de Comunicación, Pedro Antonio Martín Marín, y el presidente. Tras analizar los hechos más candentes de la actualidad preguntaron a Aznar por el nombre del nuevo ministro o ministra. Nada. Pronunciaron el nombre de Pisonero. Nada. Pero tanto Aznar como «PAM» — como se le conocía— sonrieron sin pronunciar palabra, y las periodistas salieron de La Moncloa convencidas de que aquella sonrisa significaba que sí, que sería Elena, porque en caso contrario Aznar lo habría desmentido, dado que el almuerzo era con el compromiso previo de no poner nada en boca del presidente. Salieron con PAM por una puerta lateral porque así llegaban directas a la parte del jardín donde habían dejado los coches. Era una excusa: las sacaron por allí porque si hubieran salido por la principal, por donde entraron, habrían encontrado a Jesús Posada, que había sido llamado por el presidente precisamente para ofrecerle la cartera de Agricultura.

También a Rajoy le gusta el secretismo, pero cuando llegó a presidente — el sexto de la democracia— ya se había asumido que quienes se las daban de estar al corriente de los cambios de gobierno corrían el riesgo de hacer el ridículo. Rajoy, como había ocurrido con Zapatero —que ofreció a Alfredo Pérez Rubalcaba la vicepresidencia apenas dos horas antes de anunciarla—, la mayoría de las veces llamó a los que tenía en mente el mismo día en que se iba a hacer pública la lista. José Ignacio Wert fue uno de ellos. En todas las quinielas figuraba como director general de RTVE *in pectore*, pero por combinaciones de última hora acabó en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. No dejó buen recuerdo, a pesar de que en sus sucesivas etapas de diputado, sociólogo reputado y profesor de universidad mantenía excelentes relaciones con gran parte de la clase política, tanto de su partido, el PP, como del socialismo. Y también con buena parte de los periodistas, entre otras razones porque con muchos de ellos había mantenido relaciones profesionales cuando dirigía una de las empresas demoscópicas más renombradas.

No pasaron muchos meses hasta que enseñó su cara menos agradable. Aceptaba mal las críticas y su proyecto educativo lo impuso —o lo impuso Rajoy— sin haberlo consensuado suficientemente. Además aparecieron unos aires de arrogancia que hasta entonces eran inéditos en él. Se enamoró de la secretaria de Estado de Educación, con la que mantuvo una relación estable

durante su etapa de ministro, hasta que se casaron en el verano de 2015. Montserrat Gomendio había dejado el cargo unas semanas antes, al lograr una importante plaza en la OCDE, lo que la obligaba a residir en París. Desde ese momento José Ignacio Wert aspiró a ocupar la embajada de España en ese organismo y no cejó en su empeño a pesar de las críticas que provocó la noticia. No era diplomático, pero él argumentaba que esa embajada, en ocasiones anteriores, había sido para exministros que tampoco eran diplomáticos de carrera. Olvidaba decir que en efecto así había sido, pero se trataba de ministros que habían dejado el Gobierno al producirse remodelaciones o quedaban fuera tras unas nuevas elecciones. En ningún caso por cuestiones de índole personal, como ocurría con Wert. Ante las críticas unánimes, que procedían incluso de su propio partido, pues no había forma de «vender» ese capricho —mucho menos cuando su Ley de Educación entraba en vigor dos meses más tarde en medio de una fuerte polémica y, además, se iban a celebrar unas elecciones generales tres meses después—, Rajoy le pidió un tiempo mínimo antes de tomar la decisión. Wert no se lo dio. Incluso empezó a desmontar su despacho, de donde se llevaba sus cosas personales ante el estupor de sus colaboradores, que no comprendían su actitud. Rajoy, como ocurrió en otras ocasiones en las que se dejó llevar por criterios personales más que políticos —lo que siempre le ha pasado factura—, firmó finalmente su cese como ministro y su nombramiento como embajador en París. Un cargo con un magnífico sueldo muy superior al del propio presidente de Gobierno y una lujosa residencia en uno de los barrios más señeros de la capital francesa.

Sin que se apaciguaran las críticas empezaron las cábalas sobre quién sería el sustituto. Tampoco acertaron los agoreros, aunque en esta ocasión apenas circularon nombres, porque el relevo se produjo en muy corto espacio de tiempo y porque una vez más Rajoy asombró con su elección: Íñigo Méndez de Vigo, de larga trayectoria en política exterior, por lo que habitualmente aparecía en las listas de ministrables, pero siempre como titular de Asuntos Exteriores, nunca en otra cartera. De hecho, cuando Rajoy le ofreció la cartera de ministro era secretario de Estado para la Unión Europea. Su designación, como en otras ocasiones, tuvo algo de rocambolesca. Precisamente por su cargo era acompañante habitual del presidente en sus viajes por Europa y sobre todo a los Consejos Europeos. Se conocían bien y Rajoy le consultaba mucho. Méndez de Vigo fue durante años uno de los más destacados miembros del Parlamento Europeo, ponente de la fallida Constitución europea y dirigente

de peso en el Partido Popular Europeo, donde hubo un conato para elegirle presidente en sustitución de Maertens, movimiento que fue abortado por algún miembro destacado del PP en el Parlamento Europeo que estaba celoso de su protagonismo.

Méndez de Vigo, de carácter extrovertido y con un sentido del humor que muchos de sus colegas califican de británico, siempre decía en broma que si un día era ministro debía ser de Educación, a pesar de que le adjudicaban Exteriores, porque se consideraba hombre educado y muy culto. Después de las elecciones municipales, cuando todo el mundo andaba a vueltas con la idea de que Rajoy iba a hacer importantes cambios en el Gobierno para afrontar las elecciones generales en mejores condiciones, el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, brazo derecho de Soraya Sáenz de Santamaría, había provocado una gran polémica al declarar que Rajoy iba a hacer crisis y que sería profunda. Coincidió la polémica con un viaje de Rajoy a Bruselas, en el que le acompañaban Méndez de Vigo y la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro. Le advirtió que a lo mejor los periodistas le preguntaban si sabía algo de la crisis. Méndez de Vigo no tenía ni idea de nada, así que no le preocupaban los periodistas, porque nada les podía decir. Tenía otras preocupaciones en la cabeza. Una, la redacción del discurso de Rajoy en la cumbre, que había preparado con Álvaro Nadal. Otra, la redacción de un texto para Rajoy que iba a presentar la propuesta para que la Unión Europea concediera la medalla de Ciudadano Europeo al expresidente de la Comisión, Jacques Delors, sobre la que ya había consenso a pesar de que se temía el veto de Hollande —Delors es el padre de Martine Aubry, que en varias ocasiones se había mostrado como una fuerte rival de Hollande en el PSF—. Y una tercera preocupación, menor, era que una arquitecta italiana había logrado una medalla del Ministerio de Cultura por sus trabajos en España y su mujer —la de Méndez de Vigo—, que era muy amiga de la arquitecta, le había pedido que hablara con Wert para que se la entregara él personalmente. Insistía en ello porque Méndez de Vigo todavía no había tenido oportunidad de hablar con el ministro.

Al rato de llegar a Bruselas le llamó Rajoy y pensó que quería saber algo sobre los discursos, pero el presidente le lanzó un «Te voy a nombrar ministro de Educación. ¿Aceptas?». La respuesta fue inmediata: «Sí». Rajoy le pidió que no dijera nada a nadie porque tenía que informar al rey una vez que ya tenía su aceptación. Y no dijo nada a nadie, ni siquiera a su mujer. Esa noche fue a cenar con Carmen Martínez Castro y con Álvaro Nadal a una pizzería, lo

que chocó a ambos —lo contaban después— porque Méndez de Vigo siempre les indicaba pequeños y exquisitos restaurantes fuera del circuito habitual que conocía bien por los muchos años que había pasado en Bruselas como eurodiputado. Pero les había llevado allí porque si se producía la noticia tenía que salir inmediatamente. Cuando empezaban a cenar, Carmen recibió una llamada en su móvil. Era Rajoy. Méndez de Vigo y Nadal solo oyeron decir a Carmen: «Sí. Ah. Me ocupo». Y sin mirar a ninguno de los dos les dijo que se tenía que ir sin tomar su pizza. Nadal no sabía de qué se trataba. Méndez de Vigo sí. Tranquilamente se comió su pizza y la de Martínez Castro. Más tarde llamó a su mujer para decirle que estaba solucionado lo de la entrega del premio a su amiga italiana: «Se lo voy a dar yo».

En la mayoría de los casos fue Rajoy quien ofreció las carteras ministeriales, sobre todo cuando se trataba de personas con las que tenía mucha confianza y sabía que comprenderían su escasa disponibilidad de tiempo para encajar el puzle de la formación de gobierno, localizar a las personas con las que quería contar y explicarles su proyecto. Cuando se trataba de colaboradores que más o menos intuían que formarían parte del equipo —por su estrecha relación con Rajoy y por ocuparse de asuntos muy concretos que se habían incluido en el programa electoral probablemente les incorporaría en el futuro gobierno—, era la secretaria general, María Dolores de Cospedal, quien hacía las llamadas por encargo de Rajoy, sabiendo que la otra parte comprendería a la perfección que el presidente estaba atareado y con falta de tiempo.

Cospedal, por ejemplo, llamó a Luis de Guindos, que figuraba en todas las quinielas como ministro de Economía, incluso con una vicepresidencia. Luis de Guindos había trabajado intensamente para el partido desde los tiempos de Aznar. Formó parte de su gobierno como secretario de Estado de Economía y después fue una de las personas más cercanas a Rajoy en los años de oposición. La secretaria general le preguntó su disponibilidad para entrar en el Gobierno, sabiendo que De Guindos era un hombre profundamente vinculado al partido, pero que en su actividad privada ganaba mucho más, muchísimo más que como ministro. Sin embargo, Guindos fue muy claro: «Sí, aunque sea de Marina». Alusión al personaje que respondió con esa frase cuando le preguntaron si deseaba formar parte del gobierno de Franco, donde había tres ministros, uno para cada uno de los tres Ejércitos.

Curioso fue el caso de José Lladó, ministro de Comercio en el primer gobierno de Adolfo Suárez; un gobierno llamado de «penenes» (los profesores

no numerarios) para intentar desprestigiar a un Suárez designado, no elegido, y que no había mantenido a algunos de los políticos que pensaban que iban a tener un papel fundamental tras la muerte de Franco. Uno de ellos, José María de Areilza, estaba tan convencido de que iba a ser el hombre al que el rey nombraría presidente que incluso tenía champán en la nevera para celebrar la noticia. Ni siquiera figuró en la terna presentada por el Consejo del Reino. El rey don Juan Carlos no había «trabajado» para que así fuera. Un par de periodistas se encontraban en el domicilio de Areilza, invitados por el todavía ministro de Asuntos Exteriores, con el objeto de ser testigos de la emoción con la que recibiría la llamada del rey anunciándole que era presidente.

José Lladó, que cesó al celebrarse las elecciones de 1977, las primeras de la democracia, había convocado en su casa a colaboradores y amigos para tomar una copa con la que poner fin a su etapa como miembro del gobierno de Suárez. Recibió una llamada y se excusó con sus invitados para atenderla, pues le dijeron que era de La Moncloa. En ella Suárez le ofrecía la cartera de Transportes en el nuevo gobierno que estaba configurando. Lladó le contó que en ese momento estaba poniendo punto final a su trayectoria como ministro, pero que estaría encantado de seguir colaborando con él en una nueva etapa que se adivinaba apasionante tras la elección de un nuevo parlamento en el que, ahora sí, estarían representadas todas las fuerzas políticas y en el que se sentarían los hombres y mujeres que pondrían en marcha el proceso que culminaría con una nueva Constitución.



Enemigos pero también amigos

*E*n tiempos de la Transición los dirigentes políticos reservaban toda la dureza dialéctica y la estrategia política para tratar de desacreditar al adversario; pero en cuanto se apagaban los focos, se cerraban los micros o acababa el debate parlamentario, los mismos que se habían expresado con tanta contundencia, e incluso con palabras descalificadoras, eran capaces de mantener una charla serena sobre los asuntos de Estado. Esa fue la grandeza de esos años que han hecho historia.

Es curioso que el hecho generacional ha pesado más en las relaciones entre presidentes que las siglas de los partidos. Con toda seguridad Felipe González tenía más puntos de coincidencia con Leopoldo Calvo-Sotelo que con Rodríguez Zapatero, y a pesar de la acritud con que ejerció la oposición a Adolfo Suárez, estuvo muy cerca de él los años difíciles de la enfermedad de su mujer y de su hija. Y siempre mantuvo el contacto con su familia cuando Suárez dejó de tener la cabeza en este mundo, aquejado de la dolencia degenerativa que le hizo perder la memoria. En cambio nunca fueron estrechas las relaciones entre González y Aznar, debido fundamentalmente al carácter especial del segundo, que, por otra parte, tampoco tuvo con Rajoy unas relaciones que fueran más allá de lo que marcan los modos de la cortesía entre dirigentes de un mismo partido.

Felipe González, por ejemplo, acudía con cierta frecuencia a La Moncloa en tiempos de Calvo-Sotelo, un hombre de carácter abierto y expansivo a pesar de la fama de «marmolillo» a la que contribuyeron el dibujante Peridis y la acidez dialéctica de Alfonso Guerra. Calvo-Sotelo sabía que su mandato sería breve porque la UCD se desmoronaba a ojos vistas. También sabía que Felipe González ganaría sobradamente las siguientes elecciones y sería

presidente del Gobierno. Por eso le convocaba de vez en cuando para hablar de los problemas graves que tenía España, pues era consciente de que le correspondería a González dar continuidad a las iniciativas que él había emprendido para tratar de solucionarlos o, al menos, apaciguarlos. No logró, sin embargo, convencer a Felipe González de la necesidad de integrar a España en la OTAN. Pero, una vez en La Moncloa Felipe comprendió que sería muy negativo para España abandonar esa poderosa organización militar —y también política—, por lo que tras exponer las razones que le hacían cambiar de opinión, convocó un referéndum para que los españoles tuvieran oportunidad de pronunciarse.

González mantiene una aceptable relación personal con Mariano Rajoy, iniciada en los tiempos en que Rodríguez Zapatero era presidente y Rajoy líder de la oposición. Una relación que se mantuvo cuando Rajoy logró, finalmente, ganar las elecciones en el año 2011 por mayoría absoluta y convertirse en presidente. También en esos tiempos de Rajoy en La Moncloa estableció puntos de acercamiento con Rodríguez Zapatero, después de tanta crispación y distancia política y personal cuando era este el presidente y tomó decisiones que echaban abajo algunos de los proyectos que habían sido importantes para los gobiernos de Aznar, de los que Rajoy formaba parte.

Un lazo de unión de los presidentes, además del hecho en sí de haber compartido responsabilidades cuyo peso solo ellos conocen, fue el rey don Juan Carlos, que como se ha contado siempre hizo el esfuerzo de establecer una relación muy cercana con todos. Aunque es un secreto a voces que Felipe González es el más próximo y José María Aznar el que siempre trató de marcar distancias con el jefe del Estado. Pocas semanas después de la abdicación, Rajoy llamó a González, Zapatero y Aznar y organizó una cena con don Juan Carlos en Casa Lucio, uno de sus restaurantes favoritos. El restaurador, buen amigo además, les preparó una mesa en el comedor de la planta baja, con el resto de los clientes, que quedaron asombrados de la cordialidad y el buen humor que se adivinaba en esa mesa verdaderamente insólita y muestra palpable de cómo la política aleja, pero los sentimientos, en este caso el afecto y el respeto al rey, unen.

La noche del debate electoral en el que Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se midieron las caras, moderados por el periodista Manuel Campo Vidal, lo que más sorprendió a los que conocían las reglas del juego que habían imperado durante años fue la virulencia con la que el candidato socialista atacó al presidente del Gobierno. Sobre todo cuando mencionó el caso Bárcenas y le

dijo a Rajoy que tenía que haber dimitido dos años antes, para añadir que: «Si usted sigue siendo presidente, el coste para nuestra democracia será enorme. El presidente tiene que ser una persona decente y usted no lo es». Un Rajoy claramente herido, además de desconcertado por el ataque, le espetó un «¡hasta aquí hemos llegado!» que hizo pensar a la mayoría de los telespectadores que se iba a levantar de la silla y abandonar el plató, pero se quedó para defenderse: «Soy un político honrado. Usted es joven y va a perder estas elecciones, pero de eso se puede recuperar uno. De lo que no se puede recuperar es de la afirmación ruin, mezquina y miserable que ha hecho usted aquí. Si tiene usted algo contra mí, lléveme a un juzgado».

Una de las personas que ayudó a Sánchez a preparar aquel debate fue Alfredo Pérez Rubalcaba, pero en el entorno del entonces secretario socialista comentaban que Sánchez llevó el debate a su aire y no quiso disimular la enorme inquina personal que sentía por Rajoy, muy superior a la mera lucha política. Nada que ver con el trato que mantenía Rajoy con el antecesor de Sánchez en el PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. A pesar de la acritud de sus debates parlamentarios y de sus respectivas declaraciones, en el plano personal o cuando debían tratar sobre cuestiones de Estado —que necesariamente deben situarse por encima de las tensiones y rivalidades entre partidos, algo que comprendieron muy bien los dirigentes de la Transición, y menos bien, o nada, los políticos de nueva hornada—, Rajoy y Rubalcaba eran capaces de entenderse. Este último comentó en más de una ocasión que Rajoy le caía bien, aunque era consciente de que le engañaba con frecuencia. Pero le engañaba «con gracia». Por lo general hablaban primero de fútbol cuando mantenían reuniones a dos —muchas más de las que trascendieron, muchísimas más, aparte de las conversaciones telefónicas— e intercambiaban puntos de vista sobre su equipo, el Real Madrid. Esto les servía para suavizar cualquier tensión.

Entre los engaños que sufrió Rubalcaba por parte de Rajoy, hubo uno que a lo mejor no le hizo tanta «gracia»: pactar el nombramiento del nuevo director general de RTVE, un cargo que suele provocar más polémica que el ministerio más influyente. Todos los partidos políticos son conscientes del inmenso poder de la televisión pública a la hora de potenciar o hacer caer la imagen de un partido o de un dirigente político. En ese pacto que alcanzaron sin excesivos problemas —pues se pusieron de acuerdo sobre un profesional gallego al que Rajoy conocía bien y que a Rubalcaba no le pareció mal—, pactaron también que no se haría público el nombre del sujeto hasta después de las elecciones

andaluzas, para no interferir en la contienda. Rubalcaba cumplió escrupulosamente el compromiso de no decírselo a nadie, pero en un debate parlamentario posterior, el presidente acusó con duras palabras a Rubalcaba de haber bloqueado el nombramiento del director general de RTVE, lo que había impedido hasta el momento la elección del que debía sustituir al nombrado durante el gobierno de Rodríguez Zapatero. Rubalcaba calló, pero en cuanto terminó el debate le faltó tiempo para llamar por teléfono a Rajoy y decirle de todo y malo. Rajoy ni se inmutó. Por cierto, el nuevo director general no fue finalmente el que habían pactado entre los dos. Cosas de la política..., y de la guerra de influencias en el gobierno de Rajoy.

No fue el único engaño. Cuando Rubalcaba lanzó la idea de una reforma constitucional para diseñar una España federal que pudiera apaciguar el problema independentista catalán —idea que defendió Pedro Sánchez con uñas y dientes cuando sucedió a Rubalcaba en la Secretaría General del partido—, Rajoy, que mantenía una relación mucho más fluida con Rubalcaba que con Sánchez, le pidió un documento en el que expusiera en qué consistía exactamente la reforma constitucional que defendía el PSOE. Rubalcaba no lo dudó y le envió a La Moncloa unos folios en los que, además de su propia interpretación de la reforma constitucional, incluía los puntos fundamentales de lo que el PSOE llama la «Declaración de Granada», que salió del encuentro que mantuvieron en la ciudad andaluza los dirigentes del partido para abordar los problemas del modelo federal y qué puntos de la Constitución tendrían que ser revisados para adaptarla a los nuevos tiempos después de casi cuarenta años en vigor.

Poco tiempo después, en un nuevo debate parlamentario, Rajoy echó en cara al PSOE que no tenía proyecto de reforma constitucional, que los socialistas la querían abordar sin saber qué querían modificar y que jamás le habían dado un papel para analizar si el PP estaba de acuerdo con esa reforma. Unos días más tarde Susana Díaz tenía previsto un encuentro con Rajoy, y Rubalcaba le pidió que le dijera de su parte que nunca jamás se reuniría con él, por mentiroso. Que se reuniera con Pedro Sánchez si quería algo del PSOE. Volvieron a verse y a hablar por teléfono. Pero el presidente no volvió a mentir a Rubalcaba. O eso contaban los dos.

No ocurría lo mismo con José María Aznar. No ocurrió nunca. Jamás mantuvo buenas relaciones con los dirigentes de otros partidos. Y con los suyos... solo en algunos casos y en algunas ocasiones. Cuestión de carácter.

Dicho esto —y recogida la indignación de Rajoy por ser tachado de «indecente» por Pedro Sánchez en el único debate electoral mantenido entre los dos—, en el Congreso de los Diputados, en el hemiciclo, en el fragor de la batalla parlamentaria, se ha escuchado de todo. A raíz del mencionado debate electoral entre Sánchez y Rajoy un buen número de periodistas hurgaron en las hemerotecas para buscar los adjetivos utilizados por Rajoy cuando era líder de la oposición, y a esos periodistas se sumó Zapatero aportando nuevos datos sobre las frases que le había dedicado Rajoy cuando él era presidente. En un resumen somero, muy somero, encontramos que Mariano Rajoy, líder de la oposición, en diferentes debates parlamentarios dedicó sonoros epítetos a sus adversarios: «acomplejado», «veleidoso», «frívolo», «grotesco», «cobarde», «indigno», «chalanea con los terroristas», «se comporta como un *hooligan*», «da coces», «tiene la cabeza de adorno»...



Barones, con «B»

*H*a habido presidentas regionales, pero el título de «barón» solo se ha adjudicado a los varones, a los hombres, aunque algunas de las presidentas de gobierno regional han tenido en sus partidos un poder que para sí quisieran algunos barones. Por ejemplo, nunca Esperanza Aguirre fue llamada «baronesa», a pesar de lo que ha mandado. Eso sí, puede presumir de que en el PP e incluso fuera, cuando se decía «Esperanza» todos daban por hecho que se hablaba de ella, como si solo hubiera una Esperanza en el mapa español. A Susana Díaz, en el PSOE, con frecuencia se le ha llamado «la Sultana» por el poder omnímodo de los sultanes en Al-Ándalus, donde han dejado tan importante huella, igual que a Julio Anguita se le llamaba «Califa» por su origen cordobés.

Costó acostumbrarse a la existencia de los presidentes autonómicos, como a tantas otras figuras, después de cuarenta años de dictadura con un generalísimo y unos gobernadores que representaban el poder máximo en las provincias; como costó también acostumbrarse a los delegados de Gobierno y comprender las competencias de unos y de otros, que en muchos casos eran compartidas, o con sus límites escasamente definidos. Sobre todo en los primeros años posteriores a promulgarse la Constitución, cuando se diseñó la España autonómica y las competencias se fueron arrancando al Estado central poco a poco y no siempre de la misma manera y al mismo tiempo, lo que provocó importantes diferencias entre beneficios, obligaciones y derechos de los españoles en función de su lugar de nacimiento o de residencia.

Si costó a los ciudadanos asumir gobiernos regionales, parlamentos regionales y presidentes regionales, es comprensible que entre los extranjeros se produjeran equivocaciones y errores sobre el papel de los dirigentes

autonómicos. Como ocurrió, por ejemplo, con un periodista chino enviado especial a la España de la Transición. En febrero de 1981, con la imagen de los militares muy cuestionada por el llamado «ruido de sables» en un número importante de cuarteles, el gobierno de Adolfo Suárez —desprestigiado porque su partido, UCD, estaba completamente dividido— no conseguía luchar de forma contundente contra una ETA que acumulaba ya centenares de muertos y, además, no tomaba medidas efectivas contra quienes envenenaban el espíritu de lealtad propio de los Ejércitos.

En ese ambiente los reyes, Juan Carlos y Sofía, realizaron su primer viaje oficial al País Vasco. A pesar de que los responsables de seguridad de la Jefatura del Estado y del Gobierno llevaban tiempo aconsejando que no se fijara fecha, el rey quiso hacerlo porque no aceptaba que en su proyecto de viajar oficialmente a todas las regiones se excluyera al País Vasco, donde a su entender era más necesaria que nunca la presencia institucional. El presidente del gobierno regional era el peneuvista Carlos Garaicoechea, con el que don Juan Carlos mantenía una buena sintonía personal. Miembro del PNV, pocos años después protagonizaría una sonada escisión en el partido por discrepancias profundas respecto a los derechos históricos de Euskadi y fundaría Eusko Alkartasuna. Pero en el año 1981 era un dirigente de prestigio, no cuestionado y decidido a que aquella primera visita real fuera un éxito.

Se trataba de una situación complicada por lo que, además de numerosos reporteros españoles, se acreditaron también un grupo importante de periodistas extranjeros, incluso el ya citado, que vino desde China y que tomaba nota de forma minuciosa de todo lo que acontecía. Cada vez que disponía de unos minutos buscaba ansiosamente un teléfono o un teletipo para enviar una crónica. No existían teléfonos móviles en aquellos años, ni ordenadores en los que escribir y enviar textos pulsando una tecla, por lo que la manera de mandar sus reportajes era la principal preocupación de los periodistas cuando se encontraban fuera de la redacción. Sobre todo en los viajes a ciudades o países en los que no contaban con la infraestructura habitual.

El viaje no estuvo exento de incidencias. Nada que ver con los aplausos masivos a los reyes en otras provincias y regiones. En aquella visita se vivieron silencios clamorosos en unos casos, gritos de protesta en otros, ausencias y unas medidas de seguridad estudiadas al milímetro. Se sabía de antemano que podían producirse altercados en la Casa de Juntas de Guernica, donde Herri Batasuna contaba con representación parlamentaria. Y para los

que no lo sabían, al llegar a la sede, pudieron conocer de antemano que HB tenía preparada una algarada, porque el entonces delegado del Gobierno en el País Vasco, el general Sáenz de Santamaría —uno de los militares de mayor protagonismo durante la Transición—, explicaba a los periodistas españoles, a los que conocía bien, que estuvieran atentos, que iba a haber problemas pero que él personalmente garantizaba que los batasunos no iban a salirse con la suya y reventar el acto. Contaba también que estaban preparadas todas las medidas disuasorias, así como las de actuación inmediata.

La Delegación del Gobierno se encontraba perfectamente coordinada con el gobierno vasco y si era necesario estaban preparados para intervenir «los hombres de Berrozi». Un año antes se había creado la policía autonómica vasca, aún en germen, y en esos meses lo que sería su cuerpo especial se entrenaba en la localidad alavesa de Berrozi, a la espera de la sede definitiva de la Ertzaintza en el cuartel de Arkaute. Todo se cumplió según habían previsto los responsables de seguridad. En el momento en el que don Juan Carlos tomó la palabra, después del *lehendakari*, los parlamentarios de HB empezaron a lanzar gritos contra el rey. Los restantes parlamentarios trataron de acallarlos con aplausos, el rey pretendió minimizar la actuación de los batasunos haciendo el gesto de que no les oía bien y no tardaron en entrar los hombres de Berrozi, la policía vasca, para desalojar a los reventadores del acto.

El incidente de la Casa de Juntas fue recogido en todos los medios de comunicación del mundo. Eran años en los que la vida española, tanto en el plano político como económico y social, con transformaciones profundas en todos los terrenos, era seguida con la máxima expectación por todos los Gobiernos. La figura del rey provocaba gran expectación, así como la de Adolfo Suárez, al ser los dos los principales artífices del cambio. Por desgracia, también se estaba muy al tanto de lo que ocurría en el País Vasco, porque todo lo relacionado con el País Vasco estaba contaminado por la actividad de ETA —especialmente cruel en los años ochenta— y un número importante de periodistas y políticos extranjeros identificaban a la banda terrorista con un «movimiento de liberación».

El caso es que la visita continuó a pesar de lo ocurrido en Guernica y se mantuvo también el programa diseñado de antemano. Al finalizar el viaje ocurrió algo que llenó de estupor a los periodistas españoles. El enviado especial chino finalmente salió de su aislamiento y decidió plantear a un grupo de españoles una duda: ¿cómo se llamaba la esposa del hermano del rey?

¿Qué esposa? ¿Qué hermano del rey? Señaló entonces a Sagrario Mina, la mujer de Garaicoechea. Explicaron entonces los españoles que era la mujer del presidente del gobierno vasco. El chino dijo que lo sabía, claro que sabía que era la mujer del presidente vasco. Pero desconocía su nombre y quería mencionarlo en su crónica. Contó que antes de informar sobre la visita de los reyes al País Vasco se había documentado sobre las monarquías europeas y sabía que los cargos institucionales se repartían entre los familiares de los reyes, y decidió que el *lehendakari* era el hermano del rey. Al colega chino no le había llamado la atención que el presidente vasco no se llamara Borbón. Quizá no sabía siquiera que su apellido era Garaicoechea, pero en su redacción no había nadie para sacarle del error. Y en aquellas crónicas chinas el *lehendakari* apareció como miembro destacado de la familia real.

Garaicoechea no era un presidente en general vanidoso, probablemente porque antes de convertirse en *lehendakari* contaba ya con una importante trayectoria detrás y, además, al negociar él mismo el estatuto vasco su protagonismo estaba perfectamente cubierto. Los puntos más polémicos de ese estatuto, los que no lograron sacar adelante los negociadores del Gobierno central y el PNV, los negociaron directamente Adolfo Suárez y Garaicoechea en una maratónica sesión en el palacio de La Moncloa que finalizó por la mañana, después de toda una noche trabajando sin descanso. Hasta tal punto que el presidente se empeñó en ofrecer al *lehendakari* una de sus camisas para que no se presentara en público con aspecto desaliñado después de una noche en vela peleando para que el estatuto vasco recogiera el mayor número posible de las exigencias que pretendían los nacionalistas. La falta de vanidad de Garaicoechea, sin embargo, no siempre ha tenido reflejo en otros presidentes autonómicos que, en muchos casos, han dedicado millones de su presupuesto para potenciar su imagen institucional e incluso personal.

Uno de los aspectos en los que se han volcado ha sido la proyección internacional, y la mayoría de los gabinetes de presidentes de gobierno regional han pasado mucho tiempo buscando la oportunidad de que su jefe pudiera acudir a reuniones en las que el solo hecho de ser invitado le pudiera convertir en un político con cierto peso fuera de las fronteras españolas. Aunque lo que más interés ha tenido siempre para los dirigentes autonómicos ha sido concertar citas con dignatarios extranjeros. El primer recurso ha sido siempre la Unión Europea y sus instituciones. La prueba es que Bruselas fue la primera capital hacia la que miraron siempre quienes, desde los gobiernos autonómicos, querían abrirse al exterior.

Entre los presidentes autonómicos con obsesión internacional se menciona en primer lugar a Artur Mas, impulsor de las embajadas catalanas en todo el mundo y que durante sus años al frente de la Generalitat programó importantes viajes al extranjero, acompañado siempre de un numeroso séquito de periodistas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de su equipo, en pocas ocasiones logró ser recibido por las personalidades con las que esperaba reunirse para exponerles su proyecto independentista. No obstante, hay que reconocer que en la mayoría de los casos en los que no se cumplieron sus objetivos la larga mano del Gobierno central y de sus embajadores habían tenido mucho que ver con la negativa a que el presidente secesionista catalán fuera recibido por dirigentes de otros países.

En esos viajes preparados en muchos casos para mayor honor y gloria de su protagonista, con escasos objetivos institucionales que cumplir, es sonado el de un presidente regional que se plantó en Bruselas con un buen plantel de periodistas para ser recibido por el presidente de la Comisión Europea. Todo un éxito de su gabinete y que el presidente pensaba capitalizar como merecía la ocasión. En efecto, entró en el despacho del presidente de la Comisión, que le saludó estrechándole la mano mientras el fotógrafo oficial hacía su trabajo. Inmediatamente después el alto cargo comunitario le despidió con amabilidad. No duró el encuentro ni diez minutos, tiempo insuficiente para que el español pudiera contar a los periodistas que le aguardaban cuáles eran los temas que había discutido con la máxima autoridad de la Unión Europea. Así que, antes de encontrarse con los informadores, preguntó dónde estaba el baño y allí estuvo durante casi media hora para aparentar que su audiencia había sido tan amplia como para tratar los importantes asuntos que llevaba en cartera. La verdad se supo semanas después, cuando un español que trabajaba en el equipo del presidente de la Comisión se fue de la lengua.

Algún día se pondrá, negro sobre blanco, el dinero destinado a crear oficinas de representación autonómica que no han abierto una sola puerta a empresarios o representantes culturales de sus autonomías, que en la mayoría de los casos terminaron acudiendo a la embajada española para resolver los problemas que las delegaciones de sus gobiernos regionales no habían solucionado.



La agenda de Pepe Bono

*E*n la toma de posesión de José Bono como ministro de Defensa, los militares no salían de su asombro. Entre los invitados de «Pepe» para los amigos y también para los menos amigos, se encontraban Concha Velasco, el juez Garzón, el nuncio de Su Santidad, Raphael, Antonio Gala, Miguel de la Quadra y un largo etcétera de personalidades de muy distintos sectores profesionales y de diferentes ideologías.

Quienes conocían a Bono desde tiempo atrás no esperaban menos de él: durante sus años como presidente del gobierno manchego había tocado todos los palos, se codeaba con las personas más insospechadas, tenía amigos en los lugares más insólitos y en las reuniones que organizaba siempre conseguía una mezcla de nombres y apellidos que probablemente no eran posibles en ningún otro político español. Ni siquiera Felipe González en la Bodeguilla de La Moncloa, porque en esas cenas no todos los asistentes eran amigos del presidente, y sin embargo Bono sentaba en torno a una mesa de comer, cenar o tomar unas tapas a amigos que generalmente no se encuentran en la agenda particular de un político.

Pepe Bono ha cultivado sus relaciones durante y después de ser presidente de Castilla-La Mancha. Como él mismo explicaba a quien le quería escuchar, presidía el gobierno de una comunidad autónoma en la que las cacerías, además de ser una de las principales fuentes de riqueza de la región, abrían la oportunidad de conocer a algunos de los dignatarios más importantes del mundo que acudían a las fincas-coto, lugares de encuentro... y de intercambio de influencias. Además, la inmensa riqueza artística y cultural suponía un atractivo al que pocos podían resistirse. En sus años de presidente, además de establecer unas relaciones muy cordiales con el rey Juan Carlos, fue también

anfitrión de algunos de los políticos, artistas, cantantes, actores y actrices, empresarios y banqueros que dan lugar a titulares dentro y fuera de España, y algunos de ellos se convirtieron en asiduos a las variadas citas que organizaba Bono en Fuensalida, sede del gobierno regional, o en las residencias de los numerosos parques naturales de la zona, entre los que destacaba la finca Quintos de Mora, a la que Felipe González acudía con frecuencia para descansar fines de semana y dedicarse a su afición de búsqueda y preparación de bonsáis.

Fue precisamente en esta finca donde cuajó una operación política de envergadura: el fichaje del juez Baltasar Garzón para la lista madrileña del PSOE en 1993. Nada menos que de número 2, puesto siempre reservado para Javier Solana, pero que el polémico juez exigió para dar el salto a la política. Cuando Felipe González se lo explicó al entonces ministro de Asuntos Exteriores, este no puso ningún problema para pasar al tercer lugar, convencido de que dicho «fichaje» tendría una considerable repercusión positiva en el resultado electoral.

Garzón venía precedido de su fama como instructor de los casos vinculados al GAL, y su incorporación a las listas del PSOE como independiente le lavaría la cara a un partido que en esos momentos empezaba a soportar acusaciones de guerra sucia y corrupción.

Bono había conocido a Garzón unos meses antes, gracias a su relación con Ventura Pérez Mariño, juez compañero de Garzón y muy amigo del presidente manchego desde los tiempos en los que los dos, Bono y Pérez Mariño, militaban en el PSP de Tierno Galván, un partido del que formaban parte un buen número de abogados y diplomáticos. Tras un primer encuentro, continuaron las reuniones de Garzón, Pérez Mariño y Bono, y este último empezó a acariciar la idea de que el juez sería un nombre a tener en cuenta para las próximas elecciones. Preparó una reunión con Felipe González en Quintos de Mora, el presidente se sintió atraído por la personalidad de Garzón pero también por un Pérez Mariño en el que encontraba un profesional sólido, discreto y fiable. El resultado, finalmente, fue que quiso contar con los dos.

El resto de la historia es conocida: cómo reaccionaron diferentes dirigentes del partido, algunos de ellos en el foco del juez en su lucha contra el GAL; la decepción de Garzón al no ser ministro; la segunda decepción cuando tampoco lo fue al dimitir Corcuera y su propia dimisión antes de un año... para incorporarse a los pocos días a su juzgado de la Audiencia Nacional desde la que arremetió contra el Gobierno socialista.

Esta importante operación de Bono sin duda sumó votos al PSOE en aquella época, pero fue aciaga para algunos de los miembros del equipo de Felipe González, víctimas después de las instrucciones del juez Garzón. Como fue también polémico el encuentro que organizó Bono, fuera ya de la política activa, entre el expresidente Zapatero y la entonces reveladora y atractiva figura de la nueva política, Pablo Iglesias, en el domicilio del manchego y con Emiliano García Page entre los asistentes.

Esta reunión se hizo a espaldas de Pedro Sánchez, nuevo secretario general del partido y en esos momentos político en alza, aunque con el paso del tiempo aparecieron sus graves deficiencias como gestor y estrategia del Partido Socialista, convirtiéndose en el secretario general que colocó al partido en la etapa más negra de su historia, hasta que en octubre de 2016 se pusieron en marcha los mecanismos para «destronarle» antes de que redujera al partido en extraparlamentario.

Sánchez no supo que se había producido el encuentro antes mencionado hasta bastantes días después, cuando un periodista le preguntó al respecto. Y no le gustó nada que se hubiera producido sin él estar enterado, aunque curiosamente más tarde fue acusado por sus críticos de excesiva proximidad con Pablo Iglesias.

Cuando Bono ya era ministro de Defensa, echó mano de algunas de sus peculiares relaciones para cuestiones de gobierno. Peculiares porque se trataba de personas no habituales, como antes he señalado, en los círculos en los que se mueven los políticos. Como buen conversador, que lo es, le gustaba contar historias protagonizadas por él mismo como «civil» o que había conocido en el ejercicio de sus cargos, primero en el gobierno manchego y después en el de la nación. Era y sigue siendo un buen «narrador», prolijo en los detalles y sin el irritante tono de vanidad que utilizan hombres importantes o no tanto. Con sus historias demostraba que se movía en las alturas, pero lo hacía con naturalidad, sin darse tono.

Entre sus mejores historias estaba la llamada a Julio Iglesias para un asunto de gran envergadura, y que años después contó en sus memorias. Siendo ministro de Defensa llamó al cantante para que le echara una mano, ya que tenía programada una reunión con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, y las relaciones entre los dos Gobiernos no eran las mejores. Zapatero y Bush las habían tenido tiasas durante todo el mandato porque el presidente americano no le perdonaba al español la retirada de tropas de Irak y el hecho de que en un discurso pronunciado en Túnez hiciera

un llamamiento a otros países para que también retiraran sus tropas. Tampoco olvidaba Bush que en el desfile por el paseo de la Castellana de Madrid el día de las Fiesta Nacional española, Zapatero, entonces en la oposición, no se había levantado ante la bandera de los Estados Unidos cuando ante la tribuna pasó el contingente americano que había sido invitado a participar junto a las tropas españolas y de otros países.

Según Bono, se le había ocurrido llamar a Julio Iglesias porque sabía que era amigo del modisto Óscar de la Renta, que a su vez era amigo de la familia Bush, para que templara los ánimos. Le preguntó si tenía algún contacto con Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, porque sabía que no estaba muy contento con el Gobierno de España por la venta de material militar a Venezuela.

En otra ocasión, Pepe Bono llamó a Isabel Pantoja porque Hugo Chávez la quería conocer, y no dudó en acudir al bautizo de su hija, Rosa Iris, pues según el entonces ministro le había advertido el embajador que el presidente venezolano tendría muy en cuenta ese gesto a la hora de decidir la compra de material militar, algo que interesaba al Gobierno español por el alto precio del contrato.

Esa forma de ser, tan campechana y al mismo tiempo despegada de lo políticamente correcto, le llevó a varios enfrentamientos con dirigentes de su partido y también del gobierno socialista. Salió vencedor nada menos que de un debate con el vicepresidente y ministro de Defensa Narcis Serra a finales de los años ochenta.

El Ministerio, propietario de un amplísimo terreno en Cabañeros, decidió dedicar una parte a campo de tiro. La respuesta de Bono fue inmediata: no. Los manchegos no querían ahí un campo de tiro que perturbaría sus vidas con el ruido de los aviones y perjudicaría el medio ambiente. Serra insistió en que se trataba del lugar más adecuado: los españoles, incluidos los manchegos, necesitaban que se les garantizara su defensa y ello implicaba una fuerza aérea bien entrenada, el impacto medioambiental no era grave según los estudios del ministerio... El no de Bono seguía inamovible y, como en otras ocasiones, empezó a tomar decisiones que sabía muy bien hacia dónde dirigir las. Movilización de alcaldes y vecinos de la zona, reparto de informes sobre el impacto medioambiental que se minimizaba, llamadas a medios de comunicación regionales y nacionales para que Cabañeros se convirtiera en una polémica de envergadura en la que se recogieran las tesis de Bono enfrentadas a las de Serra, con el presidente manchego defendiendo los

intereses de los ciudadanos de su región y, por último, la gran baza política: el gobierno regional aprobó un decreto declarando Cabañeros parque natural y, por tanto, «espacio natural protegido».

Narcis Serra acabó reconociendo su fracaso, tiró la toalla y propuso que el campo de tiro se creara en Anchuras, a pocos kilómetros de Cabañeros. Una zona también de gran riqueza natural —quizá más aún que la de Cabañeros— y también con municipios cercanos contrarios al campo de tiro. Pero Bono ya no puso inconveniente alguno: había ganado *su* batalla, que era Cabañeros. Mejor no emprender la de Anchuras, no fuera que perdiera la segunda.

Sonadas fueron sus discrepancias con Josep Borrell cuando era ministro de Obras Públicas en el último gobierno de Felipe González. Las primeras polémicas surgieron por las diferencias de criterio respecto al Plan Hidrológico Nacional, un asunto, por otra parte, que tradicionalmente ha enfrentado al gobierno de Castilla-La Mancha con los de Valencia y Murcia; pero cuando la sangre estuvo a punto de llegar al río, como se dice coloquialmente, fue cuando se conoció el trazado de la autovía Madrid-Valencia, que atravesaba un paraje natural, las Hoces y el Cuchillo del Cabriel. Bono no lo pensaba consentir y preparó las armas.

Borrell, un hombre de Ciencias apasionado de las matemáticas y con toda seguridad más apasionado de la naturaleza que el propio Bono —durante años se hacía un buen puñado de kilómetros los fines de semana monte arriba y campo a través solo pertrechado con un bocadillo y buenas botas—, creía que si un equipo técnico había realizado el trazado más conveniente para una autovía o un ramal, equipo que además había tenido en cuenta el impacto ambiental, dicho trazado no podía cuestionarse. Y mucho menos porque un dirigente regional sin formación profesional técnica, de ingeniería, se opusiera al mismo por razones de conveniencia política.

José Borrell, con su mejor voluntad y para que se comprendieran los motivos por los que la autovía debía cruzar las Hoces y no otros lugares alternativos, se calzó sus botas e invitó a un grupo de periodistas a que le acompañaran al Cabriel para explicarles sobre el terreno, él mismo y los ingenieros del Ministerio, las razones de su decisión. Qué ocurría si el trazado era por otros lugares, cuál era el nivel de «agresividad» de la construcción, cómo se había buscado el menor daño posible... La invitación la aceptaron un buen número de periodistas y la mayor parte se arrepintió poco después de emprender la marcha.

Aunque les habían advertido de que se equiparan adecuadamente, alguno apareció con mocasines. El ministro, para explicar bien las cosas, no dudó en emprender la larga caminata por los lugares más intrincados, con barro, peñas, senderos resbaladizos, agua y plantas que cortaban la piel de brazos y piernas. Horas de marcha, muy instructivas eso sí, pero no fue un día de agradable excursión por el campo, como pensaban los más ingenuos.

El presidente Bono reaccionó de inmediato: invitación a los periodistas en dos o tres tandas. De inmediato. Todo perfectamente organizado. En helicóptero sobrevolaron los parajes más hermosos del Cabriel con sus espectaculares Hoces, mientras Pepe Bono les iba narrando a su manera de qué forma todo aquello quedaría destrozado bajo la maquinaria de las empresas constructoras y los pilotos que sostendrían la autovía. El proyecto se paralizó.

Poco después Aznar sustituyó a Felipe González al ganar las elecciones de 1996 y, antes de un año, el presidente manchego llegó a importantes acuerdos con el ministro Rafael Arias Salgado: los que no había logrado con su compañero —y supuestamente amigo— Josep Borrell.



«Federico Sánchez» y la Guardia Civil

*F*elipe González quería a Jorge Semprún en su gobierno. Se comprende: Semprún era un hombre de biografía apasionante, de familia aristocrática con políticos destacados, entre ellos Antonio Maura, su abuelo, presidente conservador en cinco ocasiones con Alfonso XIII. Pasó la Guerra Civil en La Haya, pues su padre era embajador del Gobierno de la República y Jorge Semprún fue a vivir a París, donde estudió Filosofía en La Sorbona. Cuando Francia fue ocupada por las tropas nazis, Semprún se sumó a la Resistencia, y en esa época se afilió al Partido Comunista. Con vida contrastada en la Resistencia (no como otros franceses destacados de los que décadas después se conoció que jamás habían prestado un servicio a su patria, sino que colaboraron con el gobierno de Vichy o, simplemente, se habían acomodado a las circunstancias a la espera de que Hitler fuera derrotado por otros), Semprún fue capturado, torturado y enviado al campo de Buchenwald, donde no sufrió tanto como los judíos allí encerrados, que en su mayoría encontraron la muerte, pero se vio privado no solo de la libertad, sino de los principales medios de subsistencia, como cuenta en sus libros de memorias, exentos no obstante de tintes dramáticos porque se consideraba un privilegiado frente a otros reclusos sobrecargados de sufrimiento.

Finalizada la Guerra Mundial inicia una fructífera carrera literaria en París. Y política: llega a ser miembro del Comité Central del PCE y desarrolla un trabajo muy intenso en la clandestinidad en la España franquista. Actividad de enorme riesgo en la que los miembros del PCE se jugaban la vida y algunos incluso la perdieron. En los años sesenta Semprún, un espíritu libre que no

acepta ataduras, empieza a despegarse de la línea marcada por Carrillo y finalmente es expulsado del partido.

Una figura así, escritor destacado, guionista del cineasta Costa Gavras (director de algunas de las películas de denuncia política más importantes de la época) y vinculado a los movimientos más destacados de la intelectualidad europea, tenía que llamar la atención de Felipe González quien, tras las elecciones de 1988, después de conseguir la adhesión de España en el Mercado Común y ganar el controvertido y complicado referéndum para mantener a España en la OTAN (tras la postura contraria que el PSOE había mantenido cuando estaba en la oposición), se encontraba con suficiente fuerza como para incorporar a su gobierno a personas que no formaran parte del partido. Personas que, como en el caso de Semprún, contasen con una biografía intachable de compromiso con las libertades y la democracia. Nada le atraía más a González que tener en el Consejo de Ministros a «Federico Sánchez». Este era el nombre que Jorge Semprún utilizaba cuando, como miembro del PCE, se movía de forma clandestina por España. Felipe, además, había tenido la oportunidad de conocer a Semprún y le había fascinado su personalidad, su gran atractivo, su pasión a la hora de expresarse. Felipe González, como tantos otros, había sido atrapado por la fuerza arrolladora de Jorge Semprún. Por otra parte le disgustaba profundamente que una figura así, española, viviera en Francia.

Javier Solana, que había sido ministro de Cultura en el primer gobierno de González, era amigo de Semprún, y en los días previos a configurar el nuevo gobierno Felipe le pidió que tanteara al escritor. Solana no dudó: telefoneó a París y después de los saludos de rigor le preguntó cuál era su nacionalidad. «Apátrida», le respondió un Semprún que se sentía ciudadano del mundo. Solana insistió más: ¿qué pasaporte tenía? «Francés y español», contestó. Perfecto. Nada impedía que formara parte del Gobierno de España. Solana le dijo entonces que Felipe González quería que fuera ministro de Cultura y que se lo pensara. Semprún no lo pensó mucho: su respuesta fue que sí.

Viajó a Madrid para entrevistarse con Felipe González y, una vez en La Moncloa, los dos repasaron la situación política y la idea que tenían ambos sobre cómo podía el Gobierno potenciar la cultura. Con qué mimbres había que actuar, cómo superar el desencuentro, la confrontación cultural que se había producido durante las décadas del franquismo y que había llenado de frustración a algunas de las cabezas más lúcidas en uno y en otro bando. Los dos personajes coincidieron en que se podía trabajar bien desde el Gobierno

para avanzar en un campo en el que había españoles de primera magnitud no siempre reconocidos. Y los dos coincidieron también en que para que Semprún se incorporara al Gobierno no era necesario, en absoluto, que se afiliara al PSOE. Semprún, además, tras su experiencia en el PCE, no se sentía tentado a afiliarse a ningún partido.

La conversación fue larga, fluida, intensa y enriquecedora. Al terminar, el presidente le acompañó hasta la puerta, donde recibió el protocolario saludo del policía o guardia civil que hacía guardia. Felipe entonces le comentó a quien iba a ser nombrado ministro a las pocas horas: «El día en que en un acto oficial se cuadre un guardia civil ante Federico Sánchez, te darás cuenta de lo mucho que ha cambiado este país».



La indiferencia de ZP

Tenía fama de cercano. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue siempre fácil de trato durante su etapa en La Moncloa, aunque, como ha ocurrido en otros casos, al final del mandato apareció una vanidad que le hacía reaccionar con profundo malestar a las críticas. Sobre todo las de aquellos a los que consideraba amigos. No fue el primer presidente que cayó en la tentación de preferir la adulación a la reflexión sincera de quienes le querían bien. Su etapa última, quizá la mejor como presidente, pues tomó iniciativas que no gustaron en el PSOE pero que eran indispensables para sacar adelante la economía española, se vio acompañada de gestos de arrogancia que los suyos pensaron que jamás verían en él. Probablemente siempre estuvo ahí, latente. Y él, que tanto presumía de sensibilidad hacia los problemas ajenos, dio muestras de algún gesto muy alejado de ese talante, más bien bastante cerca de la indiferencia. Por ejemplo, lo que sucedió en Doñana en el verano de 2008.

Habría que preguntarse qué ocurre durante las vacaciones presidenciales, porque algunos de los jefes de Gobierno españoles han mostrado su cara menos agraciada en concreto en esas épocas. La mujer de Zapatero, por ejemplo, decidió que La Mareta, en Lanzarote, no estaba suficientemente bien acondicionada para su familia, aunque había acogido a la del rey y a ilustres jefes de Estado extranjeros. Pues bien, el verano de 2008 José Luis Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa y sus hijas, pasaron unos días en Las Marismillas, el palacete de Doñana acondicionado por Felipe González, al que entusiasmó aquel lugar en medio del Parque Nacional, una reserva natural paradisiaca y que fue preparada para que estuviera siempre a disposición de los presidentes del Gobierno, sus familias y sus invitados. Mitterrand fue

huésped allí de Felipe González, como lo fue años después Tony Blair, que viajó a Doñana para encontrarse con Aznar después de firmar el acuerdo de paz de Irlanda en el castillo de Stormont. No fueron los únicos que pasaron por Las Marismillas. También lo hicieron Gorbachov, Helmut Kohl y algunos ministros, pues fueron varias las ocasiones en las que se aprovechó la tranquilidad y el aislamiento de Doñana para celebrar reuniones de gobierno.

En una de las playas de Doñana se encontraba, en agosto de 2008, un matrimonio madrileño. Habían pasado unos días en el Puerto de Santa María, su avión para Madrid salía a última hora de la tarde y decidieron aprovechar el día en la playa. Cogieron el barco en Sanlúcar para disfrutar de unas horas de sol, agua y absoluta soledad. Se levantaron cuando vieron acercarse al barco en el que debían regresar a Sanlúcar y se les sumaron dos pescadores que habían estado cogiendo coquinas. Al disponerse a embarcar, dos hombres de paisano les advirtieron que no podían subir al barco porque lo necesitaba el presidente del Gobierno para ir a Sanlúcar. La pareja defiende sus derechos: el hombre les dice que él y su mujer tienen que coger un avión y que en el barco hay sitio de sobra para todos. Su mujer, abogada, apunta que el barco pertenece a una compañía privada y que ni el presidente del Gobierno ni nadie puede requisarlo a no ser por un caso de extrema urgencia. Los dos pescadores por su parte, le dicen al patrón, al que conocían de sobra, que les deje subir porque en caso contrario no podrán llevar las coquinas al restaurante al que se las venden habitualmente. El patrón puso cara de circunstancias: tenía voz pero no voto, nada podía hacer. Una mujer que llegaba desde Sanlúcar con sus dos hijos les dijo a los dos hombres que había cogido el barco solo porque sus hijos tenían el capricho de navegar. Iban todos en traje de baño y ella con un pareo. Ni siquiera llevaba un móvil para avisar a su marido. Todos protestan, pero no hay nada que hacer.

En ese momento llega un todoterreno con Zapatero y Sonsoles Espinosa. El grupo se acerca al coche para tratar de convencer al presidente de que pida a la gente de seguridad que les deje subir al barco, pero ZP no responde. Ni les mira. El todoterreno sigue adelante hasta la barcaza a la que suben el presidente y su mujer. Una hora más tarde regresa el marinero a recoger a quienes habían quedado en la playa. No oculta su indignación y explica al grupo que no había podido hacer nada, que los de seguridad no se atenían a razones y que el presidente, el único que podía haber echado una mano, no movió un dedo para solucionar el problema. Antes de emprender el viaje a

Sanlúcar pronunció una frase lapidaria: «Esto no habría ocurrido nunca con Felipe».



Todos los hombres del presidente: los asistentes

Suelen ser tres: un militar, un diplomático y un miembro del partido del presidente. Son los asistentes, los hombres para todo —hasta ahora no ha habido mujeres— que resuelven cualquier problema de intendencia que se pueda presentar. Saben a quién recurrir en cada momento y cómo localizar a la persona necesaria para «apagar un fuego» o superar una contrariedad. Se ocupan de que el presidente tenga a mano todo lo que necesita: desde el discurso que debe pronunciar hasta el automóvil con el que se trasladará al siguiente acto de su agenda, que conocen de memoria. Nada se les escapa, no pueden permitirse ese lujo. Al menos dos de ellos deben su éxito posterior en el plano profesional y personal a su cargo de asistente. Uno es Alejandro Agag, que conoció a Ana, la hija del presidente Aznar, cuando era asistente de este y tuvo oportunidad de convivir casi constantemente con la familia, pues Agag siempre estaba cerca de Aznar. Cuando la jovencísima Ana se casó con él en El Escorial —la famosa y polémica boda que incomodó a tantos—, ya había dejado La Moncloa para dedicarse a sus negocios.

A Alejandro le sustituyó Antonio López-Istúriz, el segundo asistente al que el cargo en La Moncloa marcó su destino. Hombre de partido como Agag, con menos pasión por el dinero que por la política, quiso ser eurodiputado y no tuvo dificultad en formar parte de la lista del PP. Posteriormente, ya con escaño en Estrasburgo y Bruselas, y gracias a su facilidad para relacionarse y a su dominio de varios idiomas, fue elegido secretario general del Partido Popular Europeo, un cargo que le ha permitido estar en la cocina de un grupo parlamentario que, junto al Partido Socialista, es el más influyentes del

Parlamento Europeo. Además de estar en el lugar de encuentro de los jefes de Gobierno europeos de uno y otro partido. Istúriz, desde el PPE, ha suavizado en más de una ocasión las relaciones de Merkel y Rajoy, que durante bastantes años fueron frías y solo se convirtieron en cordiales una vez que Rajoy fue presidente del Gobierno. También tuvo un papel destacado en que Rajoy mantuviera una relación cercana con jefes de Gobierno democristianos y conservadores, tanto en sus años de líder de la oposición como siendo presidente.

Entre las responsabilidades de los tres asistentes se contaba que uno de ellos debía dormir siempre en La Moncloa. Y hay que escribir en pasado, porque esa costumbre la arrumbó Mariano Rajoy. Generalmente era siempre el mismo, aunque le sustituía uno de sus compañeros los fines de semana, en vacaciones, si estaba enfermo o tenía algún compromiso. Pero durante años, décadas, muy cerca del dormitorio presidencial se encontraba la habitación en la que dormía su asistente. Si se producía alguna incidencia durante la noche, era al asistente a quien se informaba desde el gabinete telegráfico, la central que recibe todas las llamadas en La Moncloa y capaz de poner al habla al presidente con cualquier persona que necesite, dentro o fuera de España, sea quien sea, desde un jefe de Estado hasta el personaje aparentemente menos relevante. Una vez que el gabinete avisaba al asistente, este se dirigía al dormitorio presidencial para trasladar en persona el recado o la noticia que le habían dado. Era el asistente quien evaluaba si tenía la relevancia suficiente como para despertar al jefe del Gobierno o podía esperar a que se levantara por la mañana.

Eran los tiempos, hay que recordarlo, en los que no existían los teléfonos móviles. Si un ministro quería ponerse en contacto con el presidente debía hacerlo a través del gabinete. Hoy el número de móvil del presidente del Gobierno lo tienen centenares de personas, incluidos gobernantes extranjeros y personalidades absolutamente ajenas a la política o a la gestión pública. Pero años atrás, sobre todo en los trágicos tiempos en los que el terrorismo etarra cometía los más atroces atentados, eran los asistentes los que tenían que llevar al presidente las noticias más dolorosas o preocupantes.

Rajoy fue posiblemente el presidente que más se resistió, junto a Adolfo Suárez, a vivir en La Moncloa. Aunque no se tardó en convencerle a pesar de sus reticencias iniciales, entre otras razones porque había sido ministro del Interior y conocía bien los mecanismos de seguridad y la necesidad de seguirlos a rajatabla. Eso sí, desde el primer momento pidió que se acabara

con el hábito de que un asistente tuviera que dormir allí. No lo consideraba necesario, entre otras razones por la apuntada: los teléfonos móviles, que facilitan que las noticias se transmitan de inmediato y personalmente. Las buenas y las malas, al instante y sin intermediarios.

También consiguió que se redujera el número de asistentes. Consideró que con uno era suficiente. Jorge Moragas, jefe del Gabinete de Presidencia y probablemente el hombre con el que Rajoy se encuentra más cómodo trabajando en el día a día, eligió para el cargo a un diplomático joven. Solo uno. Después de analizar varias propuestas se inclinó por Jaime González Castaño, que se convirtió en la sombra de Rajoy, casi un miembro más de la familia, como había ocurrido con quienes le habían precedido con otros presidentes.

El grado de afecto que existe entre los presidentes y sus asistentes se advierte en lo sucedido con la boda de González Castaño. Rajoy no llegó a tiempo a la ceremonia religiosa porque se encontraba en Barcelona, pero en cuanto terminó su programa oficial fue con su mujer, Viri, a la celebración posterior. Al no haber sustituto para González Castaño, una persona del Gabinete de Presidencia asumió sus funciones durante la luna de miel. Lo que demuestra que tenía razón Rajoy cuando se empeñó en reducir su número de asistentes y relevarles de la pesada tarea de dormir en La Moncloa.



Una «invitada» terrorífica

Contaba Pasqual Maragall, cuando era presidente de la Generalitat, la peripecia que sufrió en Cantabria durante sus tiempos de alcalde de Barcelona. Tiempos gloriosos en los que la capital catalana vivió un cambio urbanístico y social sin precedentes debido en gran parte a los Juegos Olímpicos de 1992, a cuya preparación Maragall dedicó todo su esfuerzo, con una insistencia y un afán que provocaron el entusiasmo generalizado. El trabajo de Juan Antonio Samaranch para lograr que su ciudad, Barcelona, fuera la sede de los Juegos Olímpicos nunca será suficientemente valorado — porque se supone que el presidente del COI debe mantenerse al margen de las votaciones—, pero afortunadamente supo maniobrar con discreción y sobre todo con eficacia. El trabajo de Maragall, en cambio, fue a cara descubierta, creando organismos *ad hoc* para conseguir que los Juegos fueran un hito en la historia del olimpismo —que lo fueron— y para lograr financiación y patrocinios, aparte de inventar fórmulas de impulso y ayuda a los deportistas para conseguir mejores marcas —que consiguieron—. Nunca el equipo olímpico español consiguió más medallas que en Barcelona 92 y, en gran parte, el mérito fue del alcalde Maragall.

En una de sus visitas institucionales para conseguir apoyos, Maragall viajó a Cantabria para mantener una reunión con el presidente regional, Juan Hormaechea, un personaje singular, muy polémico, que provoca filias y fobias. Hormaechea cuenta con un currículum sobrado como para llenar páginas de un libro. Presidente del gobierno cántabro en 1987 tras ir en las listas de Alianza Popular —futuro PP— como independiente, su gestión controvertida y su actitud pública provocaron críticas en AP a las que Hormaechea respondió con ácidas declaraciones contra José María Aznar. Una moción de censura

promovida por ese partido y la oposición le desalojó del gobierno, que recuperó meses después en unas nuevas elecciones a las que se presentó con siglas propias. Tampoco llegó al final de su mandato, obligado a dimitir tras una condena por malversación de fondos públicos, lo que le apartó definitivamente de la política.

Aparte de su siempre polémico comportamiento, Hormaechea pasará a la historia por su pasión por los animales. Fue el impulsor del parque de Cabárceno, probablemente el zoo más singular de España, en el que los animales viven en un paraje excepcional en condiciones de semilibertad. El propio Hormaechea eligió el lugar y diseñó la estructura del zoológico, con no pocas broncas con los profesionales encargados de realizar las obras, tanto arquitectos como zoólogos, pues se empeñaba en imponer su criterio por encima de las consideraciones de quienes intentaban que tuviera en cuenta las características necesarias para el hábitat de las distintas especies.

Pero además de Cabárceno, la gran huella y gran proyecto que dejó Hormaechea para el futuro fue Sultán. Entre las historias más recordadas de Hormaechea, y que provocó toda clase de comentarios, críticas, chistes y bromas, está la compra, en el año 1989, de Sultán, un toro semental que costó un millón de dólares canadienses, es decir, 120 millones de pesetas, una cantidad exorbitante. Se habló más del semen de Sultán y de su capacidad reproductiva que de cualquier otra iniciativa del gobierno cántabro. Y encima la vida del animal fue corta: no llegó ni a los dos años tras su compra, pues una lesión obligó a sacrificarlo. Sin embargo, pasados los años los expertos coincidieron en que la compra de Sultán fue providencial para la ganadería regional. Cambió para bien sus señas de identidad y la convirtió en un elemento básico para la economía del futuro. Durante su corta vida cántabra el semen de Sultán suministraba mil dosis semanales de inseminación, y hoy sus descendientes se cuentan por docenas de miles.

Cuando Maragall pidió a Hormaechea ser recibido por él para explicarle su proyecto de Barcelona 92 y ver qué posibilidades de colaboración podían darse, el presidente cántabro quiso tener un gesto especial hacia el alcalde catalán y le invitó a almorzar en su casa con sus respectivas mujeres. Todo iba muy bien, los dos políticos mantenían una charla amena e interesante al margen de sus discrepancias ideológicas, cuando la mujer de Maragall, Diana Garrigosa, notó algo extraño en la espalda, a la altura de su cuello. Se giró y una serpiente pitón se colocó directamente sobre su escote. El horror la dejó paralizada, espantada, muda. Según contaba Maragall —que a lo mejor

exageró, pero la historia daba para exageraciones—, Hormaechea se levantó despacio mientras le pedía que no se moviera para no asustar a la serpiente, pues podía morderla si se ponía nerviosa. Le dijo que no era peligrosa, que no se preocupara, y acercándose con cautela cogió a la pitón y se la llevó allá donde la tuviera guardada, pidiendo toda clase de disculpas porque se había escapado. Explicaba Maragall que se marcharon en cuanto pudieron, que Hormaechea seguía con sus disculpas, pero también algo sorprendido de que la pitón les hubiera provocado tanto temor.



Fraga y Felipe: el combate del siglo

*E*n un lado del *ring* Manuel Fraga Iribarne, ministro de Gobernación que con el tiempo sería presidente del gobierno de Galicia. En el otro, Felipe González Márquez, secretario general del PSOE, que con el tiempo sería presidente del Gobierno de España.

En abril de 1976 se había celebrado en Madrid el primer congreso de UGT, sindicato todavía en la ilegalidad; como el PSOE, que desde hacía un año y medio dirigía Felipe González. El partido vivía en una cierta clandestinidad, aunque González sabía que tenía cierta libertad de movimientos. El Gobierno conocía sus pasos, pero no se planteaba su detención, a no ser que él mismo o algunos de los miembros de su partido provocaran algún incidente grave.

Fue Enrique Múgica quien decidió que se debía tantear a Fraga para intentar que el congreso de UGT se celebrara con la seguridad de que no iba a producirse un asalto por parte de la policía. Múgica conocía mucho a Carlos Argos, colaborador eterno de Fraga y en aquel momento jefe del gabinete del ministro. Cuando Argos le trasladó esta petición a Fraga obtuvo una respuesta positiva. A Fraga le interesaba autorizar ese primer congreso de UGT —a pesar de que el sindicato no había sido legalizado— para afianzar así la imagen de demócrata con la que había regresado de Londres. Una imagen que en esos momentos se encontraba muy vapuleada tras los sucesos de Vitoria y Montejurra, que echaron por tierra sus expectativas de quitarse de encima el tinte de ministro franquista, dictatorial.

Fraga solo exigió que el congreso se celebrara en orden, en un local cerrado, sin manifestaciones en la calle y con cierta mesura en las intervenciones de los dirigentes de UGT y sus invitados extranjeros. Todo transcurrió según lo pactado entre Múgica y Argos, sin incidentes a pesar de la emoción con que se celebró aquel congreso histórico y multitudinario. Tuvo lugar en un restaurante cercano a Cuatro Caminos, en Madrid, y a él asistió el propio Argos, cerca siempre de un Múgica atento a que nadie molestara a su amigo si era reconocido como colaborador del ministro de Gobernación. No quería perderse aquel acontecimiento que podía ser el inicio de una nueva etapa de apertura en una España todavía bajo el recuerdo de Franco. En esa época el rey Juan Carlos, como se supo después, preparaba ya el relevo del presidente Arias Navarro, para así iniciar una etapa de libertades plenas con Adolfo Suárez como presidente. Durante ese periodo tendría lugar la legalización de los sindicatos y los partidos políticos.

Después del congreso de UGT, Múgica y Argos se envalentonaron y pensaron que sería importante que Fraga conociera a Felipe González. Entre otras razones para que comprendiera que el PSOE no era un partido que tuviera ansias de desestabilizar España, sino que, por el contrario, deseaba colaborar en la construcción gradual de un proyecto sensato y democrático que trajera serenidad a la sociedad española tras los años de dictadura. Así que Argos trasladó al ministro esta idea, que a Fraga le pareció bien. Según contaba su jefe de gabinete años después: «Me dijo que le citara para la mañana siguiente a las doce en su despacho. Fraga era así, cuando tomaba una decisión quería que se realizara de forma inmediata. Se la trasladé a Enrique, que le contestó que era demasiado precipitado y que además ni Felipe ni él querían pisar el despacho del ministro de Gobernación si no era como detenidos por la Guardia Civil».

Argos —ya fallecido—, fue un hombre importante en la historia de la Transición, aunque siempre desde la segunda línea. En ese momento desempeñó un papel destacado al mediar en este asunto. Pidió a Múgica que pensara un lugar en el que pudieran encontrarse Fraga y Felipe González, lejos de las miradas públicas. Sugirió que podía ser en un piso que tenía Fraga en la calle de Joaquín María López. Un lugar donde guardaba parte de sus libros, escribía y, cuando había excesivo jaleo en el domicilio familiar, atendía en su despacho a las visitas que no estaban directamente relacionadas con su trabajo como ministro. Múgica estuvo de acuerdo, pero cuando ya habían concretado la fecha, un viaje de Felipe González a Portugal para verse con Mário Soares

obligó a aplazar el encuentro. A Fraga no le gustó. No por tratarse de un plantón, sino porque su agenda la llevaba a rajatabla y cualquier modificación afectaba a su ritmo de trabajo. Finalmente se encontraron el 31 de mayo en el chalé de Miguel Boyer en el lujoso barrio de El Viso. Felipe quiso que además de Boyer y Múgica asistiera a la reunión Luis Gómez Llorente, hombre relevante en aquel momento en el PSOE. Fraga llegó con Argos y con José Manuel Otero Novas, director general de Política Interior del Ministerio de Gobernación.

Siempre según la versión de Argos, el ambiente fue muy frío. Incluso con descortesía. Felipe González en ningún momento le llamó «ministro» ni «señor Fraga»: se dirigió siempre a él de forma impersonal. Fraga miró los libros y cuadros del salón y le comentó a Boyer que tenía un chalé «estupendo», a lo que respondió gélidamente Boyer que no era suyo, sino de su suegro, como si viera un reproche en el ministro, en el sentido de que le extrañaba que viviera tan bien un socialista. Fraga no le fue a la zaga en frases cortantes: «No le he preguntado de dónde ha sacado el chalé, no soy inspector de Hacienda».

A pesar de la frialdad inicial, que no invitaba a mantener una conversación larga y fluida, con el paso de los minutos el ambiente se fue relajando. El grupo de socialistas, sobre todo Felipe González, preguntaba mucho sobre el futuro y las intenciones del Gobierno. Fraga les aseguró que España debía celebrar unas elecciones generales y que el rey estaba en esa línea. Le preguntaron si esas elecciones serían con participación de todos los partidos y Fraga abogó por la legalización de los que entonces se movían en la ilegalidad con la excepción del Partido Comunista, pues explicó que había que dar un margen de tiempo a la sociedad española antes de aceptar al PCE, que tanto se había significado en la lucha contra el franquismo. Fraga también lanzó su idea de que se celebraran primero unas elecciones municipales y después las generales, aunque Felipe González no estuvo de acuerdo.

La reunión no fue cordial en el sentido en el que los diplomáticos utilizan ese término, pero sí constructiva porque permitió que por primera vez un ministro del Gobierno, y además de peso, se encontrara con un dirigente de la oposición y ambos pudieran cambiar impresiones. Fraga prometió a Felipe que tendría libertad para expresarse libremente en los medios de comunicación —no perdía nunca ocasión de hablar de ese tipo de asuntos, muy marcado por sus años de ministro de Información y Turismo con Franco— y le dijo que incluso tendría cobertura en los que pertenecían al Estado. Eso sí, con

limitaciones: no debía cuestionar la figura del rey, poner en riesgo la unidad de España o criticar a las Fuerzas Armadas.

Contaba Carlos Argos que, antes de despedirse, Fraga le dijo a Felipe González que estuviera seguro de que él quería hacer la reforma política que permitiera que «dentro de cinco años usted pueda ser presidente del Gobierno. Me gustaría que no fuera antes, pero dependerá de los votos que consiga su partido». No fueron cinco años, sino seis y unos meses, los que transcurrieron antes de que Felipe González ganara las elecciones. Por una mayoría absoluta que laminó al partido creado por Adolfo Suárez, la UCD, y convirtió a Fraga en líder de la oposición.



La tentación de dimitir

*E*n algún momento todos los presidentes del Gobierno han tenido la tentación de dimitir, aunque solo uno de ellos lo hizo: Adolfo Suárez, con el partido roto, la percepción personal de que su relación con el rey no era tan fluida como al principio de su mandato y las críticas generalizadas y demoledoras hacia su gestión. Críticas que no tardaron en ser olvidadas. Suárez pasará a la historia no solo como impulsor de la Transición, sino también como el presidente más querido y admirado de la democracia, incluso por quienes le hicieron frente desde la oposición. Y, desde luego, por los políticos, periodistas y empresarios que le habían criticado tan dura y abiertamente.

En la idea de dimitir pesaron razones de estabilidad personal y emocional, pues tan altas responsabilidades pasan factura, pero sobre todo que, como alguno de ellos ha confesado después, a veces se sopesa si la dimisión puede suponer un beneficio para los españoles. Y es que los ciudadanos son siempre víctimas de las tensiones que se pueden producir dentro de un gobierno o de las que se pueden vivir entre el Gobierno y la oposición si se traspasan los límites.

Una persona que barajó la dimisión fue José María Aznar. No ha sido él quien lo ha confesado, ni siquiera en sus memorias; pero sí lo ha dado a entender quien fue su ministro de Defensa, Federico Trillo. En julio de 2002 el gobierno de Aznar sufría una gravísima crisis con Marruecos provocada por una situación que podría parecer ridícula si no fuera porque estaba en juego la dignidad de España, que debe defender con todos los medios a su alcance su soberanía territorial, tanto si se trata de una región entera como de un peñote deshabitado de apenas unos centenares de metros cuadrados. Este era el caso del islote de Perejil, una roca que casi se puede alcanzar a pie desde la costa

norte marroquí. Cercano a Ceuta, allí solo había unas cabras que pastaban libremente atendidas por una mujer que acudía de vez en cuando.

En esas fechas de mediados de 2002 las relaciones con Marruecos, una vez más, sufrían un momento de tensión. Ha sido lo habitual en la historia de España y Marruecos: cuando no había problemas con la pesca eran los conflictos fronterizos en Ceuta y Melilla, la reivindicación de estas dos plazas españolas, la devolución de inmigrantes ilegales, la utilización de la inmigración ilegal por parte de Marruecos para provocar conflictos con las autoridades españolas o, en los últimos años, la posición española respecto al Sáhara Occidental. Los sucesivos presidentes españoles han tratado siempre de mantener una posición muy cauta con Marruecos para evitar los conflictos, pero tanto Suárez como Aznar parecían empeñados en meterse en todos los charcos. En más de una ocasión tuvo que intervenir el rey Juan Carlos —que mantenía una relación de absoluta confianza, casi familiar, con Hasán II primero y con Mohamed VI después— para apagar los fuegos encendidos por los presidentes.

Un nuevo anuncio del Gobierno español reivindicando un referéndum en el Sáhara había enfadado al rey marroquí varios meses antes de ese julio de 2002, hasta el punto de que retiró a su embajador en Madrid. El rey Mohamed VI echó más leña al fuego con un gesto imprevisible y aprovechando, además, que a Asuntos Exteriores acababa de llegar un nuevo titular, Ana Palacio, la primera mujer en ocupar ese importante cargo y que apenas había tenido tiempo de ordenar su despacho cuando se produjo la ocupación de Perejil. Una maniobra que consistió en que un grupo de militares marroquíes instalaron un campamento dispuestos a permanecer en aquellas rocas como si fuera territorio propio. Un comunicado emitido por el gobierno de Rabat advertía que la operación tenía como objeto protestar por «la emigración ilegal y el terrorismo en el estrecho de Gibraltar». Argumentos que no creyó nadie; entre otras razones porque la emigración procedía de las costas marroquíes, no de las españolas, y el terrorismo contra el que luchaba el Gobierno español era el de ETA —aún no había aparecido el yihadismo—, que no afectaba a Marruecos.

La reacción del Gobierno de España no se hizo esperar y tras varios días exigiendo que aquellos hombres abandonaran el islote y fracasadas las gestiones diplomáticas que realizaba Ana Palacio con su colega marroquí Mohamed Benaissa y con el secretario de Estado norteamericano Colin Powell —con el que la ministra española estableció una amistad estrecha en

esos años de graves conflictos internacionales—, Aznar decidió usar la fuerza. Lo dicho: la soberanía hay que defenderla con uñas y dientes, sea cual sea la extensión, uso, población e historia del territorio ocupado. En una reunión del gabinete de crisis celebrada poco después de la «invasión» de Perejil, el ministro Federico Trillo insistió en la necesidad de agotar todas las vías diplomáticas para tratar de evitar males mayores. Sin embargo, le entregó al presidente una nota —que solo debía manejar Aznar— con el plan que habían preparado los expertos en defensa por si era necesaria una intervención militar en el caso de que Marruecos no aceptara razones diplomáticas y se empeñara en mantener allí el campamento en el que se habían instalado los soldados.

Los días siguientes Aznar hizo gestiones sin éxito ante el primer ministro marroquí y finalmente informó a Javier Solana, «Míster PESC», responsable de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, además de exministro de Asuntos Exteriores español que también tuvo que lidiar en su momento con las complicadas relaciones con Marruecos— que si los marroquíes no abandonaban el islote de Perejil el Gobierno estaba decidido a asaltarlo para reivindicar la propiedad española. Trillo llamó a sus colegas europeos y al secretario general de la OTAN. La ministra de Exteriores, Ana Palacio, se puso nuevamente en contacto con el secretario de Estado, Colin Powell, pero nadie conseguía desbloquear la situación y los soldados marroquíes continuaban en Perejil. Es entonces cuando Aznar indica a Trillo que prepare la operación militar.

Se celebra una reunión del presidente con su ministro de Defensa y los altos mandos militares: el jefe del Estado Mayor de la Defensa y los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos. Asiste también el entonces vicepresidente Rodrigo Rato. Una vez que el jefe de Operaciones Especiales, el general Andreu, explica cómo se va a desarrollar la intervención, la hora apropiada, los efectivos que llegarán en helicóptero, el armamento y cómo van a actuar contra los soldados marroquíes —era esencial no causar víctimas—, Aznar hace la pregunta que nadie se atreve a plantear abiertamente: qué puede ocurrir si la operación fracasa. Hay unos segundos de silencio y finalmente el general toma la palabra para pronunciar la frase que, en casos así, es la única que pronuncia un jefe militar: «No está previsto el fracaso, señor presidente». Pide la palabra otro general, Agustín Pardo de Santayana, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, que es clave para que Aznar tome la decisión: «Si fuéramos británicos —dice el JEME— la isla ya estaría tomada». Le pregunta Aznar qué es lo que diferencia a españoles y británicos ante una

situación como la que están viviendo y Pardo de Santayana es muy claro: «No temen las bajas, señor presidente». Y Aznar solo dice que alguna vez los españoles deben ser como los británicos y que ya les comunicará su decisión.

Todo está preparado para la noche del 16 al 17 de julio. Una vez dada la orden se necesitan dieciséis horas para movilizar a la gente necesaria con su armamento, explicarles la operación y que suban a los helicópteros. Ninguna gestión diplomática había dado resultado y además el Gobierno marroquí, en un gesto que solo podía considerarse como una provocación, había convocado a los periodistas frente al islote para explicarles las razones de su ocupación y reivindicar que se trataba de una propiedad marroquí. Aznar dio la orden de intervención, pero dudó en el último minuto porque los militares estadounidenses de las bases conjuntas habían sido informados por sus colegas españoles de la utilización de dos helicópteros. La inquietud de Aznar y Trillo fue total por miedo a que los americanos informaran al rey marroquí, ya que el Gobierno de Estados Unidos y sobre todo el secretario de Defensa han mantenido relaciones excelentes a lo largo del tiempo, de absoluta prioridad frente a otros países, debido a la relevante posición geoestratégica de Marruecos, en cierto sentido centinela del estrecho de Gibraltar, puerta del Mediterráneo. Sin embargo, una vez iniciada la operación, con los dos helicópteros en camino, no se podía dar marcha atrás. Tampoco había un segundo intento: había que proceder a «reconquistar» Perejil.

Aznar preguntó a Trillo qué ocurriría si fracasaba la intervención y el ministro insistió en que todo estaba minuciosamente preparado para que eso no sucediera. Aznar seguía nervioso: «¿Y si se producen bajas?». Trillo fue muy claro: «Entonces mi cabeza está a tu disposición, presidente». Fue cuando dijo Aznar: «Si solo fuera tu cabeza...». El presidente, estaba claro, lo tenía decidido: si fracasaba la operación o se producían bajas que envenenarían de forma irremediable las relaciones con Marruecos, era su cabeza la que pondría a disposición del rey Juan Carlos, que se encontraría con la dimisión sobre la mesa. Al final no hubo que recurrir a tal extremo.



¿Quién capitalizó el independentismo?

El presidente Mas no tuvo excesiva visión de futuro. Abrazó la causa independentista con armas y bagajes, provocó la ruptura de la coalición que hasta entonces dominaba social y políticamente Cataluña (CiU), provocó una tensión máxima con el Gobierno de España y con la mayoría de los dirigentes políticos españoles y provocó también su propio hundimiento, ya que no supo calibrar las consecuencias de la apuesta tan arriesgada que hacía. Ha salido, de la Generalitat además, con su honra en entredicho, ya que las negociaciones con la independentista CUP traspasaron largamente los límites de lo que se considera adecuado y entraron de lleno en el terreno de la humillación. Artur Mas dejó a su partido, Convergència Democràtica de Catalunya tan tocado, tan debilitado, que se vio obligado a cambiar el nombre para intentar así recuperar el cuantioso terreno perdido. Hoy Democràcia i Llibertat intenta lamerse las muchas heridas para intentar curarlas, pero se ha dejado demasiados cadáveres en el camino.

Entre ellos el del propio Artur Mas, el catalán independentista probablemente con menos visión sobre el futuro del independentismo y, lo que es peor, sobre quién y qué partido iba a capitalizar su arriesgada apuesta de convertir a CiU en una formación que abogaba por la escisión de Cataluña y la ruptura con el resto de España. Que desde luego no fue CDC, sino Esquerra Republicana de Catalunya y, en segundo término —no por número de escaños pero sí por capacidad de maniobra— la CUP, que fue quien mandó a su casa a Mas después de un tira y afloja que dejó irremediabilmente maltrecha la imagen del expresidente de la Generalitat. Su escasa visión política

sorprendió a más de uno porque parecía evidente que el llamado *procés* independentista iba a encontrar serias dificultades y podía llevarse por delante a Mas, como así fue.

Un político como Xavier García Albiol —que en 2012 se encontraba empeñado en su responsabilidad de gobernar un ayuntamiento complicado como el de Badalona—, en un encuentro que mantuvo ese año con Artur Mas para pedir ayuda a la Generalitat para resolver problemas de su municipio, en el tono de cordialidad que era habitual entre ellos le advirtió al entonces presidente que no se equivocara respecto a las simpatías políticas de quienes enarbolaban la estelada en cuanto acto público se celebraba en Cataluña: «Votarán a ERC o a la CUP, no a Convergència», le dijo claramente. Pero no lo vio el *president*. Zanjó el tema con un «Ya veremos» que indicaba que no tenía en mucha consideración las apreciaciones y análisis de Albiol, a pesar de que el alcalde, por su cargo, estaba muy pegado a los sentimientos de la calle, como sucede con los ediles que se toman en serio su trabajo.

Meses después, cuando el adelanto electoral promovido por Mas tuvo el resultado conocido —menos votos para CiU que en las elecciones anteriores—, en un nuevo encuentro con Albiol este le recordó que seguía siendo presidente gracias al apoyo de ERC, la advertencia que le había hecho, pero Mas siguió en sus trece. Albiol le mencionó aquello meses después en una nueva conversación telefónica y Mas le dijo: «Espero que cuando estemos a punto de caer al precipicio nos sentemos y podamos hablar». No fue así.

Rajoy tuvo disposición para hablar con Artur Mas hasta que se sintió engañado por él. El punto de inflexión fue un encuentro mantenido en La Moncloa, en el que acordaron una serie de términos sobre los que trabajar. Cuando llegó Mas a Barcelona, hizo una serie de declaraciones a los periodistas contrarias a lo que había hablado con Rajoy. Después de ese encuentro, Rajoy no movió un solo dedo para reanudar el diálogo y dejó que Mas se acercara al borde del precipicio. En el entorno de Mas hay quien dice que lanzó un órdago y le salió mal, por eso cayó a lo más hondo. Otros, sin embargo, consideran que no ha habido tal hundimiento porque el proceso independentista se ha iniciado. Y es verdad, continúa, pero Mas ya no lo capitanea y su partido ha dejado de tener el respaldo en las urnas que le convirtió, durante décadas, en el principal partido de Cataluña y a sus dirigentes en los referentes de Cataluña en el resto de España.



¿Aznar celoso del rey?

José María Aznar no tuvo una especial cercanía con el rey Juan Carlos. Nunca se produjeron choques durante su gobierno —difícil que ocurriera, pues don Juan Carlos siempre dijo que haría cuanto estuviera en su mano para mantener excelentes relaciones con el presidente, el que fuera, y lo cumplió a rajatabla—, pero era evidente que Aznar marcaba distancias con el monarca. Hasta tal punto que era habitual en las conversaciones entre políticos escuchar comentarios como que el presidente sentía celos del protagonismo del jefe del Estado y que, además, no quería repetir el modelo de Felipe González, que durante sus catorce años de gobierno mantuvo una relación muy estrecha con el monarca. Como la tuvo con Adolfo Suárez, el hombre al que don Juan Carlos eligió para que fuera el presidente que pusiera en marcha el proceso que transformaría la dictadura en una democracia plena. Una democracia con mayúsculas, porque el esfuerzo de los españoles y de sus dirigentes, empezando por el rey Juan Carlos y continuando por Adolfo Suárez y los líderes de los partidos de entonces, políticos tan distintos entre sí como Felipe González, Santiago Carrillo, Manuel Fraga Iribarne o los nacionalistas Xabier Arzalluz y Jordi Pujol.

Era sabido que el afecto y respeto que profesaba el rey a Adolfo Suárez era profundo: los dos defendían el mismo proyecto y lo pusieron en marcha sin arredrarse ante las muchas dificultades. Sin embargo, cuando se iniciaba la segunda legislatura de Adolfo Suárez se produjo un distanciamiento que pronto se hizo evidente, y cuyas causas nunca explicaron ni uno ni otro, aunque probablemente fuera un cúmulo de desencuentros que enfriaron la calidez y la confianza que siempre había existido entre ellos. Años más tarde, después de que Suárez presentara su dimisión y creara un nuevo partido —con poca

fortuna, pues no tuvo la respuesta en votos que esperaba— de nuevo el rey y Suárez reanudaron aquella estrecha relación interrumpida, sobre todo tras las sucesivas desgracias familiares que sufrió el expresidente.

A Suárez le sucedió Leopoldo Calvo-Sotelo, que también mantuvo muy buenas relaciones con don Juan Carlos, pero ni de lejos comparables a las de Adolfo Suárez. Influyó el hecho generacional, pero también que la aprobación de la Constitución en 1978 había recortado sensiblemente las atribuciones del rey Juan Carlos, con lo que desaparecía la complicidad que se había producido entre el jefe de Estado y el de Gobierno cuando los dos juntos tuvieron que tomar importantes decisiones políticas. Entre ellas, hay que recordarlo, que la primera legislatura fuera constituyente, aunque el rey sabía que la nueva constitución limitaría sus competencias, como ocurre en los regímenes de monarquía parlamentaria. Con Calvo-Sotelo, hombre de larga trayectoria política y empresarial, la relación fue de gran confianza en su año y medio de gobierno por el peculiar carácter de este, su enorme sentido institucional y la certeza de que aquellos meses difíciles, posteriores a la intentona golpista de Tejero, solo podían superarse con el empeño conjunto del jefe del Estado —que además era capitán general de los ejércitos— y del jefe del Gobierno.

Felipe González supuso un punto y aparte en las relaciones de don Juan Carlos con el presidente de turno. Se entendían muy bien, entre otras razones porque se hablaban con una sinceridad absoluta, aunque uno u otro supieran que sus reflexiones o comentarios podían doler o molestar a la otra parte. Compartían confidencias importantes, como es habitual, pero también hablaban sobre las cosas pequeñas, las de todos los días. Podría decirse que eran amigos, si se acepta que los reyes pueden tener amigos. Acometieron grandes retos que se realizaron porque los defendían conjuntamente. La relación ha continuado igual de firme y de sincera a lo largo de los años y seguro que cuando José María Aznar llegó a La Moncloa conocía la fortaleza de esa relación personal y política, y quizá sabía también que el rey le había propuesto a Felipe González mantener el contacto periódicamente con despachos en los que analizarían las distintas cuestiones nacionales e internacionales de actualidad. Una idea que rechazó González. Le dijo al rey que esas audiencias podían incomodar, con razón, al jefe del Gobierno. Sin embargo, era de dominio público que aunque el rey y Felipe González podían pasar meses sin verse, cuando se producía algún acontecimiento relevante era

habitual que don Juan Carlos llamara al expresidente para cambiar impresiones con él.

¿La frialdad, evidente, que mostraba Aznar al rey Juan Carlos estaba motivada por los celos? Es posible, pero cualquiera que conozca mínimamente cómo funcionan los sentimientos sabe que la mejor manera de ganarse la confianza de alguien es aceptar que tiene rincones de privacidad que comparte con otras personas. Sin embargo, fueran celos de sus antecesores o simplemente interés en marcar su propio territorio, lo evidente para todo el mundo fue que, en sus ocho años de gobierno, José María Aznar mostró una actitud fría con el rey Juan Carlos. A pesar de que el monarca le trató siempre con exquisita cortesía, más de la que venía obligada por el cargo.

Por ejemplo, cuando en julio de 1997 el presidente Bill Clinton debía viajar a Madrid para asistir a la cumbre de la OTAN, recibió una invitación de los reyes para pasar unos días en Mallorca antes de ir a la reunión. Don Juan Carlos y doña Sofía acompañaron a Bill Clinton y su esposa Hillary a los rincones más hermosos de la isla, les mostraron su riqueza histórica y cultural, su gastronomía y organizaron una excursión en el yate *Fortuna* para recorrer las costas y tratar de llegar a la isla de Cabrera si la mar lo permitía. El rey invitó a José María Aznar y a su mujer, Ana Botella, a que se sumaran a la excursión, una oportunidad única para que el presidente conociera a Clinton en un plano personal, casi familiar. Don Juan Carlos incluso hizo de traductor entre los dos: en aquellos tiempos Aznar apenas hablaba inglés.

El encuentro fue un éxito, pero la falta de sintonía entre el presidente y el rey no tardó en reaparecer. Con alarde, además. Desde hacía años el rey quería viajar a Cuba. Era el único país latinoamericano que no había visitado oficialmente, y allí se encontraba una importante y numerosa comunidad de españoles o descendientes de españoles a los que quería escuchar, como había ocurrido en otros países. Sentía interés, además, en verse con Fidel Castro, en aquel momento todavía presidente. Se le podía hacer la reflexión de que no convenía visitar ningún país con un dictador como presidente, pero no tenía sentido porque así funcionan las relaciones internacionales. De hecho, don Juan Carlos había acudido a Argentina, China y otras dictaduras que, a su vez, habían recibido a jefes de Estado extranjeros de países indudablemente democráticos. Viajes, además, que se podían aprovechar para resolver problemas de ciudadanos españoles: un rey consigue más que cualquier embajador, por bien que sepa este presionar al Gobierno del país en el que está acreditado.

Sin embargo, Aznar no quiso ni oír hablar del tema. ¿Celos de la personalidad del rey, del protagonismo que lograba en todos sus viajes? Puede. Celos distintos a los que podía tener de su relación con quienes le antecedieron en La Moncloa. Era de dominio público que el rey Juan Carlos ansiaba hacer ese viaje y en Cuba daban por hecho que el Gobierno le permitiría responder afirmativamente a la invitación que le habían cursado, la cual Fidel quería que coincidiera con la conmemoración del centenario de 1898, fecha de la independencia de Cuba. En favor de la visita del rey se había pronunciado incluso algún miembro de la disidencia cubana en la isla, alegando que podía favorecerles ese viaje, pues creían que don Juan Carlos tenía cierto ascendente sobre Fidel Castro y a lo mejor le hacía abrir la mano, como ocurrió con Videla cuando el rey le presionó a favor de los presos políticos de origen español. Los cubanos de Miami, sin embargo —que mantenían relaciones muy estrechas con Aznar y otros dirigentes del PP—, se mostraban abiertamente contrarios a que el rey se viera con Castro en Cuba. Era opinión generalizada que en las reticencias del presidente también influían los mensajes que llegaban desde el exilio cubano de Miami.

En ese tira y afloja en el que se prolongaba la incógnita sobre la decisión del Gobierno, tuvo lugar una entrevista en la cadena COPE durante la cual el presidente Aznar respondió a la pregunta sobre el viaje de la manera más descortés posible: «Irá cuando toque». Una frase gélida en la que expresaba, además, una gran prepotencia: era él, como presidente del Gobierno, quien decidía lo que podía o no podía hacer el rey. Un año más tarde se celebraba una nueva Cumbre Iberoamericana y correspondía a Cuba ser anfitriona del encuentro en La Habana. El rey Juan Carlos, al fin, podía visitar Cuba. El rey sugirió al Gobierno la idea adelantar un par de días el viaje junto a la reina, para disponer así de tiempo suficiente para entrevistarse con Castro. Cuando comenzara la Cumbre los dos iban a estar muy ocupados con las sesiones y las reuniones bilaterales y, además, seguía empeñado en su encuentro con los españoles descendientes de emigrantes. Aznar no quiso. Y así le fue comunicado al rey.

A esas cumbres, que fueron una iniciativa del rey Juan Carlos y Felipe González, siempre acudían los reyes junto al presidente del Gobierno, así que Juan Carlos y José María Aznar presidían la delegación española. Aznar hizo un alarde más de frialdad con el rey que rayó abiertamente en la falta de educación. Durante un paseo por el centro histórico de la ciudad colonial, donde las estrictas medidas de seguridad impedían que pudieran recibir el

saludo de los cubanos, un sol de justicia caía sobre la comitiva, que aguantaba estoicamente el calor. Excepto Aznar: el presidente español no dudó en quitarse la chaqueta y colgársela de un hombro, mientras Juan Carlos mantenía las formas y soportaba la temperatura y la humedad a pie firme como el resto de los miembros de la comitiva. Lo ocurrido en La Habana con Aznar tuvo mucho que ver con el hecho de que era de dominio público que, a pesar de la distancia abismal que existía entre los principios de Juan Carlos y Fidel Castro, el dirigente cubano siempre había expresado su admiración por el rey, con quien incluso había mantenido un encuentro en la anterior Cumbre celebrada en Lisboa. En la de La Habana pudieron finalmente entrevistarse, a solas, cuando Fidel acompañó hasta el aeropuerto al rey para que tomara el avión que le conduciría a Madrid.

Los tres encuentros que mantuvo Aznar con Fidel Castro en sus ocho años de gobierno fueron siempre fríos y obligados por las circunstancias. Fidel no soportaba los apoyos de Aznar a los grupos anticastristas de Miami, como Aznar no soportaba nada de lo relacionado con la dictadura castrista. El rey, sin embargo, siempre tuvo claro el espíritu con el que han de llevarse las relaciones internacionales, en las que priman los intereses de los respectivos pueblos, así como las operaciones comerciales y empresariales, por encima de las ideologías. Es la razón de que en el mundo entero los gobernantes de los países más democráticos mantengan relaciones con dictaduras.

No fue Aznar el único presidente que hizo alarde de poderío ante el rey. También Rodríguez Zapatero —que mantuvo con don Juan Carlos una relación mucho más cercana que José María Aznar— en alguna ocasión cortó alas al rey como para demostrar que el jefe del Gobierno era quien llevaba la batuta. Uno y otro lo hicieron, además, cuando los interlocutores internacionales del rey mantenían una relación con don Juan Carlos más fluida que con el presidente español de turno. Zapatero tuvo gestos poco gratos para el monarca sobre los que este jamás pronunció palabra, pero que se conocieron porque algunos de los testigos acabaron contándolos en libros y artículos o se los relataron a periodistas. Es lo que ocurrió con Jorge Dezcallar, diplomático de larga trayectoria que, además, fue director del CNI y que en su libro *Valió la pena* recoge algunas de sus experiencias como embajador en Washington, el último destino de su carrera profesional.

Fue nombrado para este cargo durante los últimos meses como presidente de George W. Bush, un hombre que no sentía ninguna simpatía por Rodríguez Zapatero. El motivo: la falta de respeto de Zapatero, aún en la oposición, a la

bandera de los Estados Unidos en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Y también porque días después, a las pocas horas de jurar como presidente y de haber ordenado la retirada de las tropas españolas de Iraq, hizo un llamamiento a los países que todavía mantenían presencia militar en ese país para que siguieran su ejemplo. Para Zapatero fue una satisfacción casi personal que Barack Obama ganara las elecciones. No contra Bush, que ya había cumplido su segundo mandato, sino contra John McCain. La animadversión de Bush hacia Zapatero era tan clara que además de saludarle gélidamente cuando se lo encontraba en alguna cumbre de la OTAN, no ocultó su contrariedad cuando Francia cedió su puesto a España en una reunión del G-20. Como explica Dezcallar, maniobró para que el presidente español no pudiera hacer uso de la palabra.

Lo más interesante del libro del embajador relacionado con Zapatero y el rey es lo que recoge sobre los pasos que dio el presidente español para que Obama le recibiera a él antes que a don Juan Carlos, probablemente porque no pudo soportar los celos cuando Bush, de quien recibió un trato rayano en la grosería, había invitado al rey a su rancho, como si Bush quisiera demostrar así que no tenía nada contra España, sino contra su jefe del Gobierno.

Cuenta Dezcallar que el ministro Moratinos le había pedido que hiciera una gestión ante la Casa Blanca para que Obama recibiera al rey Juan Carlos en una fecha determinada. «Cuando trasladé la petición a la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, responsable de Europa en el National Security Council, me preguntó si era normal que el rey visitara Estados Unidos antes que el presidente del Gobierno. Le contesté, seco, que el rey era el jefe del Estado y entonces ella se descubrió al inquirir si yo le estaba hablando en nombre del Gobierno, a lo que, muy molesto, le respondí que yo había ido a verla como embajador de España y que como tal le había hecho la solicitud». Y continúa el relato: «Salí de la reunión indignado como pocas veces lo he estado, pues sus cuestiones revelaban que alguien había hecho antes que yo una propuesta diferente a Washington y eso solo podía proceder de La Moncloa, que quería que Rodríguez Zapatero pisara la Casa Blanca antes que el rey. Moratinos y Aza (jefe de la Casa del Rey) no se lo podían creer. Les dije a ambos que me estaba quemando y que por eso era mejor que me cesaran y buscaran otro embajador. Pero mi presunción era correcta: mientras yo pedía que Obama recibiera al rey, La Moncloa sugería por su cuenta, a espaldas de la propia Zarzuela —y por supuesto de la embajada—, que atendiera antes a Rodríguez Zapatero. Y yo en las nubes. ¡Vaya papelón! Somos expertos en

pegarnos tiros en nuestros propios pies, como dicen los americanos. Al final, Rodríguez Zapatero se llevó el gato al agua y fue el primero en plantarse en la Casa Blanca. Llevaba cinco años esperando ese momento».



Vacaciones con polémica

Solo Leopoldo Calvo-Sotelo y Mariano Rajoy han logrado que sus vacaciones de verano estuvieran exentas de polémica. El primero se mantuvo fiel a Ribadeo, donde la casa familiar de los Bustelo Calvo-Sotelo fue su destino, como lo había sido desde antes de acceder a la presidencia del Gobierno. Y Rajoy fue fiel a Pontevedra, como siempre, aunque con algún cambio respecto a años anteriores.

El apartamento de Sanxenxo no recibió el visto bueno de los servicios de seguridad, pues formaba parte de un bloque de viviendas difícil de controlar en esa localidad masificada durante el verano. Rajoy tampoco quiso acogerse a la hospitalidad de familiares y amigos que le ofrecían sus chalés, que sí había aceptado en ocasiones anteriores, cuando era ministro. Su mujer, Elvira Fernández, le propuso que alquilaran una casa rural por la zona y ella misma se ofreció a buscarla en internet. La encontró en Ribadumia, muy cerca de Sanxenxo, A Casa de Alicia, de tres habitaciones, con piscina y un salón comedor. En temporada alta se alquilaba completa por 270 euros diarios. Tenía capacidad para seis personas y posibilidad de cama supletoria. El nombre de Ribadumia, en pleno valle del Salnés, en Pontevedra, famoso por su marisco, el albariño, La Toja y algunos de los más insignes escritores gallegos, está ligado a Rajoy, que suele iniciar sus jornadas veraniegas subiendo entre pinos hasta el monasterio de Armenteira, desde donde se puede contemplar una de las vistas más hermosas de la ría de Arosa.

En lo que respecta a las vacaciones presidenciales, Felipe González cometió varios errores. El principal y más polémico, que provocó un profundo malestar incluso entre sus colaboradores más próximos y leales, fue utilizar el yate *Azor* para sus vacaciones del verano de 1985. Se trataba del yate de

Franco, un barco ligado a la historia de la restauración de la monarquía, pues fue a bordo del mismo donde se celebró el encuentro de Franco con don Juan de Borbón en el que decidieron que Juan Carlos, un niño de apenas diez años, empezara a estudiar el bachillerato en España. El *Azor* era un signo fundamental del franquismo, de las largas jornadas de pesca de Franco en el Cantábrico y en las rías gallegas, cuando se contaba que sus dotes para esa afición se veían agrandadas gracias a que destacados pescadores indicaban a la tripulación en qué caladeros podían encontrar las importantes piezas que incrementaban la leyenda del Caudillo.

Felipe González embarcó en el *Azor* al finalizar una visita a Lisboa. Iba acompañado de su hermana Lola y de su cuñado Paco Palomino, que durante toda la presidencia de González estuvo en el foco de la polémica por supuesto trato de favor para ampliar sus muchos negocios. Al llegar a Portimão, en el Algarve, se les unió Carmen Romero, trasladada hasta allí en helicóptero. Algo que años más tarde habría sido impensable, pues se empezó a mirar con lupa —y con razón— el trato que se daba a las mujeres e hijos de los presidentes. Lo más irritante de aquel viaje del *Azor* fue la reacción del presidente a las críticas. González expresó su sorpresa por el hecho de que fueran infinidad los españoles, entre ellos destacados socialistas, que mostraron en público su rechazo a la utilización del yate franquista. Fue probablemente el primer indicio de que Felipe González identificaba el cargo con el derecho a usar todo lo que fuera patrimonio del Estado sin tener en cuenta que algunas cosas podían herir sensibilidades. Las razones eran varias: tratarse de signos de riqueza que se consideraban impropios de un jefe del Gobierno —que debía mantenerse alejado de la ostentación—, o que la historia de ciertas residencias, yates o automóviles estaba demasiado vinculada a personajes de infausto recuerdo.

Adolfo Suárez pasó sus primeras vacaciones como presidente en la Costa Brava, en Bagur, en la espectacular mansión que puso a su disposición un empresario del sector inmobiliario, Antonio Van de Walle. La familia Suárez lo compartió con la de Manuel Gutiérrez Mellado y Fernando Abril Martorell, dos vicepresidentes del Gobierno con los que Suárez mantenía una muy estrecha relación. Posteriormente el presidente veraneó en Baleares, donde acabó comprando una vivienda cuando dimitió del cargo. Allí se encerró cuando se agravó la enfermedad de su mujer, Amparo, a la que atendió allí, personalmente, sin más presencia que la de las otras personas que la cuidaban.

Incluso sus hijos tuvieron que hacer presión para visitarles, pues Suárez no quería que vieran el deterioro físico y el sufrimiento de su madre.

Las vacaciones de verano que provocaron más polémica fueron las de su último mandato, cuando aceptó la invitación de un constructor de Pontevedra, Raimundo Vázquez, que puso a disposición del presidente y de su familia su finca La Atlántida, cerca de El Grove. Existía una fuerte polémica local porque al parecer había ampliado sus límites con terrenos que no le correspondían. Por otra parte la rumorología puso en circulación que Vázquez trataba de utilizar su relación con el presidente del Gobierno para fomentar sus negocios inmobiliarios.

Uno de los nombres asociados a las vacaciones de los presidentes, incluido Rajoy, es Doñana, «descubrimiento» de Felipe González para mayor disfrute de sus sucesores. González sentó las bases para que los presidentes del Gobierno contaran con una residencia de verano adecuada a su categoría institucional y a sus compromisos nacionales e internacionales. Así, ordenó convertir en residencia el palacio de las Marismillas, situado en el interior del coto. Felipe González conocía bien el lugar. Al llegar a la presidencia había decidido hacer uso de las reservas naturales, todas ellas con vivienda, para sus días de vacaciones. Como andaluz no pudo evitar poner los ojos en el parque de Doñana, de 11.000 hectáreas y que contenía la playa virgen más extensa de Europa.

Doñana y Quintos de Mora, en los Montes de Toledo, fueron base de los días de asueto de González durante sus años de presidencia. Al principio la estancia de la familia González en Doñana era muy pedestre y la residencia poco adecuada. Los chicos disfrutaban de la naturaleza de forma casi asilvestrada, pues en compañía de los guardias forestales se perdían en el parque aprendiendo todo lo relacionado con la vida en naturaleza. Años después, las discotecas de la cercana Matalascañas se convirtieron en el objetivo de ocio de los mayores. Felipe González salía de pesca muy de mañana con pescadores de Sanlúcar y los lugareños recuerdan que Carmen Romero solía dar clase a los hijos de los guardas forestales, recuperando así su actividad de profesora.

A principios de los noventa Felipe González dio instrucciones para que se acometieran obras de acondicionamiento de Las Marismillas. Allí acudieron invitados ilustres, desde Mitterrand a Helmut Kohl, pasando por los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola. Allí se celebraron algunas de las reuniones políticas más importantes de González y de Aznar, libres, en ese entorno

solitario, de que alguien pudiera detectar la presencia de personajes ilustres, tanto nacionales como extranjeros.

José María Aznar provocó también cierta polémica porque durante sus primeros años de presidente aceptó la invitación para pasar los veranos en el chalé que el entonces dueño de Porcelanosa, José Soriano, tenía en Platgetes, en Castellón. Desde Presidencia se aseguraba que el jefe del Gobierno había insistido en pagar un alquiler, pero que Soriano se negaba sistemáticamente. Al final, en 2002, decidieron buscar un lugar en Baleares, entre otras razones porque su hija Ana había roto con su novio, que veraneaba también en Platgetes, y no quería coincidir con él. Así encontraron una finca en Menorca que recibió el visto bueno de los servicios de seguridad —el eterno problema de los presidentes cuando quieren hacer alguna escapada fuera de La Moncloa o pasar unos días lejos de la residencia oficial—. Su dueño, un conocido médico menorquín, alquiló la casa a la familia Aznar. También Menorca fue el destino que eligieron José Luis Rodríguez Zapatero y Sonsoles Espinosa para las primeras vacaciones presidenciales.

En Mahón sufrieron el acoso periodístico, porque desde el primer día de su mandato Zapatero hizo saber a través de su equipo de comunicación que no permitía que se hicieran fotografías a sus hijas. La prohibición dio aliento a los *paparazzi*, que pusieron todo su empeño en lograr la imagen de las dos niñas, cosa que consiguieron, cuando ese primer verano lograron fotografiar al matrimonio y a sus dos hijas a bordo de un barco. Desde La Moncloa se amenazó con una denuncia a la revista que las publicó, pero no se concretó cuando la dirección prometió que no volvería a publicar fotografías de Laura y Alba... Sin embargo, ambas vieron reproducida su imagen *urbi et orbe* años más tarde, cuando acompañaron a sus padres a una audiencia con Barack y Michelle Obama y la Casa Blanca colgó la fotografía en su página web. Una imagen que provocó expectación, porque, además de que apenas existían imágenes de las chicas, estas decidieron acudir a la cita con el presidente americano vestidas de góticas: largos vestidos negros, pulseras negras y negras botas de corte militar.

El verano siguiente a las vacaciones en Mahón, Zapatero aceptó la sugerencia del rey Juan Carlos de instalarse en La Mareta, en Lanzarote, que Husein de Jordania le había regalado años antes y que el rey había cedido a Patrimonio Nacional. Diseñada por César Manrique, era sin duda una de las villas más espléndidas de la isla, con todos los lujos y comodidades, magnífico jardín, piscina, pista de tenis, además de la privacidad apropiada.

Pero también hubo polémica, porque semanas antes de iniciar las vacaciones Sonsoles Espinosa visitó la villa y decidió que se hicieran una serie de reformas para adecuarla a sus necesidades. Los medios de comunicación canarios cifraron el coste de las obras en unos 300.000 euros, lo que provocó una gran indignación, con el comentario generalizado de que parecía inconcebible que un lugar que había servido de residencia a la familia real en pleno, y a importantes dignatarios extranjeros, no fuera aceptable para la esposa del presidente del Gobierno y sus dos hijas.

Las experiencias presidenciales y las polémicas sobre sus decisiones acerca de dónde y cómo pasar las vacaciones, llevan a una conclusión: tenía razón Felipe González cuando decidió acondicionar el palacete de las Marismillas como lugar de ocio para los jefes de Gobierno y sus familias, y que fuera también lugar de acogida para visitantes extranjeros a los que se quisiera agasajar de forma especial. Está abierto todo el año, es suficientemente amplio como para que puedan dormir una docena o más de personas, el parque natural es de una belleza que asombra a todos los privilegiados que pueden residir allí, y su privacidad está asegurada. Además, nadie critica que el presidente de turno, o incluso alguno de sus ministros, se refugie allí cuando puede disponer de unos días de descanso o para celebrar reuniones que necesitan de un clima de aislamiento y tranquilidad.



La guerra de Aznar

Los que conocen la historia reciente llegan a la misma conclusión: Aznar cumplió sobradamente como presidente en su primera legislatura. Es la razón de que en 2000 volviera a ganar, en esa ocasión por mayoría absoluta. Pero en su segundo mandato cometió errores de bulto, unos en el plano político y otros en el personal. En este último la fastuosidad con la que celebró la boda de su hija Ana le hizo aparecer ante la opinión pública como un personaje con delirios de grandeza, que se veía como un jefe de Estado que casaba a su hija por todo lo grande, con invitación expresa a la familia real —asistieron los reyes— y varios jefes de Gobierno extranjeros. Boda celebrada en la iglesia del monasterio de El Escorial, donde reposan los restos de los reyes e infantes de España. Y que fue retransmitida en directo por la mayoría de las cadenas de televisión, como se hace cuando se casan príncipes y princesas herederos.

Coincidieron esos aires de grandeza con un evidente empeño de Aznar durante sus últimos cuatro años de gobierno de presentarse como un gran estadista que se movía a sus anchas en las altas esferas internacionales, incluso haciendo alarde de ello. En ese sentido, uno de los episodios de «propaganda» que provocó más ríos de tinta fue la fotografía realizada en un descanso de una reunión del G-8, a la que acudía como presidente de turno de la Unión Europea. En la imagen se veía a Aznar fumando un gran puro, con los pies sobre una mesa, junto al puñado de jefes de Gobierno que tomaban decisiones que podían cambiar el mundo. Fotografía que no había sido «robada» por ningún periodista, sino «filtrada» desde la propia Moncloa.

El otro punto de coincidencia de quienes han analizado el porqué del declive de Aznar fue el rechazo casi generalizado que provocó su apoyo a la guerra de Iraq. Apoyo que en contra de lo que creen gran parte de los

españoles no fue más allá de sustentar políticamente la decisión de George Bush. Nunca se enviaron tropas para combatir, aunque sí posteriormente para garantizar la seguridad en determinadas zonas de Iraq y Afganistán, realizar tareas médicas y humanitarias y formar parte de los equipos de formación y entrenamiento del Ejército y las Fuerzas de Seguridad de los dos países. Durante la guerra en sí, la contribución de España fue permitir el uso de las bases de utilización conjunta España-Estados Unidos en territorio español para la Fuerza Aérea norteamericana, y el envío de un buque hospital a la zona de la contienda.

El rechazo a la guerra de Iraq fue masivo en España, provocó el punto más bajo de aceptación de José María Aznar —que no se inmutó ante las multitudinarias manifestaciones— e incluso el descontento de importantes miembros de su partido, que actuaron con absoluta lealtad al presidente al votar en el Congreso de los Diputados el apoyo a Bush, a pesar de su conocida disconformidad.

Aznar utilizaba los mismos argumentos que su «amigo» Bush: la necesidad de parar los pies a Sadam Husein, que además de apoyar el terrorismo de Al Qaeda —lo que era falso— preparaba armas nucleares y químicas con las que atacar a sus enemigos. Pero aunque el secretario de Estado de los Estados Unidos presentó unas fotografías aéreas en Naciones Unidas como «prueba irrefutable» de la fabricación de armas de destrucción masiva por parte de Saddam, lo cierto es que esta acusación se demostró falsa también.

La guerra, y la pésima gestión del gobierno de Aznar a la crisis que provocó la tragedia del 11-M, tres días antes de las elecciones generales, fueron la causa directa de que Rodríguez Zapatero, contra todo pronóstico, ganara unos comicios en los que se presentaba Mariano Rajoy como candidato del PP. Por decisión personal de Aznar, por cierto, aunque en los años siguientes, tanto cuando Rajoy estaba en la oposición como cuando fue presidente del Gobierno, Aznar mantuvo una posición crítica hacia las decisiones de aquel a quien había elegido. Una situación que se produce con frecuencia entre el que ha sido presidente y su sucesor, cuando este fue señalado a dedo: el primero cree que el segundo está obligado a seguir la línea por él diseñada.

La posición de Aznar respecto a la guerra de Iraq, que tanto daño hizo a su partido, estaba marcada por la relación que mantenía con el presidente americano. Tras los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas y el Pentágono —y puede incluso que contra la Casa Blanca, pues el avión caído

en Pennsylvania aparentemente se dirigía contra el emblemático edificio presidencial—, se estrechó la colaboración entre España y los Estados Unidos. Si Clinton ya había dado instrucciones a sus servicios de inteligencia para ayudar a España en la lucha contra ETA, Bush comprendió a raíz del 11-S que el peligro del terrorismo obligaba a tomar decisiones en todos los frentes. Además de reafirmar la colaboración de España contra los etarras, el Gobierno estadounidense entendió que España era uno de los países europeos con más experiencia en la lucha contra el terrorismo. Por tanto, el mantenimiento de la colaboración no solo era positivo para los españoles, sino también para los estadounidenses.

Bush fue más lejos a la hora de intensificar esa relación, ya que además pidió a Aznar que le apoyara en su decisión de emprender una guerra contra Saddam Hussein. Aznar, de pronto, se sintió importante. O más importante. El llamamiento del presidente de los Estados Unidos le colocaba en un plano superior, y su argumento de apoyo político y logístico venía respaldado por otro que Aznar esgrimía ante los descontentos: los acuerdos bilaterales firmados por los dos países en tiempos de Franco y que habían sido revisados y renovados por los sucesivos presidentes de la democracia. A esto había que sumar la contraprestación que España debía a los Estados Unidos por la ayuda tecnológica que se prestaba a los cuerpos de seguridad del Estado que luchaban contra ETA. Y en tercer lugar Aznar se había convencido —o se había dejado convencer— de que Al Qaeda era un peligro para el mundo occidental gracias al supuesto apoyo de Saddam Hussein. Un dictador decidido a utilizar armas de destrucción masiva contra cualquiera que le hiciera frente. Lo había hecho contra kurdos y chiitas, y por tanto nada impedía que lo hiciera también contra países occidentales.

Cuando poco después de los atentado del 11-S Bush llamó por teléfono a Aznar para informarle personalmente de que había tomado la decisión de intervenir en Iraq y le pedía colaboración —le interesaba sobre todo la utilización de las bases aéreas, que eran de utilización conjunta pero obligaban a una autorización previa del Gobierno español para disponer de corredores en el espacio aéreo—, el presidente americano encontró a un Aznar convencido de la necesidad de la intervención, pero con cierta preocupación por la repercusión que ello podía tener para su partido. A Bush le interesaba anunciar que contaba con el respaldo de España, porque se había encontrado con la oposición de otros países europeos, entre ellos la postura inamovible, drástica y contraria del Gobierno alemán. La preocupación de Aznar se debía

a que las elecciones municipales y autonómicas se celebrarían en unos meses y evidentemente el apoyo a una guerra que provocaba tantas dudas podía afectar a los resultados. Así se lo dijo abiertamente a Bush.

El presidente estadounidense le preguntó cuándo se celebraban las elecciones. «En mayo», le respondió Aznar. Y un Bush contundente, un exceso seguro de sí mismo, «sobrado», le respondió que la guerra habría terminado tres semanas antes. Y oficialmente así fue. Al menos unas semanas antes del 25 de mayo George Bush dijo al mundo con cara de satisfacción: «War is over». La guerra ha terminado. Bush creyó ingenuo que la toma de Bagdad y Tikrit, feudo de Saddam, así como el arresto o muerte de los principales colaboradores del sanguinario dictador y la destrucción de los símbolos significaban el fin de la guerra. No fue así. Ni siquiera se pudo presentar como un éxito la detención del propio Saddam, acorralado tras meses de huida, finalmente ahorcado y muerto como un perro. Esa guerra, que en efecto produjo un daño inconmensurable al PP, fue el origen del DAESH, la excusa para que musulmanes fanatizados decidieran crear, a sangre y fuego, con métodos terroristas y genocidas de violencia extrema, un estado islamista.

Aquella conversación primera de Aznar con Bush fue el inicio de una relación de confianza y estrecha amistad entre los dos presidentes. Pero las consecuencias para la trayectoria y la imagen de Aznar, y para su partido, fueron de gravedad extrema. El PP tardó años en quitarse de encima el estigma de esa guerra en la que España no participó, pero en la que millones de españoles creen que tuvo intervención activa.



Secuestrados

Fue Rajoy el presidente que tuvo soportar con toda su crudeza el terrorismo del DAESH, acrónimo despectivo que utilizan los antiyihadistas para denominar lo que los yihadistas califican como «Estado Islámico». El PP de Aznar perdió las elecciones de 2004 por la escasa inteligencia con que gestionó el atentado de Atocha y el oportunismo del PSOE cuando advirtió la debilidad del partido que hasta ese momento era seguro ganador. Sin embargo, los terroristas de Atocha, a pesar de sus casi doscientas víctimas mortales, eran novatos ante el fanatismo, la crueldad, la barbarie y la devastación provocada por el DAESH, que no pone límites a su brutalidad y ni siquiera respeta a ancianos, mujeres y niños, a los que esclaviza, viola y convierte en bombas humanas y kamikazes.

Para Rajoy, como para los jefes de Gobierno con los que coincidió en el tiempo, tanto los occidentales como los de los países musulmanes, el terrorismo del DAESH se convirtió pronto en su máxima preocupación. La bomba podía explotar en cualquier momento y contra cualquier objetivo, como bien sabía Hollande, que tuvo que enfrentarse a las masacres en la redacción de la revista *Charlie Hebdo*, la discoteca Bataclan y los restaurantes ametrallados el 13 de diciembre de 2015, entre los múltiples atentados que han asolado Francia en los últimos años. Rajoy, además de poner en marcha un importante dispositivo de seguridad permanente que obligó a destinar a centenares de guardias civiles, policías y miembros del CNI a poner todo su empeño en la lucha contra el yihadismo, tuvo que vérselas con operaciones que pusieron en jaque al Gobierno y a los servicios de seguridad y de inteligencia españoles: el secuestro de periodistas y de miembros de organizaciones no gubernamentales que trabajaban en zonas cercanas a las

dominadas por los yihadistas, donde trataban de ayudar, en la medida de sus posibilidades, a la población civil que sufría las consecuencias atroces del terrorismo.

En los primeros días de septiembre de 2013 era secuestrado en Siria el periodista catalán Marc Marginedas. A pesar de que durante unos días tanto su familia como la redacción de *El Periódico de Catalunya* guardaron un silencio absoluto aconsejados por los expertos en ese tipo de situaciones, no se pudo ocultar durante mucho tiempo la noticia. Apenas diez días más tarde los secuestrados eran Javier Espinosa, de *El Mundo*, y el fotógrafo *free lance* Ricardo García Vilanova. Tuvieron que transcurrir más de seis meses hasta que, en marzo de 2014, fue liberado Marginedas y, apenas dos semanas después, Espinosa y Vilanova. Juntos, como juntos habían sido secuestrados. Su «delito», el de los tres, era el mismo: adentrarse en Siria, país en guerra civil en el que el ejército del presidente Bashar al-Assad actuaba con violencia extrema contra los rebeldes que se habían hecho fuertes en parte del territorio. Los bombardeos contra esas zonas rebeldes fueron brutales y continuados. Los rebeldes no tardaron mucho en radicalizarse y convertirse en carne de cañón para ser captados por grupos afines a Al Qaeda que derivaron años después en conjunción de intereses con el DAESH.

En 2016 las víctimas de la guerra en Siria alcanzaban los doscientos cincuenta mil muertos y el éxodo de refugiados provocó una crisis económica y social que removi6 los cimientos de la Unión Europea. Sin embargo, el año en el que fueron secuestrados Marginedas, Vilanova y Espinosa parecía que el conflicto se circunscribía solo a Siria y, aunque arriesgaban su vida, nunca pudieron sospechar que la situación fuera a envenenarse tanto. Que fueran tantas las torturas, las amenazas, el hambre y la incertidumbre. Varios de los compañeros de encierro de los españoles fueron salvajemente asesinados y los vídeos con su decapitación hechos públicos, para espanto de sus familiares y de sus gobiernos.

El presidente español se avino a negociar desde el primer momento. Otros países occidentales se negaron a hacerlo o alguno afirmó que jamás negociaría, pero lo hizo bajo cuerda. España nunca confirmó que negociaba y que se pagó rescate por la liberación de los periodistas secuestrados, pero se pagó. Y se mantuvo un contacto permanente con los familiares para irles informando de la situación, expresarles apoyo y asegurarles que se estaba negociando y que se hacían todos los esfuerzos posibles para que los secuestrados regresaran a casa sanos y salvos. La liberación de los españoles

en marzo de 2014 fue todo un acontecimiento, una emoción compartida. Se escucharon algunas críticas fuera de España porque, como siempre, se utilizó el argumento de que el pago de rescate suponía una inyección económica importante para los terroristas, pero no fueron críticas relevantes. Entre otras razones porque, desgraciadamente, los terroristas cuentan con importantes medios de financiación, entre ellos algunos países árabes que afirman estar en guerra contra el DAESH e incluso forman parte de la coalición internacional. Lo importante era que Espinosa, Marginedas y Vilanova habían regresado del infierno.

Duró poco la alegría. En julio de 2015 tres periodistas españoles que habían viajado por su cuenta a Siria fueron secuestrados. Ángel Sastre, Antonio Pampliega y José Manuel López fueron capturados por milicias del DAESH casi sin haber tenido tiempo de tomar tierra. De nuevo Rajoy dio instrucciones para que se pusiera en marcha la operación que permitiría liberarlos previo pago de un rescate; era claro que, una vez más, había que iniciar una negociación que culminaría con un acuerdo sobre la cantidad a pagar.

En estos casos una de las cuestiones más complicadas es ponerse en contacto con los secuestradores. En Siria son numerosos los grupos contrarios a Al-Assad y las diferentes facciones se encuentran tanto en el área de influencia del DAESH como fuera de ella. Pueden pasar semanas hasta que los servicios de inteligencia logran localizar a quienes tienen en su poder a los secuestrados. Una vez identificado el grupo es necesario llegar hasta él. Y cuando admiten que efectivamente son los autores del secuestro alegan con frecuencia que los han trasladado a otro lugar, que ya no saben dónde se encuentran exactamente, dan incluso pistas falsas... El proceso es largo y puede durar tiempo.

Rajoy y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, interlocutora habitual del CNI —que es quien llevó el peso de conseguir la liberación de los periodistas secuestrados—, estuvieron informados constantemente de cómo se desarrollaban los acontecimientos, y aunque transcurrieran semanas sin que se produjera ninguna noticia sobre los secuestrados, no hubo día en el que no se diera algún paso. Pero la experiencia de lo ocurrido con Espinosa, Marginedas y Vilanova sirvió para insistir en el procedimiento: máxima cautela, máximo secreto... Y mantener informadas a las familias, entre otras razones para hacerles comprender la importancia de que no se filtrara ninguna información.

El DAESH no solo pide dinero. En un primer contacto con gobiernos como el español, dispuesto a negociar, exigió la entrega de misiles Stinger. Las reticencias fueron muchas porque darles ese armamento suponía un peligro añadido, pues con esas armas podía ampliar su campo de actuación. Finalmente el Gobierno decidió acceder a la entrega, pero el material era inservible porque las baterías, descargadas, eran inútiles.

Cuando se iniciaron las negociaciones para liberar al segundo grupo de españoles, también exigieron un número considerable de misiles, pero especificando los números de serie. Era evidente que habían aprendido que los misiles tienen fecha de caducidad. El Gobierno español se negó de plano. En ningún caso y bajo ningún concepto entregaría armas y los negociadores del DAESH, que preveían esa negativa, inmediatamente exigieron la libertad de presos yihadistas encerrados en cárceles occidentales. No duraron mucho las negociaciones en ese sentido, porque el Gobierno también se negó a este particular. Se llegó entonces al punto que se buscaba: dinero. El DAESH, como en el caso de Espinosa, Marginedas y Vilanova, exigía mucho, muchísimo, como ocurrió con los piratas que actuaban en Somalia o en el caso de los españoles pertenecientes a ONG secuestrados en el Sahel, cuando ese territorio africano era el más peligroso del mundo hasta que el DAESH se hizo fuerte en gran parte de Siria e Iraq.

Mercadear sobre el coste a pagar en dinero era ya más fácil. Tras la localización de los secuestrados era preciso ponerse en contacto con los negociadores y lograr varias pruebas de vida: cartas escritas a mano con respuestas a preguntas personales que solo los secuestrados podían conocer. Además había que rechazar las exigencias iniciales de los terroristas. Lo que importaba, la prioridad para Rajoy —aunque no para otros jefes de gobierno occidentales—, era traer a los secuestrados a casa. No a cualquier precio, pero casi. En cuanto a ese precio, al rescate pagado... a lo mejor hubo manera de recuperarlo.



¿Decir «no» al monarca?

Una de las decisiones más controvertidas tomadas por Mariano Rajoy fue no aceptar la propuesta del rey Felipe de ser candidato a la investidura tras las elecciones de diciembre de 2015 para continuar en la presidencia del Gobierno. Era la primera vez en democracia que alguien que ha ganado las elecciones rechazaba la invitación del rey para someterse a una sesión de investidura, y también la primera que el ganador presentaba un resultado tan escaso: 123 escaños, muy lejos de la mayoría absoluta que había rebasado Rajoy sobradamente en sus primeras elecciones. Lejos asimismo de otros presidentes que en algún momento habían ganado sin llegar a los ansiados 175 escaños precisos para gobernar en solitario, sin clientelismo de ningún tipo (excepto la necesidad de buscar socios para aprobar leyes orgánicas que han de ser respaldadas por una mayoría cualificada).

Rajoy acudió a La Zarzuela con la decisión, tomada de antemano, de no aceptar la propuesta que, estaba convencido, le iba a hacer el rey. Su argumento era incuestionable: en ese momento, mediados de enero, tras la primera ronda de conversaciones de Felipe VI con los representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria, solo podía ofrecer en una supuesta investidura sus propios votos, los del PP, más los de Unión del Pueblo Navarro, Foro Asturias y, quizá, Coalición Canaria. Ni uno más. Mientras que Pedro Sánchez, con apenas 90 escaños, estaba en condiciones de sumar a la izquierda radical e incluso a los independentistas, aunque también quedaba lejos de la mayoría absoluta.

Según confesó Rajoy a algunos de sus más cercanos colaboradores, le producía una profunda incomodidad someterse a una sesión de investidura en la que no tenía ninguna posibilidad de éxito, pues aunque iniciara una ronda de

negociaciones con otros partidos, necesitaba al menos la abstención del PSOE, y eso siempre que hubiera logrado previamente el apoyo de Ciudadanos. Si esto último podría lograrlo a pesar de las reticencias que expresaba Albert Rivera en público y en privado, estaba del todo seguro de que jamás tendría la abstención del PSOE. A esas alturas Rajoy ya sabía perfectamente que Sánchez sentía una profunda animadversión hacia su persona que se visualizó claramente en el debate electoral que mantuvieron y en el que Sánchez, además de interrumpirle constantemente para impedir que le replicase, le acusó de mantener una actitud indecente. Más tarde Rajoy obtuvo otra muestra del profundo rechazo que sentía Sánchez hacia su persona. Fue cuando, al recibirle en La Moncloa a los tres días de celebrar las elecciones para cambiar puntos de vista sobre el futuro gobierno, en cuanto se fueron los fotógrafos Sánchez hizo el gesto de levantarse y Rajoy le ofreció un café o lo que quisiera tomar antes de hablar. Sánchez rechazó el café, Rajoy le dijo al camarero que podía irse y, antes de nada, el dirigente socialista le advirtió que no tenía nada que hablar con él. Rajoy hizo un nuevo intento al preguntarle su opinión sobre el resultado electoral, pero Sánchez reiteró que no tenía la menor intención de hablar, que se marchaba. Y así lo hizo pocos minutos más tarde. El encuentro no llegó ni a la media hora de duración. Con ese panorama, comentaba Rajoy a su equipo, era inútil hacer el menor intento para formar gobierno.

¿Pidió Rajoy al rey que no propusiera ningún candidato a la investidura hasta que no se hubieran aclarado algo las cosas y él hubiera podido tantear el terreno, hablar con otros dirigentes políticos, incluidos algunos socialistas con los que siempre había mantenido buenas relaciones a pesar de las discrepancias y divergencias? Varios medios de comunicación dieron como cierta una versión según la cual Mariano Rajoy había entregado a Felipe VI un informe que el Gobierno había solicitado al Consejo de Estado. En él se recogía que la Constitución no obligaba al rey a proponer un candidato a la presidencia. Si tras una o dos rondas de conversaciones se llegaba a la conclusión de que no existía la posibilidad de que alguien lograra los votos suficientes para lograr el respaldo necesario tras el debate de investidura, según el informe se podrían convocar nuevas elecciones sin celebrar dicho debate.

Desde La Moncloa han negado que Rajoy entregara ese informe al rey. Consideran que se trata de una maledicencia puesta en circulación por el equipo de Pedro Sánchez, como también que las noticias publicadas,

asegurando que la actitud de Rajoy había provocado un profundo malestar en la Casa Real, también procedían de la sede central del Partido Socialista. Con su prudencia habitual, desde La Zarzuela no entraron en la polémica, pero hubo un dato significativo que en aquellos días se interpretó como que efectivamente la decisión de Rajoy de no ser candidato tras la primera ronda de negociaciones no había sido bien recibida por el rey. Un comunicado de la Casa Real, de cuatro puntos, hecho público inmediatamente después de finalizar la primera ronda de consultas, rezaba: «En el transcurso de la última consulta, celebrada con don Mariano Rajoy Brey, Su Majestad el rey le ha ofrecido ser candidato a la presidencia del Gobierno. Don Mariano Rajoy Brey ha agradecido a Su Majestad el rey dicho ofrecimiento, que ha declinado».

Han sido muy raras, y siempre excepcionales, las ocasiones en las que la Casa Real, tanto en tiempos del rey Juan Carlos como del rey Felipe, ha hecho públicos comunicados institucionales. Tras el texto en el que se recogía la renuncia de Rajoy era fácil adivinar un cierto malestar del rey por la decisión del presidente en funciones. Que debió de acrecentarse cuando, desde el entorno de Rajoy, además de insistir en la actitud supuestamente insidiosa de los socialistas al tratar de provocar tensiones en su relación con el rey, se explicaba que Rajoy no había rechazado la propuesta de Felipe VI, puesto que no había llegado a producirse esa propuesta, sino que se había tratado de un «ofrecimiento». Esto no es lo que marca la Constitución, ya que el rey «propone» un candidato al presidente de las Cortes, no «ofrece» la candidatura. Una excusa basada en semántica que hace pensar que en efecto aquel episodio, inédito en la historia de la España democrática, sí provocó lesiones en la relación institucional, e incluso personal, entre el jefe del Estado y el jefe del Gobierno.

Fueron días complicados en los que distintas fuentes manejaban información que supuestamente procedía de fuentes solventes. Entre ellas las que aseguraban que Felipe VI sabía que Rajoy pretendía que aquel aplazara la propuesta de candidato y que pensaba solicitarle también que en ningún caso propusiera a quien no había ganado las elecciones: Pedro Sánchez. Al tener conocimiento de que su audiencia con Rajoy se iba a celebrar en esos términos, el rey no le dio siquiera la oportunidad de que le planteara tal petición. En lugar de eso le anunció que había decidido convocar al presidente de las Cortes, Patxi López, para darle su nombre como candidato a la

presidencia. Y que fue entonces cuando Rajoy le anunció que declinaba la candidatura.

El contenido de las conversaciones del rey con cualquier persona que reciba oficial o incluso privadamente se mantienen en el ámbito de la más absoluta discreción, a no ser que el jefe del Estado autorice que se dé a conocer. Ni el rey ni Rajoy han facilitado información sobre lo que hablaron, pero en días posteriores distintas personas que hablaron con el rey han comentado que en aquellas fechas la obsesión de Felipe VI era que ningún español pudiera pensar que, ante el complicado escenario político que había surgido de las elecciones del 20 de diciembre, él se inclinaba hacia una opción determinada. Con el jefe de la Casa, Jaime Alfonsín, había analizado exhaustivamente la situación. También había consultado a expertos constitucionalistas para cumplir de forma escrupulosa con lo que marca la ley suprema. Y punto. Ni un indicio de que pudiera sentirse más o menos cómodo con la decisión tomada por Rajoy, ni tampoco de que su primera decisión importante como rey fuera una señal de que tras la abdicación de su padre se inclinaba por un cambio generacional en la gobernación de España.



Secretarias: guardando secretos

*D*ecía Felipe González que el gabinete telegráfico de la Presidencia del Gobierno era el organismo que mejor funcionaba en España. Exageraba el expresidente del Gobierno, pero no andaba muy alejado en su entusiasta diagnóstico: durante su presidencia, en los tiempos en los que los teléfonos móviles no existían, aquel gabinete era capaz de encontrar allá donde se encontrara a cualquier personaje, fuera un jefe de Estado de un país prácticamente desconocido, un embajador perdido por Dios sabe qué derroteros, un intelectual encerrado en cualquier lugar remoto para encontrar la necesaria tranquilidad, o un ciudadano con problemas que había escrito a La Moncloa y con el que quería contactar el presidente, aunque esa persona hubiera olvidado incluir en la carta su dirección postal o su número de teléfono.

El gabinete telegráfico es toda una institución en La Moncloa, con funcionarios que han tenido la inteligencia de adaptarse a las nuevas tecnologías en su afán de localizar al ilocalizable. Pero además de esos expertos buscadores, merecen punto y aparte unas mujeres —porque hasta ahora han sido mujeres— que realizan la función de secretarias. Su poder es omnímodo, o casi. Desde luego cuentan con más influencia que muchos de los ministros, y por recordar de nuevo que hubo un tiempo en el que no existían los móviles, y por tanto a los presidentes había que contactarlos a través de centralita o de un teléfono directo —que generalmente desviaba a Secretaría—, eran ellas las que decidían quién podía o no hablar con el jefe del Gobierno. De nada servía alegar relación estrecha o que el presidente le había indicado que le llamara: eran ellas las que tenían en su mano la posibilidad, o no, de que conversar con el presidente fuera posible. Era tanto su poder, que

un político de ambición desmesurada no dudó en iniciar una relación amorosa con una de ellas para alcanzar sus objetivos. Sabía que era el camino más corto para que su nombre fuera tenido en cuenta a la primera oportunidad de que el presidente decidiera remodelar el Gobierno.

Las secretarías de los presidentes, todas sin excepción, han hecho honor a su categoría profesional, que implica ser guardadoras de secretos. Ni una sola ha traicionado la confianza de su jefe, ni una sola ha caído en la tentación de escribir sus memorias a pesar de las ofertas de editoriales importantes, ni una sola ha debido abandonar el cargo por no haber estado a la altura de las circunstancias.

Cada presidente ha contado y cuenta con un equipo de cinco o seis de estas mujeres, con la secretaria personal al frente de ese equipo. Tienen como apoyo a los funcionarios adscritos a La Moncloa, que dentro de su nivel se ocupan de tramitar la numerosa documentación que genera la Secretaría, desde la traducción hasta la verificación de los datos y referencias de los textos. Siempre en coordinación con el gabinete del presidente.

La secretaria del presidente es un elemento clave en el funcionamiento del Gobierno, y la mayoría se llevaron a La Moncloa a sus secretarías de siempre. Alguno escogió alguna secretaria de personas relevantes de su partido antes de instalarse en el palacio presidencial. Todos y cada uno de ellos, cada vez que han hecho balance de sus años de gobierno, han mostrado un agradecimiento especial a sus secretarías, al trabajo realizado y a su sacrificio personal, pues todas antepusieron su responsabilidad institucional a la personal y familiar. Es un trabajo sin horarios fijos, que han cumplido sin una queja cuando les indicaban, sin previo aviso, que debían acompañar al presidente a un viaje de varios días. A ninguna se le pasó por la cabeza advertir que esos días coincidían con una celebración familiar muy especial o unos días de vacaciones ya programados. En justa compensación, la mayoría de los presidentes españoles suelen referirse a sus secretarías como miembros de su propia familia. En muchos casos estas secretarías conocen más al presidente como persona que la mayoría de sus más cercanos. Han vivido con ellos preocupaciones y alegrías, saben qué les produce malestar, qué amigos consideran incondicionales o a cuáles tienen catalogados como arribistas... Lo saben todo.

Carmen Díez de Rivera ha pasado a la historia como la «musa de la Transición». Era jefa de la Secretaría de Adolfo Suárez en la Presidencia del Gobierno, pero en realidad era su jefa de Gabinete. Natalia Escalada era su

secretaria o asistente personal. Carmen, de una belleza fuera de lo común, con unos espectaculares ojos claros, fue responsable de la Secretaría de Suárez en sus años de director general de Radiotelevisión Española. Le pidió que se hiciera cargo de su gabinete cuando el rey Juan Carlos le eligió como presidente de Gobierno entre la terna presentada por el Consejo del Reino de las Cortes franquistas. Una terna en la que había trabajado intensamente el entonces presidente de las Cortes, Torcuato Fernández-Miranda, para cumplir con el encargo del rey de que consiguiera que Suárez fuera el seleccionado.

Carmen Díez de Rivera era una mujer muy especial, con una complicada vida personal que la marcó emocionalmente, una formación intelectual poco habitual en aquellos tiempos, que se manejaba bien en varios idiomas y que en cierto sentido se ponía el mundo por montera. Alejada de los encorsetamientos de un protocolo que se negaba a seguir, se convirtió rápido en una de las mujeres más interesantes de la vida política española, protagonista de innumerables columnas de Paco Umbral y objeto oscuro de deseo de cuantos hombres y mujeres pretendían presumir de sentar a su mesa a lo más granado de la vida cultural o política española. Nada acomodaticia, mantenía una muy buena relación personal con el rey Juan Carlos, no se mordía la lengua a la hora de trasladar a Suárez sus impresiones sobre la actualidad política y no ocultaba su inclinación por los partidos de izquierdas, donde tenía entre sus personajes favoritos a Santiago Carrillo y a Tierno Galván. Esto permitió que en más de una ocasión pudiera realizar tareas de intermediación entre el presidente y los dirigentes de otros partidos.

Cuando apenas llevaba un año en La Moncloa hizo pública su afinidad con el Partido Socialista Popular de Tierno Galván, y antes de las primeras elecciones democráticas, las de junio de 1977, abandonó su cargo. Finalmente se acercó al PSOE, donde formó parte de su lista al Parlamento Europeo. Se dedicó en cuerpo y alma a sus tareas como eurodiputada, ya con la salud muy tocada por un cáncer que le provocó la muerte en 1999. Era una mujer introvertida aunque aparentaba lo contrario, celosa de su intimidad, controvertida, con pocos amigos y en cierto sentido desconfiada a pesar de su apariencia de seguridad en sí misma. Desaparecía largas temporadas, especialmente cuando se encontraba mal, y apenas permitió visitas en los últimos meses de vida, con una especie de pudor a mostrarse débil ante la adversidad. Una mujer de vida en cierto sentido trágica a pesar de un currículum profesional tan brillante. Como el de su jefe, Adolfo Suárez.

En cuanto a Natalia Escalada, empezó a trabajar con Adolfo Suárez a los dos meses de su designación como presidente. Fue de las pocas personas del equipo del presidente del Gobierno que conoció sus primeras decisiones al frente del país, cuando todavía no se había decidido trasladar la Presidencia del Gobierno a La Moncloa y la sede estaba en el palacete de Castellana 3, lugar en el que habían ejercido el poder Carrero Blanco y Carlos Arias Navarro.

Escalada, como ocurre con la mayoría de las secretarías o asistentes personales —que es como se autocalifica—, ha sido testigo privilegiado de las complicadas situaciones que sufrió Adolfo Suárez en sus casi cinco años de mandato. Tanto es así que no dudó en descalificar en público a Pilar Urbano cuando escribió una biografía del expresidente que algunos de sus colaboradores calificaron directamente como una infamia, entre otras razones porque Adolfo Suárez ya no podía rebatir algunas de las afirmaciones recogidas por Urbano. Como por ejemplo que el expresidente le había confesado que era el rey Juan Carlos el impulsor del intento de golpe de Estado del 23-F y que la operación se había diseñado desde La Zarzuela con el objetivo de convertir al general Alfonso Armada en presidente de un gobierno de concentración. Recoge también Pilar Urbano fuertes enfrentamientos verbales entre el rey y el presidente Suárez, que según ella en un momento dado casi llegan a las manos cuando don Juan Carlos ordenó a Suárez que trasladara a Alfonso Armada desde Lérida, donde era gobernador militar, a Madrid. También cuenta una encerrona del monarca a Suárez con cuatro tenientes generales que le exigen la dimisión, e incluso sale a relucir una pistola, así como duras conversaciones entre el rey y el presidente con un lenguaje plagado de amenazas y palabras malsonantes.

Escalada, indignada, aceptó la invitación del periodista Carlos Cuesta para acudir a su programa *La marimorena* y salir al paso de lo que había leído. En un tono absolutamente sereno, tranquilo, explicó que en sus años como colaboradora de Suárez jamás escuchó ni una palabra del presidente contra el rey en los términos que apuntaba Urbano. También añadió que Suárez siempre trató al rey de «señor», sin tuteo. Y dijo que era una persona educada en extremo y que le parecía «impensable» que pudiera expresarse en los términos que recogía la periodista. Ofreció datos que vivió en primera persona, pues estaba en La Moncloa cuando Suárez regresó del Congreso tras la intentona golpista en compañía de un Gutiérrez Mellado aterido de frío y para quien el presidente pidió «un caldito» para que entrara en calor.

Nada más llegar —contó también— reunió a los ministros y después mantuvo una conversación a solas con Rafael Arias Salgado, ministro de la Presidencia, para comentarle que sentía dejar a Leopoldo Calvo-Sotelo una situación tan grave como la que se acababa de producir, y que si le parecía que debía retirar su dimisión para asumir determinadas decisiones difíciles en los próximos días y, a continuación, dimitir para dejar paso a la investidura de Calvo-Sotelo.

Aseguró Natalia Escalada que nunca escuchó nada que hiciera pensar que Suárez conocía el intento de golpe de Estado o que supiera que el rey estaba alentando el relevo de Suárez a través de un pronunciamiento. Sí explicó que en aquellos meses el presidente recibía fuertes presiones para cambiar de política y que incluso un número importante de periodistas que siempre le habían prestado su apoyo estaban ejerciendo una crítica muy dura a su gestión. «Había presiones militares, pero sobre todo había mucha gente, incluidos periodistas, que pedían lo que se llamaba un golpe de timón. Pero un golpe de Estado... No». Natalia dio la cara por un Adolfo Suárez al que sirvió con la lealtad máxima cuando no podía defenderse por sí mismo.

Tras la dimisión de Suárez, otra mujer ocupó el despacho de la secretaria del presidente, Lucila Martín Torrejón, siempre al lado de Leopoldo Calvo-Sotelo antes y después de su corta presidencia. Corta, pero en la que se tomaron decisiones que marcaron el futuro de España, entre ellas la entrada en la OTAN. Con frecuencia se «olvida» que entre Adolfo Suárez y Felipe González hubo un presidente que inició su mandato en un momento convulso, tras una intentona golpista, y apoyado por un partido, UCD, que hacía agua a ojos vistas. Un partido roto, dividido, plagado de personajes con ambiciones personales que anteponían a los intereses del Estado y que no entendían de lealtades. Este presidente era Calvo-Sotelo, un hombre que no tenía nada que ver con la imagen de tancredismo con el que le han descrito algunos que demostraban conocerle poco. Un hombre, además, de una cultura muy por encima de la media y un sentido del humor fuera de lo común. Comentó en alguna ocasión la desazón que le producía saber que algún ministro estaba esperando nervioso que finalizara la reunión del Consejo para acudir a otra reunión en la que se preparaba la traición al presidente del Gobierno.

En su libro *Pláticas de familia* Calvo-Sotelo hace una mención especial a Lucila en un episodio que, aunque la secretaria no tuvo más papel que pasarle una llamada de teléfono, merece ser señalado. Recién llegado a La Moncloa tras ser investido presidente en el Congreso de los Diputados, pocos días

después de la intentona golpista, «había pedido a Lucila, mi secretaria de siempre, que hiciera una primera selección entre las muchas cartas y llamadas de enhorabuena llegadas a mi mesa al hacerse pública mi nominación para la presidencia». Y sigue contando:

Lucila, buena conocedora de mis relaciones y mis afectos, me pasó en primerísimo lugar la llamada de Alfonso [Osorio]. Tomé el auricular con toda ingenuidad y con el ánimo delicuescente de quien espera una felicitación. Pero aquello no era una felicitación. Con voz destemplada, Alfonso fue directamente al grano. A su grano.

—Me llegan noticias de que habéis arrestado a Alfonso Armada ¡Qué barbaridad!

Y siguió con un elogio inspirado y encendido del general. Esto ocurría el 26 de febrero, a los tres días del golpe. El elogio culminó con una curiosa aseveración:

—Además, Alfonso es un caballero.

Le interrumpí con hartazgo, cabreo y disgusto:

—No creo que ni su situación se deba a que él no sea un caballero ni que vaya a estar mucho tiempo arrestado en su domicilio...

—Menos mal. Rectificar un error tan grave será vuestro mayor acierto —me interrumpió a su vez, y muy vehementemente, Osorio.

—... porque sospecho —concluí yo— que va a ir a la cárcel.

Y colgué.

A este hombre, este presidente, la historia le hará justicia, pues fue un jefe del Gobierno breve pero de decisiones firmes. Entre otras cosas tuvo que apaciguar a una familia militar conmocionada por la intentona de Tejero y compañía y por el juicio militar que Calvo-Sotelo personalmente, junto con el ministro Alberto Oliart, se ocupó de que se celebrara cuanto antes, abierto al público y a los medios de comunicación, y cumpliendo estrictamente con la legalidad para que nadie pudiera abrigar la menor sospecha de que se actuaba ni con excesivo rigor ni excesiva manga ancha ante los acusados, sino dando pleno sentido a la separación entre el poder ejecutivo y el judicial.

Lucila Martín fue la secretaria que permaneció jornadas enteras junto al presidente, con el que ya había trabajado en sus etapas de ministro, en aquellos meses convulsos en los que España necesitaba recuperar el sentido común y la estabilidad emocional y social después del 23-F y la dimisión de un presidente, Suárez, que había iniciado el proceso democrático sin red y con apoyos importantes —el rey, la mayoría de los dirigentes de los partidos—, pero sin que un sector relevante de la ciudadanía comprendiera que tras la dictadura eran otras las reglas de juego.

Calvo-Sotelo necesitaba incondicionales para ejercer la presidencia en momentos muy complicados, y a falta de la lealtad de algunos miembros de su partido, contaba con la de Lucila que, como ha ocurrido con otras secretarías presidenciales, jamás quiso contar las angustias y satisfacciones de su jefe, aunque las conocía de primera mano. Una situación que también vivió, con angustias y satisfacciones, Piluca Navarro, durante años secretaria de Felipe González.

Piluca había sido la secretaria de Julio Feo, secretario general de la Presidencia cuando Felipe González fue elegido en octubre de 1982. González llevó a La Moncloa a quien era su secretaria en el PSOE, Ana Navarro, que pidió ser relevada unos años después por razones personales. Fue entonces cuando Piluca asumió ese importante cargo que ocupó hasta que Felipe González dejó La Moncloa en 1996. Continuó trabajando para él durante muchos años más, con González como expresidente.

Era una mujer con mucho bagaje detrás. Había trabajado en la Cadena Ser pero sobre todo quedó muy marcada por su etapa en *Cambio 16*, la gran revista de la Transición, que la puso en contacto con infinidad de periodistas e intelectuales, entre los que se encontraban algunos de sus mejores amigos. Ayudó también que estaba casada con un gran pintor, José Luis Fajardo, extrovertido como Piluca, amigo de tertulias y reuniones, y al que su matrimonio perjudicó profesionalmente, pues el hecho de que La Moncloa adquiriera algunas de sus obras, como había adquirido las de otros pintores relevantes de la época, provocó que fuera acusado de favoritismo por ser marido de la secretaria del presidente y, además, amigo personal del propio presidente.

Piluca Navarro no fue una secretaria al uso. Con frecuencia acompañaba a Felipe González a sus viajes más importantes, era amiga de los amigos del presidente, tanto españoles como extranjeros, y tenía una capacidad de decisión que iba más allá que la de poner al día la agenda presidencial y hacer las modificaciones necesarias para incluir encuentros que no podían ser aplazados.

En La Moncloa vivió Piluca su gran tragedia personal, la muerte de su único hijo en un accidente de esquí. Allí también tuvo el disgusto de ver su nombre empañado por supuesta connivencia en casos de corrupción. O de nepotismo, como ocurrió con los cuadros de Fajardo. Cuando los exministros Barrionuevo y Corcuera tuvieron que comparecer ante el juez en 2001 por supuesta malversación de fondos reservados, además de comparecer Felipe

González, como testigo fue convocada también Piluca Navarro para dar cuenta de un talón de 28 millones de pesetas —unos 170.000 euros— que había cobrado, procedente de fondos reservados del Ministerio de Interior. Piluca declaró ante el juez que era ella la que tomaba decisiones sobre los fondos reservados de Presidencia, destinados siempre a cuestiones relacionadas con la seguridad, y que no daba cuenta de esas decisiones al presidente del Gobierno. Una muestra de lealtad total al insistir que «solo rendía cuentas a mí misma». Jamás trasladó una sola responsabilidad al presidente o a sus ministros sobre asuntos que no deben ser dados a conocer, como por ejemplo pagos a secuestradores... Que según lo que se publicó en aquellas fechas fue el destino de importantes cantidades de dinero manejadas por Piluca Navarro, aunque ella nunca dio una pista que confirmara los rumores. Su nombre estuvo en entredicho durante mucho tiempo y fueron pocos los medios de comunicación que recogieron que las denuncias contra ella habían sido archivadas.

Piluca siguió trabajando con Felipe González cuando dejó La Moncloa, con etapas de mayor o menor intensidad según las actividades del expresidente, que por otra parte incorporó a su despacho a su hija María como asistente personal. Murió en 2013, víctima de un cáncer, pero nunca se dejó avasallar por la enfermedad, con un espíritu que hacía honor a su fama de mujer que nunca se había amilanado ante los problemas, por graves que fueran.

También una de sus sucesoras en La Moncloa murió de cáncer pocos años después de dejar la Secretaría del presidente, Milagros Rodríguez Falcón. Falleció en 2013. Cuando Ana Botella acudió al entierro (su marido, Aznar, se encontraba fuera de España), dijo que era como si hubiera fallecido alguien de su familia. Milagros fue la secretaria de José María Aznar durante sus ocho años en La Moncloa, aunque ya había trabajado antes con él como presidente del PP. Zamorana de corazón, siempre vinculada a su pueblo natal, Carbajales, a donde viajaba con frecuencia, era una persona muy austera, con unas profundas convicciones morales y sociales, que colaboraba con diversas iniciativas de ayuda a los más desfavorecidos. Soltera y sin hijos, su vida estaba dedicada a su trabajo, al que no escatimaba horas. Sentía una absoluta veneración por la familia de Aznar y Botella. Durante sus últimos años en La Moncloa tuvo que ser intervenida en dos ocasiones de un tumor cerebral, por lo que Aznar, al finalizar su presidencia, decidió no llevarla a FAES para que

cuidara de su enfermedad. Le buscó un trabajo menos intenso en la sede del partido.

Era una mujer a la que no gustaba el primer plano. No tenía ningún afán de protagonismo, pero su labor en La Moncloa —es unánime el comentario— fue importante y silenciosa. Todas las secretarias han respetado la obligación de ser discretas hasta la exageración, pero dos de ellas, Milagros y Lucila, además de discretas se movieron siempre con muy escasa visibilidad. Solo los presidentes y su equipo conocieron el valor de su trabajo.

Nada que ver el carácter de Milagros con el de Gertrudis Alcázar, «Gertru», la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero. Extrovertida, con sentido del humor, capaz de sacar el genio cuando consideraba que alguien no había cumplido con su cometido, y que conocía bien las profundidades del PSOE y a sus dirigentes: había sido secretaria de Joaquín Almunia durante su etapa de secretario general, después de Chaves en su etapa de presidente de la gestora del partido y después de Rodríguez Zapatero tras el congreso del año 2000 en el que fue elegido secretario general. Todo el mundo dio por hecho que se iría con Zapatero a La Moncloa cuando ganó las elecciones de 2004, como así fue.

En sus años en Presidencia tenía fama de no callar ante el presidente, de decirle abiertamente qué pensaba —la sinceridad formaba parte de su carácter—, y cuando Zapatero expresaba su contrariedad, pues no son muchos los dirigentes que aceptan una crítica de buen grado, Gertru respondía que se sentía obligada a dar su opinión precisamente para trasladar a un presidente qué es lo que advertía fuera de aquellos muros de aislamiento que dieron pie a lo que se llamó «síndrome de La Moncloa».

Gertru no continuó con Zapatero cuando dejó de ser presidente, aunque la relación personal entre los dos sigue siendo muy cercana. Con Zapatero fuera de los cargos institucionales del partido, Gertru aceptó durante un tiempo sumarse al Consejo de Estado, atribución de los expresidentes, para después incorporarse a la Fundación Ideas, del PSOE, que posteriormente se autodisolvió por serios problemas internos.

Con la llegada de Rajoy a La Moncloa ocupó el despacho de la Secretaria Ketty Satrústegui, que llevaba pocos años junto al nuevo presidente. Durante mucho tiempo, tanto en el partido como en los distintos ministerios, la secretaria personal de Rajoy había sido Rosa Fernández, toda una institución en el PP. Sin embargo, en 2008 Jorge Moragas, que ya era jefe de gabinete y brazo derecho del Rajoy líder de la oposición, sugirió un cambio en la

Secretaría, de manera que se incorporara a una secretaria con idiomas y que se manejara bien con las redes sociales, lo que consideraba fundamental para el futuro. Rajoy estuvo de acuerdo. Se ocupó de dejar bien situada a Rosa, aunque en el partido no gustó la decisión, pues era una mujer muy querida. Así que Rosa se fue al Congreso de los Diputados, para llevar los asuntos parlamentarios de Rajoy como secretaria y también para trabajar con Ana Pastor, entonces vicepresidenta parlamentaria.

Llegó así a la sede de la calle de Génova Ketty Satrústegui de la mano de Moragas, junto a otras incorporaciones sugeridas por el jefe de gabinete de Rajoy. Moragas, un hombre que empezó siendo asesor de Asuntos Internacionales y acabó teniendo una influencia muy superior a la de algunos ministros y altos cargos del partido. De hecho, en 2015 Rajoy le incorporó al Comité de Dirección del PP como responsable de la campaña electoral.

Ketty, recibida al principio con reticencias en el PP —y cuentan también que con cierto recelo por el propio Rajoy, muy acostumbrado a Rosa aunque comprendía que necesitaba alguien con un perfil como el de Satrústegui—, con el tiempo se convirtió en una persona fundamental para el día a día de la labor presidencial. Y se desarrolló una perfecta sintonía personal entre los dos. Como ejemplo, cuando la mujer de Rajoy, Elvira Fernández, Viri, «perdió» a Jaime de los Santos, asistente personal de su marido y que se ocupaba de los asuntos de Viri relacionados con su agenda como esposa del presidente —de los Santos se fue al gobierno madrileño como director de Promoción Cultural—, fue Ketty quien asumió el trabajo.

No se puede hablar del equipo presidencial de Rajoy sin mencionar a Valle Ordóñez. Durante años trabajó en el partido, en la Secretaría del presidente, y Rajoy se la llevó a La Moncloa, donde se ha ocupado durante años de todas las cuestiones ajenas a la agenda oficial, que en un presidente del Gobierno son siempre numerosas; muchas de ellas de partido, pero otras relacionadas con compromisos familiares, de amigos, o con organismos y asociaciones que sin ser oficiales piden el respaldo y la presencia del jefe del Gobierno. Valle conoce a la gente del PP como no la conoce Ketty, y entre las dos suman experiencias que permiten que Rajoy se sienta seguro de que su Secretaría funciona con la obligada eficacia.

Secretarias. Según el *Diccionario* de la Real Academia de la Lengua se trata de la «persona encargada de atender la correspondencia y los asuntos administrativos de otra persona o de un despacho». Las secretarias de los presidentes del Gobierno superan, en mucho, esa definición.



De Os Peares a Os Peares

Os Peares es una pequeña aldea situada entre Orense y Lugo, confluencia de varios ríos, inicio de la Ribera Sacra, y a donde se llega tras cruzar un embalse. Aldea de agua, aldea de poco más que dos o tres centenares de habitantes, que contó con uno muy ilustre: Alberto Núñez Feijóo.

En marzo de 2009 Núñez Feijóo pasó el día de reflexión en Os Peares, acompañado por sus padres, su hermana, sus sobrinos y su pareja de entonces, una periodista con la que llevaba varios años de relación. Se presentaba candidato por primera vez a la presidencia de la Xunta y los sondeos no acababan de confirmarle el triunfo. Necesitaba la mayoría absoluta, pues en caso contrario los socialistas y el Bloque formarían gobierno, como en la legislatura que acababa de terminar. Fraga había ganado sobradamente, pero el PP siempre ha necesitado mayorías absolutas en los gobiernos regionales y municipales, y un Feijóo visiblemente nervioso quiso vivir la jornada de reflexión en esa aldea en la que pasó su niñez y donde se encontraban sus referentes más cercanos, y es probable que los más auténticos. Comió allí con gente que le conocía desde que iba a la escuela, al colegio de Orense después, gente que conocía a su familia, le trataba de tú y de «Albertiño», gente que recordaba historias compartidas. Le decían que si se convertía en presidente... Bueno, la que se iba a armar en Os Peares si Feijóo era presidente. Quiso ir al cementerio, donde estaban enterrados algunos miembros de su familia. Buscó las lápidas y no disimuló la emoción con la que vivía esos momentos en los que un puñado de votos le podía convertir en presidente al día siguiente o dejarle en la oposición, donde había estado los últimos cuatro años, al renunciar Fraga a su escaño.

Mucho después, en septiembre de 2016, Feijóo ya había sido presidente y ahora era candidato a seguir siéndolo. Así que esta vez inició en Os Peares la última semana de campaña. Nada que ver con la situación anterior. Docenas de periodistas le acompañaban, las cámaras apenas le dejaban moverse, la gente de Os Peares era bombardeada a preguntas y Feijóo no pudo hablar con sus antiguos vecinos y amigos con la tranquilidad deseada, pues grababan cada palabra que salía de su boca. No estaba su padre, fallecido pocos meses antes, un golpe emocional del que Feijóo todavía no se había recuperado, ni tampoco la novia de antaño. Unos días antes se había sabido que iba a ser padre. Su pareja desde hacía tres años estaba embarazada y Feijóo sería padre primerizo en el mes de marzo. Pero la diferencia fundamental entre las dos visitas preelectorales a Os Peares estaba en el propio Alberto Núñez Feijóo.

En 2009 era un político prometedor, con altos cargos en el gobierno central y en la empresa pública, consejero de Obras Públicas y vicepresidente del gobierno gallego de Fraga. Y no podía disimular sus nervios ante la posibilidad de convertirse al día siguiente en presidente de Galicia. En septiembre de 2016 era ya el presidente de la Xunta el que llegaba a Os Peares. Y no en día de reflexión, de paseo, de encuentro con su gente del pasado y con su propio pasado, sino en plena campaña electoral. Que no era necesaria en su pueblo: en Os Peares el PP gana por goleada mientras su vecino más ilustre sea candidato. Sin embargo, quiso hacer un alto en el camino de la extenuante campaña electoral. En su camino.

Para los periodistas que le seguían, muchos de ellos de medios de comunicación nacionales, Alberto Núñez Feijóo era más que el candidato a la Xunta. Desde hacía unos años, desde que se inició el declive de Rajoy y se empezó a poner en duda que pudiera ser reelegido presidente, el nombre de Feijóo encabezaba todas las listas de posibles candidatos del PP a la presidencia del Gobierno central. Nadie daba credibilidad a sus declaraciones, en las que insistía en que su compromiso político era con Galicia. Una expresión que, por otra parte, era obligada. También había asegurado que no repetiría candidatura a la Xunta, pero lo hizo cuando advirtió que tenían razón los compañeros que le decían que con la envenenada situación política que vivía España, y el auge de Podemos y En Marea en Galicia, él era el único candidato del PP que podía alcanzar la mayoría absoluta que impediría un gobierno populista en la región que había gobernado durante ocho años.

Tenía importantes ofertas empresariales sobre la mesa y una vida familiar por delante que quería vivir plenamente con sosiego, con tranquilidad. Sin embargo, atendió la petición de los suyos, lo que sus adversarios llamaban «presiones». Lo que indica que, al menos algunos políticos, incluso cuando han cumplido sus expectativas, deciden anteponer los intereses institucionales, de Estado, a los personales. Feijóo tenía de sobra cubierto su currículum político, aunque habrá quien diga que aspira a la presidencia del Gobierno de España. Puede, pero podía aspirar igual sin necesidad de seguir en la presidencia de Galicia. Es más: ser presidente gallego quizá dificulte que pueda dar el salto a la política nacional en el momento que más convenga al PP.



11-M: el peor día de Aznar

Así lo cuenta en sus memorias: «El 11 de marzo de 2004 fue el día más duro de mi vida. Más duro que el día del atentado que sufrí a manos de ETA. Más duro que el asesinato de mi amigo y compañero Gregorio Ordóñez. Fue el más duro porque ese día 190 personas murieron brutalmente asesinadas en Madrid [...] y más de 1.500 resultaron heridas, algunas de enorme gravedad, incluso de forma irreversible. Todos esos hombres y mujeres, sus familiares y seres queridos, ocupan un lugar central en mis recuerdos».

También fue un día muy duro el 25 de marzo de ese año, cuando se celebró el funeral de Estado presidido por la familia real en pleno, los reyes con los príncipes de Asturias y sus hijas con los duques de Lugo y de Palma, dieciocho jefes de Estado extranjeros y diecisiete jefes de Gobierno, una veintena de ministros extranjeros, el gobierno en funciones en pleno, así como los presidentes autonómicos, incluidos los casi siempre ausentes: el *lehendakari* Ibarretxe y el presidente de la Generalitat, Maragall. También estaban allí los representantes de las más altas instituciones del Estado y el ganador de las elecciones y futuro presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El funeral quedará grabado en la memoria colectiva no solo por la presencia de tan importantes dignatarios internacionales, sino por las emotivas escenas que se vivieron cuando los reyes, los príncipes de Asturias y las infantas, con sus maridos, se acercaron a los bancos donde se encontraban los familiares de las víctimas —198 muertos en total— y los fueron abrazando uno a uno, intentando consolarles sin poder contener las lágrimas. Nunca, desde el funeral de don Juan de Borbón, se había visto llorar tan abiertamente, tan rotos de dolor, a los reyes y a sus hijos. Algunos amigos de Aznar afirman que ese 25 de marzo marcó un antes y un después en el ánimo del expresidente.

El 11-M fue brutal en todos los sentidos, pero desde el punto de vista personal se le hizo especialmente insoportable el grito de un hombre, familiar de una de las víctimas, que cuando Aznar ocupó su sitio en una Almudena conmocionada por la tragedia, le llamó en voz alta «asesino», una palabra que resonó como un trallazo en la catedral madrileña y que trastornó de tal manera el rostro de Aznar que, al finalizar el funeral, Maragall se acercó al hombre para decirle que la acusación era injusta.

Esos amigos afirman que Aznar no entró en depresión porque es un hombre sólido en sus convicciones y que incluso con el paso de los años sigue defendiendo que reaccionó como debía reaccionar tras producirse el atentado y niega tajantemente que hubiera instrumentalizado a conveniencia los datos sobre la investigación policial. Pero reconocen que en efecto aquel grito acusador le produjo una conmoción que no ha conseguido borrar.

Diez años más tarde se celebró un solemne funeral para conmemorar aquel atentado, el más grave de la historia de España, y no asistió el expresidente ni tampoco su sucesor, Rodríguez Zapatero, expresidente también, pues gobernaba ya Rajoy. La ausencia provocó toda clase de especulaciones, entre ellas que Aznar había declinado la invitación; otro rumor apuntaba a que la presidenta de una de las asociaciones de víctimas, Pilar Manjón, le puso veto porque no quería que asistiera. Lo cierto es que Rajoy, de acuerdo con el entonces líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, con el que siempre mantuvo muy buena relación personal a pesar de las diferencias políticas —en esos momentos los dos preparaban la abdicación del rey Juan Carlos con el máximo secreto—, habían llegado a la conclusión de que era mejor no cursar invitación a ninguno de los dos presidentes. Para evitar incidentes e incluso recuerdos dolorosos a los familiares.

Aquel atentado provocó un sinfín de críticas a la actuación del Gobierno, que en su mayor parte abundaban en la idea de que Aznar trató de desviar la atención para que no se conociera que las investigaciones apuntaban a que la autoría de aquella salvajada podía estar relacionada con elementos islámicos radicalizados, y no con ETA, como se creyó en el primer momento. De esa manera —era la opinión generalizada— Aznar, a dos días de las elecciones, trataba de impedir que se pudiera encontrar una relación causa-efecto entre su apoyo a la guerra de Iraq —apoyo, no participación— y los atentados.

Una vez constatado que se trataba de islamistas, algunos de ellos conocidos por la policía y que incluso habían sido investigadas por el juez Garzón, se trató de desviar la atención hacia el CNI, el servicio de

inteligencia que dirigía entonces un diplomático de larga trayectoria profesional, Jorge Dezcallar. Fueron tantas las insinuaciones —que no declaraciones abiertas— hacia el trabajo de los servicios de inteligencia, que Dezcallar, años más tarde, quiso poner negro sobre blanco el relato de aquellos días aciagos vividos en primera persona. Lo hizo en un libro muy criticado en los círculos del PP, porque consideraban que era contrario a la discreción que se supone al máximo responsable de unos servicios de inteligencia. La opinión de Dezcallar es otra: se sentía obligado a defender el trabajo de los analistas y expertos del CNI, puestos en cuestión, y su propia profesionalidad.

Un inciso: esos tres días que conmocionaron a España, esta periodista se encontraba casualmente con Rodríguez Zapatero cuando se produjo el atentado, porque participaba en la tertulia *Las mañanas* de TVE, que dirigía y presentaba el tristemente desaparecido Luis Mariñas. Aquellos días, como ocurre al finalizar una campaña electoral, entrevistaba a los candidatos a la presidencia del Gobierno, «de menor a mayor». Al día siguiente estaba previsto Mariano Rajoy. Tanto Mariñas, como Esther Esteban y yo misma fuimos testigos de cómo Zapatero habló por teléfono con Alfredo Pérez Rubalcaba, y al menos hasta las diez de la mañana no tenían ninguna duda de que la autoría era de ETA. En torno a la una del mediodía, recibí la llamada de un amigo israelí con importantes contactos en los servicios de información de su país, que llamaba para interesarse por mi familia. No pude evitar arremeter contra ETA con la máxima indignación por la brutalidad cometida. Ante mi sorpresa me advirtió de que la hipótesis que se manejaba en su país era que se trataba de un atentado cometido por islamistas. Me costó creerlo. Poco después llamé a Jorge Dezcallar, al que conocía muy bien de sus años de diplomático, cuando ocupó destinos que le llevaron a realizar delicadas negociaciones nacionales e internacionales. Esa fue la razón por la que le propusieran dirigir el CESID.

Conseguí hablar con él tarde, ese mismo día, y ya no descartaba la tesis de que no era ETA. Estaba en contacto con otros servicios que también sospechaban que eran islamistas los que habían cometido el atentado que conmocionó al mundo y que segó la vida de casi doscientas personas. Cuesta creer que no trasladara al Gobierno sus impresiones y las de otros servicios, pero en su libro hace un relato muy detallado de los hechos. En *Valió la pena* explica que durante las primeras horas no dudó de que era ETA la organización que había cometido el atentado: disponía de información previa

sobre intentos de la banda terrorista vasca de cometer atentados en trenes. Incluso se había localizado una furgoneta cargada de explosivos que aparentemente estaban destinados a cometer un atentado en el corredor del Henares. Además ETA ya había cometido atentados de gran envergadura, como el de Hipercor. En el libro explica que unos etarras detenidos confesaron que habían intentado colocar mochilas con bombas en la estación de esquí de Baqueira-Beret, y en Atocha los atentados se cometieron con mochilas. Era fácil por tanto deducir que la autoría había que adjudicarla a ETA. Las dudas, escribe, llegaron a media tarde.

Se había producido por la mañana una reunión del gabinete de crisis en La Moncloa a la que no fue invitado. «Al salir de la reunión —cuenta— Aznar llamó en persona, a eso de la una, a los directores de los principales diarios para asegurarles que había sido ETA, y el ministro de Interior, Ángel Acebes, dio una conferencia de prensa a la una y media en la que también culpó a ETA del atentado “sin ninguna duda”. Más aún, en dicha comparecencia respondió a una periodista que le preguntó por Al Qaeda diciendo que eso “era un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención”». Sigue explicando que nadie invitó al CNI a las reuniones que se celebraron a lo largo del día con altos cargos de la Policía y la Guardia Civil: «Y nadie nos contó nada de lo que allí se había tratado. No es normal e ignoro las razones. Alguien debería explicarlo». Luego añade: «Todo esto sucedía antes de que nosotros enviáramos al presidente la nota que después se desclasificó, que también atribuía la masacre a ETA, pero que no salió hasta las 15,51. No es justo, pues, que se cargue sobre el CNI el error del Gobierno de responsabilizar del atentado a ETA, pues a la misma conclusión habían llegado por su cuenta el presidente del Gobierno y su ministro de Interior, por lo menos horas antes de que el CNI dijera nada sobre el asunto».

En la nota que «privilegia» la autoría de ETA no descarta otras posibilidades «a la espera de que la investigación policial extraiga datos concretos y concluyentes». Además los datos que ofreció Interior eran que en los trenes había explotado titadine, el explosivo habitual de ETA. Explica también Dezcallar que la localización de una furgoneta a media mañana del día 11, con varios detonadores y una casete con versículos del Corán, fue un elemento decisivo para la investigación, pero «nadie tuvo la amabilidad de informarnos de nada. Nos llegaron algunos rumores. Pero nos enteramos con el resto de los españoles, a la misma hora que ellos, a las 20,20, cuando el

ministro Acebes, que se había reunido con los mandos policiales a las 18,15, informó a la opinión pública y justificó el retraso en contarle por la tardanza en traducir la casete».

El relato de Dezcallar es exhaustivo, recoge minuto a minuto lo ocurrido aquel día aciago y la marcha de las investigaciones. Un relato que el exdirector del CNI ha querido expresamente que sea minucioso por las razones expuestas: salvar la profesionalidad de las personas que trabajaban en el CNI y su propia actuación, pues durante años ha sufrido las insinuaciones, cuando no acusaciones abiertas de algún medio de comunicación que recogía opiniones de personas del círculo de Aznar: que los errores cometidos en las primeras horas en torno a la autoría de los atentados se debían a las informaciones erróneas procedentes del CNI. Según el relato de Dezcallar ocurrió todo lo contrario: no fueron convocados a ninguna reunión y la escasa información que les llegaba de la policía era equivocada.

Años después, superado ya el debate sobre lo ocurrido aquellos días en los que Aznar tendría que haber convocado a los representantes de los partidos políticos para mantener una posición común respecto al terrorismo, intercambiar información y, quizá, aplazar las elecciones, personas del entorno del expresidente aseguran que nunca se sintió cómodo con Jorge Dezcallar, nombrado por Federico Trillo —ministro de Defensa—, pero que Aznar consideraba persona cercana al PSOE. Coincide con algo que es habitual en Aznar: cuando desconfía de alguien lo lleva al extremo y además no disimula su desconfianza. Sin embargo, sorprende que no hubiera procedido al relevo del director del CNI si pensaba que su supuesta ideología izquierdista podía provocar que en un momento determinado no iba a ser leal al Gobierno, al PP o a su persona. Más aún teniendo en cuenta que esa persona en la que no confiaba plenamente era nada menos que el máximo responsable de los servicios de información e inteligencia.



Una visita a los bonsáis

*F*elipe González tuvo mucho que ver con la elección de José Luis Rodríguez Zapatero en el XXXV Congreso que celebró el PSOE en julio de 2000, tras la renuncia irrevocable de Joaquín Almunia a causa de la derrota sufrida por los socialistas el mes de marzo anterior. Una de las razones fue la arriesgada apuesta que había hecho Almunia al aceptar un acuerdo para compartir listas con el Partido Comunista.

Todo el mundo dio por hecho que el éxito de Zapatero estaba directamente vinculado con la creación de un grupo de apoyo, Nueva Vía, que capitaneaban Trinidad Jiménez y Jesús Caldera. Apenas un mes antes del congreso se daba por hecho que el ganador sería José Bono, que se convertiría en secretario general gracias, entre otras cosas, al respaldo del expresidente Felipe González, aunque tendría que competir con Zapatero, Matilde Fernández (apoyada por los guerristas) y Rosa Díez, que contaba también con un sector que le aseguraba un buen número de votos. Lo cierto es que, además de que ya con el congreso iniciado Alfonso Guerra dio instrucciones a los suyos para que votaran a Zapatero porque temía que Bono fuera el elegido, el papel decisivo lo desempeñó Felipe González.

Pocos días antes de que se iniciara el cónclave, decidió apoyar a Zapatero, y de hecho se celebró alguna reunión de exministros de González en el domicilio de Rosa Conde a instancias del expresidente, reunión en la que Conde expuso claramente que Felipe creía que Zapatero era la mejor opción para dirigir el PSOE en esos momentos. Solo años más tarde un José Bono que inició el congreso creyéndose seguro ganador comprendió que su amigo González había cambiado de caballo en la recta final.

Zapatero conocía el papel que había desempeñado Felipe en su elección, por supuesto, y durante los primeros meses de mandato acudió en varias ocasiones al expresidente para pedirle opinión, pues nadie mejor que él, con catorce años de experiencia de gobierno a sus espaldas, podía indicarle el buen camino en caso de duda. Una de las sugerencias que le hizo González la aceptó de inmediato: nombrar a José Enrique Serrano jefe de Gabinete. Ya lo había sido con Felipe, y su conocimiento del funcionamiento interno de La Moncloa y del Gobierno, así como su sensatez, le convertían en el hombre más indicado para ocupar ese cargo, sobre todo con un gobierno de tan escasa experiencia previa. Serrano fue un hombre clave para Rodríguez Zapatero y, después, fue también un importante asesor de Alfredo Pérez Rubalcaba y de Pedro Sánchez.

Durante unos meses Zapatero mantuvo un diálogo muy fluido e intenso con Felipe González, del que daban buena cuenta los cronistas de la cosa política, aunque en La Moncloa insistían en que se trataba simplemente de que los dos dirigentes pertenecían al mismo partido y Felipe González había expresado su disposición a ayudar en todo lo que pudiera. Sin embargo, se aseguraba que el contacto no era tan continuo como afirmaban algunos maldicientes que pretendían presentar al nuevo presidente como un hombre permanentemente necesitado de consejos. Se quería dejar claro que Zapatero se bastaba por sí solo, con su propio equipo de gobierno, para tomar las decisiones que necesitaban los españoles.

Este mensaje de un Zapatero muy suelto respecto a Felipe González se vino abajo cuando en un acto celebrado en La Moncloa un fotógrafo de la Agencia EFE creyó ver a González en el jardín y no dudó en disparar la cámara. Al llegar a la agencia comprobó que, efectivamente, se trataba del expresidente. Era una prueba irrefutable de que Felipe González acudía a La Moncloa y, evidentemente, no lo hacía para pasear con nostalgia bajo los árboles, sino que había sido llamado por Zapatero, con toda seguridad para hacerle partícipe de algún asunto de gobierno y escuchar el punto de vista del expresidente.

Desde Presidencia, al tener noticia de que circulaba una fotografía de Felipe González en el jardín de La Moncloa, llamaron a la agencia para que se retirase, pero se encontraron con la negativa del presidente de EFE, Álex Grijelmo, que procedía de la redacción de *El País* y que insistió en distribuirla porque se trataba de un importante documento gráfico. Moncloa recogió velas por temor al escándalo, pero la versión que dieron de la visita

de Felipe González fue tan disparatada que provocó toda clase de chistes en las redacciones. Se dijo que se trataba de una visita privada, pues Felipe quería charlar con los jardineros, con los que mantenía una excelente relación desde sus años de presidente, en los que había pasado muchas horas con ellos compartiendo su afición a los bonsáis, que cuidaba en persona. Una colección de plantas, la que creó González, verdaderamente importante, hasta el punto de que la mayoría de los visitantes extranjeros querían conocerla porque tenían referencias sobre la calidad de sus ejemplares. En los almuerzos y cenas oficiales con frecuencia eran bonsáis los que adornaban las mesas, y más de un presidente extranjero recibió bonsáis como regalo tras visitar La Moncloa.

El caso es que la fotografía de González en La Moncloa durante la presidencia de Zapatero no se volvió a repetir. No porque no acudiera nunca más, sino porque Zapatero se fue alejando gradualmente del área de influencia del expresidente. A medida que iba ganando en seguridad como presidente, también sentía celos de la personalidad incuestionable de Felipe y le molestaba que se pensara que acudía a él para consultarle ante situaciones delicadas. O quizá es que no le gustaban los artículos de Felipe González en *El País*, donde se colocaba a años luz de distancia de las decisiones políticas del nuevo presidente socialista.



Tres encuentros, cero pactos

*P*asado el calvario de la noche electoral del 20 de diciembre de 2015, cuando el PP pasó de una amplia mayoría absoluta a quedarse con solo 123 escaños (luego 122, tras la baja de militancia del diputado segoviano Pedro Gómez de la Serna, investigado por presuntas prácticas delictivas), Mariano Rajoy llamó a sus tres principales adversarios: Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, candidatos del PSOE, Podemos y Ciudadanos a la presidencia del Gobierno.

Rajoy, presidente en funciones, se encontraba en una situación de absoluta precariedad, lo que le obligaba a alcanzar algún tipo de pacto si quería mantenerse en La Moncloa. Tras dos días de reflexión después de las elecciones solo barajaba dos hipótesis en función de las matemáticas: un pacto con Ciudadanos y PSOE, con el voto a favor de Ciudadanos en la investidura y la abstención del PSOE. Este probablemente exigiría contrapartidas, y eso siempre y cuando Sánchez estuviera a favor de dar la oportunidad a Rajoy de repetir en la presidencia.

El primero en acudir a la llamada del presidente en funciones fue el socialista. Frío en el gesto, perfectamente recogido por los periodistas gráficos, en cuanto los fotógrafos abandonaron la sala de La Moncloa donde se iba a celebrar el encuentro, Pedro Sánchez se levantó y le dijo a Rajoy que no tenía nada que hablar con él. Ni se planteaba iniciar negociaciones: no pensaba apoyar ninguna iniciativa que diera continuidad al gobierno del PP y por tanto se fue.

El segundo candidato recibido por Rajoy fue Albert Rivera, con el que había mantenido ya algún encuentro antes de las elecciones. En realidad el presidente en funciones había mantenido conversaciones telefónicas con sus

rivales cuando se produjeron acontecimientos importantes previos a los comicios. Por ejemplo, con ocasión de los atentados yihadistas en Francia, en la sala Bataclan y otros lugares de París. La relación entre los dos líderes conservadores era cordial, y así lo fue este nuevo encuentro, que se prolongó durante una hora aproximadamente, y en el que Albert Rivera habló casi sin parar. Ofreció a Rajoy su análisis de la situación, con los pros y contras de las diferentes salidas a la inestabilidad política que provocaban los resultados electorales.

Rajoy se quedó con la sensación de que Rivera no estaba por la labor de llegar a un pacto de gobierno con el PP, pero sí a mantener la línea que había defendido hasta entonces: facilitar el gobierno, si era posible, a quien había ganado las elecciones, como ya había hecho Ciudadanos en distintos ayuntamientos y autonomías, incluida la de Madrid, donde había facilitado la presidencia a Cristina Cifuentes tras la firma de un acuerdo de gobernabilidad entre PP y Ciudadanos. En Andalucía, donde había ganado el PSOE, se había producido una situación parecida y Ciudadanos había posibilitado que, en este caso, Susana Díaz se mantuviera en la presidencia del gobierno regional.

Sin embargo, se equivocó Rajoy en sus apreciaciones: Rivera no solo no pensaba llegar a ningún tipo de acuerdo de gobierno, sino que días después proclamó que vetaría a Rajoy como presidente. Con quien alcanzó un pacto de gobierno fue con Pedro Sánchez, con el que protagonizó un acto solemne: la firma de un acuerdo de 150 puntos en el Congreso de los Diputados. Aun así, Sánchez no consiguió superar la investidura y, tras las nuevas elecciones, un Rivera que había comprendido que a buena parte de su electorado no le había gustado su acuerdo con el PSOE, llegó a un pacto de investidura con Rajoy. Con mucho menos entusiasmo que el mostrado con Sánchez, pero lo mantuvo a pesar de los muchos avatares políticos.

El tercer convocado por Rajoy, Pablo Iglesias, fue el que permaneció más tiempo en La Moncloa, cosa sorprendente, porque PP y Podemos son partidos que se encuentran en las antípodas uno de otro. Pablo Iglesias ya había mantenido previamente algunas conversaciones telefónicas con Rajoy, pues tras las elecciones autonómicas y municipales, tanto a Iglesias como a Rivera Rajoy los había incorporado a su lista de «personas con las que contactar en situaciones especiales». El líder de Podemos saludó con amabilidad al presidente en funciones y, en cuanto se marcharon los fotógrafos, dijo a Rajoy que era absurdo que tantearan posibilidades de pactos porque no existía absolutamente ninguna. Defendían proyectos completamente distintos y jamás

podrían llegar a ningún acuerdo sobre nada. Pero que si le parecía bien, podían hablar de muchas cosas no relacionadas con la política. Por ejemplo de fútbol. Era evidente que Pablo Iglesias conocía bien la pasión del presidente por todo lo relacionado con el deporte, sobre todo el fútbol y el ciclismo, y quizá sabía también que sus equipos favoritos eran el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña.

A Rajoy le pareció muy bien la idea. Se sentaron y durante casi hora y media cambiaron impresiones sobre multitud de asuntos que probablemente nadie podía imaginar que formaban parte del temario de dos dirigentes políticos que se reunían para tratar sobre cómo conformar un nuevo gobierno. También hablaron, por supuesto, de la complicada situación política, pero en un tono cordial y sin tensiones, porque sabían los dos que no existía ni un solo punto de coincidencia en sus análisis sobre cómo debía encararse el futuro.

Tanto Rajoy como Iglesias comentaron después en privado que habían disfrutado con la conversación. Y también uno y otro repitieron en varias ocasiones que «se caen muy bien». Pero la divergencia era absoluta en el plano político, y, en cuanto pueden, no dudan en lanzarse durísimas acusaciones. Iglesias culpa a Rajoy de haber destrozado el Estado del Bienestar y formar parte de un casi institucionalizado entramado de corrupción; Rajoy acusa a Pablo Iglesias de leninista, demagogo, populista y fiel servidor del chavismo venezolano.



Regalos y regalazos

*E*n diciembre de 2013 el BOE publicó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno promovida por el gobierno de Mariano Rajoy, que en su trámite parlamentario contó solo con el respaldo del PP, PNV y CiU. Era aplicable a los miembros del Gobierno, altos cargos y asimilados de la Administración del Estado, comunidades autonómicas y entidades locales, y meses después fue asumida también por la Casa Real por indicación del rey Felipe.

El texto de la Ley recogía que no se aceptarían regalos que superaran los usos habituales, sociales o de cortesía, ni se aceptarían favores o condiciones ventajosas que pudieran condicionar el desarrollo de las funciones de los altos cargos. En el caso de obsequios de mayor relevancia institucional, se procedería a incorporarlos al patrimonio de la Administración Pública correspondiente. Esta ley no estaba vigente en el año 1996, cuando José María Aznar ganó sus primeras elecciones y daba fin así a los catorce años de gobierno de Felipe González.

Casi dos meses tardó Aznar en ser investido presidente. Necesitaba diversos apoyos parlamentarios y a ello se dedicó con todo su empeño Rodrigo Rato, que desde hacía tiempo mantenía buenas relaciones personales con Jordi Pujol a través de los negocios de comunicación de su familia durante la etapa de Pujol como presidente de la Generalitat. Rodrigo Rato culminó sus negociaciones con el político catalán a través de un acuerdo de colaboración con el gobierno de Aznar, el llamado Pacto del Majestic, que permitió a Aznar ser elegido presidente en la primera sesión de investidura. En esos dos meses Felipe González se dedicó a recoger sus cosas, hacer lo que se llama «traspaso de poderes» de manera que su equipo pudiera ir informando al de

Aznar de las cuestiones de funcionamiento interno del Gobierno y del propio palacio de La Moncloa. Y mientras se preparaba esto, González se dio cuenta de que la casi totalidad de los regalos institucionales recibidos durante sus años de presidencia estaban amontonados de cualquier manera en varias dependencias del palacio.

No quiso marcharse sin dejar aquellos regalos mínimamente ordenados. Lo comentó con Carmen Romero y ella misma se ofreció a hacer un inventario de lo que se guardaba en La Moncloa, con ayuda del personal de Presidencia. Además de hacer una lista de los mismos, consiguieron determinar también, en la mayoría de los casos, su origen. Para ello colaboraron el propio presidente saliente, sus colaboradores, los miembros del gabinete que habían participado en alguno de los numerosos viajes nacionales e internacionales, así como los que habían formado parte del equipo que recibía las visitas de dignatarios extranjeros.

Los regalos se contaban por centenares, pues junto a los institucionales se encontraban también los de «espontáneos» que regalaban algo al presidente o se lo enviaban a La Moncloa. Durante varios días Carmen Romero se dedicó a la tarea. Quería dejar todo en orden. Solo se llevaron los más personales y que no tuvieran un valor considerable. Ver todo aquello amontonado sin ningún tipo de criterio era un espectáculo que demostraba que, en la mayor parte de los casos, los dignatarios prestan escasa atención a este tipo de obsequios a los que obliga la cortesía y las normas diplomáticas. Solo en muy escasas ocasiones se advertía que el jefe de Estado o de Gobierno había dedicado unos minutos a elegir un presente que pudiera satisfacer o ilusionar a la persona a quien iba a ser entregado.

Había allí desde impresionantes alfanjes y espadas cuajados de joyas, regalados por reyes, emires y jeques árabes, hasta obras de arte valiosas, reproducciones de monumentos de pésimo gusto, armatostes cuya utilidad era desconocida, delicadas labores, infinidad de obras de artesanía popular, libros recién editados y primeras ediciones, cuadros de pintores desconocidos que querían agasajar al presidente... Un maremágnum parecido a una almoneda, pero que había que salvaguardar, porque incluso los regalos de personas sin relevancia pública merecían el respeto y agradecimiento del presidente.

Había sido más fácil buscar destino para los animales que con frecuencia han recibido los reyes y los presidentes en sus viajes: caballos, perros, halcones, osos panda... En el zoo madrileño se encuentran algunos de esos

animales y sus descendientes. Felipe González tuvo el capricho de quedarse con una llama que recibió durante un viaje a Perú, para la que se encontró acomodo en un recinto al fondo del jardín de La Moncloa. No perdía oportunidad de escupir a quien pasaba cerca, y se convirtió en un animal que solo divertía a los hijos del presidente... precisamente porque escupía a los visitantes.

Rodríguez Zapatero fue menos meticuloso con alguno de los regalos que recibía. Un dirigente de un país exótico le regaló una silla de montar que solo puede calificarse como apoteósica. Era espléndida, de colorido exultante para completar la exquisitez de la piel exquisitamente trabajada. El presidente decidió agasajar a un buen amigo, periodista, al que le gustaban los caballos. Le llamó para preguntarle si le gustaría tener esa silla, y después de que el periodista le preguntara por activa y por pasiva si podía hacerlo, si efectivamente era posible regalar un regalo de un mandatario extranjero, le aseguró Zapatero que se trataba de un regalo personal, no institucional, y que no había ningún problema, que estuviera tranquilo. El periodista aceptó finalmente. Más que por la silla en sí —tremendamente barroca, espectacular— por proceder de quien procedía. La tiene de adorno en su casa y cuenta con orgullo a quien pregunta de dónde la ha sacado, que se trata de una silla con historia. Y tanto.



El escaño de Orense

*E*n febrero de 2009, Alberto Núñez Feijóo vivía una campaña electoral tensa, complicada, en la que se estaba dejando la piel para tratar de convertirse en presidente del gobierno gallego. Una ambición política que culminaba una larga carrera como político y como gestor, y que tenía también una vertiente personal importante.

Esa carrera se había iniciado con José Manuel Romay Beccaría como impulsor, pero era Manuel Fraga quien había llamado a Feijóo para que se integrara como consejero de su gobierno y quien le había señalado como posible delfín al nombrarle después vicepresidente de la Xunta, aunque otro vicepresidente ansiaba también el delfinato: José Manuel Barreiro. Pero esa lucha —pacífica— por la sucesión se produjo más tarde, cuando Fraga ganó las elecciones en 2005 pero se quedó a un escaño de la mayoría absoluta y PSdG y BNG (socialistas y Bloque) formaron un gobierno de coalición. El eterno problema del Partido Popular, obligado a ganar por mayoría absoluta en municipios y autonomías si pretende gobernar.

Manuel Fraga dejó la política gallega y fue elegido senador por la cámara autonómica, y en cierto sentido a Núñez Feijóo, candidato ya a la presidencia de la Xunta en el 2009, quería ganar las elecciones por mayoría absoluta por sí mismo, por su partido, pero también como homenaje a Fraga, recuperando un gobierno que el pacto entre el PSdG y el BNG le había arrebatado a quien había confiado en él, en Feijóo.

Un inciso sobre el expresidente gallego. Fraga entró en el Senado por la puerta grande. Incluso los socialistas reconocieron que la Cámara Alta se

enriquecía con la presencia de un hombre de su amplia trayectoria política y cultural, que había jugado un papel importante en la historia de España y de Galicia. En sus años como presidente de la Xunta, mantuvo una buena relación personal con Felipe González y sus ministros, con una labor continua e insistente para conseguir la colaboración del Gobierno central en la defensa de los intereses de su tierra.

El primer día que acudió al Senado, su presidente, Pío García Escudero, quiso esperar en la puerta a quien era un senador tan especial, fundador además de su partido y hombre por el que sentía un profundo respeto y afecto. Escudero, buen conocedor de los hábitos de Fraga, a pesar de que la actividad de la Cámara empezaba a partir de las nueve de la mañana estaba preparado a las ocho... hora en la que Fraga bajó de su coche cargado de carpetas mientras el conductor sacaba cajas con papeles del maletero.

Tras los saludos de rigor, García Escudero acompañó a Fraga a su despacho. Un Fraga que ya le estaba explicando que en aquellas cajas y carpetas se encontraba todo lo relacionado con la reforma del Senado, que llevaba preparando desde que supo que el parlamento gallego le iba a elegir senador. El eterno gran proyecto de todas las legislaturas, que sigue sin aprobarse por las discrepancias de los partidos sobre el papel que debe tener la Cámara Alta y cómo articularlo.

Una vez instalado Fraga en su despacho, Pío García Escudero volvió a las dependencias de la Presidencia del Senado para tomar las medidas oportunas: a las 8 de la mañana, sin falta, un ujier tenía que responsabilizarse de que las puertas del edificio estuvieran abiertas, hubiera o no pleno y comisiones. Y así fue durante años, que el senador Fraga se presentaba a esa hora en el palacio con lluvia o calor, hubiera no actividad parlamentaria.

Volvemos a las elecciones del 2009. Las cuentas de la mayoría absoluta para Feijóo no eran tan claras como para que se sintiera seguro de alcanzar su objetivo. Que ganaba era seguro, pero dos escaños podían alejarle de la Xunta: el voto de la emigración podía decidir un escaño, incluso dos por los siempre polémicos restos de la ley D'Hont, y en Orense un escaño estaba «bailando», como se dice en lenguaje político.

Orense era feudo del PP no por el partido sino por su hombre en esa provincia, José Luis Baltar. Con muchos años de política a sus espaldas, se trataba de un «cacique» en el sentido más amplio de la palabra, presidente de

la Diputación y hombre que manejaba absolutamente todos los hilos, desde la capital hasta el último pueblo de Orense. Acostumbrado a imponer su criterio, las tuvo tiesas con todos los dirigentes del partido, regionales y nacionales, incluido el propio Fraga... y todos acabaron cediendo siempre ante él porque era quien ganaba las elecciones. Su marca, en Orense, resultaba más importante que la del PP. Sucumbió al final en el 2012, cuando apareció la corrupción en su exitosa carrera y le marcó la Justicia por contratación indebida de más de un centenar de personas en la Diputación, tráfico de influencias y malversación de dinero público. Dimitió como presidente de la Diputación y le sustituyó su hijo, persona también controvertida a la que Feijóo quiso relevar en más de una ocasión, aunque nunca dio el hachazo final porque también José Manuel Baltar ganaba las elecciones. No por sí mismo — lo reconoce todo Orense—, sino por ser hijo de un hombre campechano, lenguaraz, peleón, extrovertido... al que debían todo en numerosos pueblos de la provincia, pues la Diputación repartía dinero a manos llenas para cuestiones que garantizaban el voto incondicional de sus vecinos.

José Luis Baltar, por tanto, sabía en 2009 que la presidencia de Núñez Feijóo dependía en buena parte de él mismo, de su esfuerzo por conseguir el voto «bailón» de Orense, y no dudó en utilizar todos los métodos a su alcance para conseguirlo. Sin pudor. Moviéndose en la legalidad, pero sin pudor.

En un mitin, acusó a un altísimo dirigente del BNG de su provincia de que, tras haberse separado de su mujer a cara de perro, se encontró con que no podía acceder al domicilio familiar a ver a sus hijos, todavía muy pequeños. Lo intentó por todos los medios, con llamadas de teléfono, a la puerta... sin éxito. Según Baltar, se metió en su coche y lo lanzó contra el chalé familiar, destrozando la puerta del garaje. La historia se convirtió en la chanza de toda Galicia por la forma en que fue narrada por el presidente de la Diputación de Orense, que recreó la situación provocando la hilaridad de los presentes, comentarios por toda la región, jocosos unos, de indignación otros por entrar en asuntos privados, y a Feijóo le faltó tiempo para llamar la atención a Baltar —con cuidado, a aquel Baltar no se le podía levantar demasiado la voz— y decirle que había que tratar con respeto a los adversarios, sobre todo en las cuestiones estrictamente personales.

De forma clara, el PP quería arrasar en la ciudad de la que probablemente dependía la mayoría absoluta. Y cuando faltaban dos días para las elecciones, un mitin de Núñez Feijóo en Orense, con un pabellón abarrotado, se empezó sin la presencia de Feijóo, que llegaba de otro lugar adonde también había

acudido con su caravana electoral para pedir el voto. Como este se retrasó sobre el horario previsto, Baltar se sintió obligado a prolongar su intervención para dar tiempo a que llegara el candidato. Tras elogiar por activa y por pasiva a Alberto Núñez Feijóo, rendir homenaje a Fraga, cantar las excelencias de los candidatos de la provincia y hablar de los hombres y mujeres de Orense como la panacea de todas las virtudes, el entusiasmo de un público entregado le hizo venirse arriba.

Cuando Feijóo llegó, mientras esperaba en la primera fila a que le dieran entrada para subir al escenario y ante su estupor, Baltar empezó a contar el episodio del dirigente del BNG con una verborrea desbordante, recreándose en la escena, mientras los acompañantes del candidato y los periodistas allí presentes contemplaban sus sudores fríos, abochornado por lo que estaba viviendo. Bochorno que, sin embargo, no sentía la mayoría del público, que reía encantado con los detalles que aportaba el orador.

El escaño en juego fue finalmente para el Partido Popular. Y Feijóo logró su primera mayoría absoluta, la que le convirtió en presidente de la Xunta.



Esperanza, Susana, Cristina

No son las únicas mujeres que han llegado a presidir un gobierno regional, pero Esperanza Aguirre, Susana Díaz y Cristina Cifuentes tienen algo en común: en los tres casos las especulaciones se han cebado con ellas, convertidas en protagonistas de supuestas maniobras para hacerse con el liderazgo de su partido.

Es evidente que Esperanza Aguirre y Susana Díaz estuvieron algún tiempo en la pelea, de forma directa o a través de personas interpuestas, mientras que Cifuentes hizo cuanto estuvo en su mano, que fue mucho, para cortar de cuajo cualquier iniciativa que quisiera parar su ascenso a las alturas; no es persona que se caracterice por movilizar a quien haga falta para cumplir sus ambiciones, aunque sin ninguna duda las tiene, como todos y cada uno de los que se dedican a la política. Ni siquiera se quejó cuando en la campaña de 2015, en la que competía por el gobierno madrileño y Esperanza Aguirre por la alcaldía de la capital, se produjo algún que otro roce entre los equipos electorales por cambios en la agenda de campaña a conveniencia de la candidata municipal. A Cifuentes se le nota menos el afán de poder que a otras —y a otros— dirigentes de los diferentes partidos, pero como ocurre con las meigas, «haberlo haylo».

A pesar del evidente protagonismo de las tres, hay que insistir en que no son las únicas mujeres que cuentan en su haber con un gobierno regional. María Dolores de Cospedal ya era secretaria general del PP cuando fue elegida presidenta de Castilla-La Mancha, y Yolanda Barcina sustituyó en la presidencia de UPN a Miguel Sanz —con quien se las tuvo tiesas en numerosas ocasiones— cuando logró la presidencia del gobierno foral de Navarra. Luisa Fernanda Rudi había sobrepasado de largo sus ambiciones

cuando se convirtió en presidenta de Aragón, pues previamente había sido la primera mujer en ser elegida presidenta del Congreso de los Diputados, la tercera autoridad de España después del rey y el presidente del Gobierno. Nunca aspiró a más ni movió un dedo para convertirse en la segunda autoridad, nada más lejos de sus apetencias personales y políticas. Y tampoco aspiraba a más de lo que fue otra mujer que no suele aparecer en la lista de presidentas autonómicas, la socialista María Antonia Martínez, que accedió a la jefatura del gobierno murciano cuando tuvo que dimitir Carlos Collado por asuntos de corrupción. Fue la primera mujer en ser presidenta de un gobierno regional, pero no a través del respaldo ciudadano, sino por dimisión de su antecesor. Se presentó candidata al finalizar su primer mandato, pero el PP ganó las elecciones con mayoría absoluta.

Es Esperanza Aguirre, por tanto, quien ostenta el título de ser la primera mujer en convertirse en presidenta con el respaldo de los ciudadanos. No tuvo mayoría absoluta y un pacto entre PSOE e Izquierda Unida estuvo a punto de arrebatarle la presidencia que había ganado, pero el llamado «tamayazo» — dos diputados socialistas se ausentaron del parlamento autonómico y el candidato Rafael Simancas se quedó sin investidura— le brindó una nueva oportunidad. El «tamayazo» todavía se menciona con frecuencia cuando se narra la historia política de las últimas décadas. Jamás se pudo demostrar que los dos parlamentarios socialistas hubieran recibido prebendas económicas o laborales a cambio; su vida profesional se desarrolla en el mismo nivel que antes de entrar en política y los dos insisten en que su decisión fue respuesta a que se les había ofrecido cargos en el equipo de gobierno que en el último momento Simancas no quiso concretar. Una comisión de investigación parlamentaria que se desarrolló con expectación máxima y asombrosos índices de audiencia para Telemadrid, que la transmitió íntegra en directo durante varios días, tampoco aportó pruebas de que los dos parlamentarios hubieran sido comprados por el PP o por empresarios vinculados al PP, aunque ese sambenito ha perseguido a Esperanza Aguirre durante toda su vida.

Aguirre, en aquella ocasión, tuvo un arranque que demostró que sabía moverse bien en las procelosas aguas de la política: se negó a someterse a una sesión de investidura en aquel parlamento convulsionado por la «traición» de dos diputados socialistas a pesar de que tenía posibilidades de ganarla, pues ni Eduardo Tamayo ni Teresa Sáez habían renunciado a sus escaños. Promovió nuevas elecciones, que ganó por sobrada mayoría absoluta, e inició así su mandato de presidenta del gobierno madrileño sin que pudieran echarle en

cara que se había aprovechado directamente de dos disidentes de otro partido, sino que contaba con el apoyo masivo de los votantes madrileños. Dicen que la venganza se sirve en plato frío. Si es así, Rafael Simancas se la tomó con creces doce años más tarde, cuando Esperanza Aguirre, contra todo pronóstico, no ganó por mayoría absoluta las elecciones municipales del 2015, en las que su rival, Manuela Carmena, desafió todos los sondeos y convirtió a Ahora Madrid en segunda fuerza a muy escasa distancia del PP. Rafael Simancas, presidente de la gestora socialista en Madrid, se negó a un pacto entre PP y PSOE y prefirió el giro a la izquierda a pesar del daño en votos que había hecho la nueva candidatura a su partido y que siguió haciendo. Incluso se negó a aceptar la propuesta de Aguirre, dispuesta a dar su apoyo al candidato socialista, Antonio Miguel Carmona, con tal de impedir que Carmena gobernara en la capital de España. Para Simancas, Esperanza Aguirre estaba condenada de antemano: a la candidata del PP, ni agua. Carmona, por cierto, fue fulminado días después a pesar de que había rechazado, al menos públicamente, la oferta de Esperanza Aguirre. ¿En algún momento se dejó llevar por la duda y es la razón de que Simancas y Pedro Sánchez le sustituyeran? Todos lo niegan, pero... La versión «oficial», nunca aceptada públicamente por la dirección nacional del PSOE, era que Carmona seguía manteniendo una intensa relación política y personal con el secretario regional socialista, Tomás Gómez, al que Pedro Sánchez había desbancado de forma abrupta por un supuesto caso de corrupción que meses más tarde la Justicia consideró inexistente. Cosas de la política.

Que Esperanza Aguirre y Susana Díaz han movido hilos para hacerse con sus respectivos partidos es algo que nadie niega, excepto ellas mismas, aunque en público respalden a los máximos responsables del PP y PSOE, como no podía ser de otra manera. Hasta el 1 de octubre de 2016, cuando Díaz fue una de las promotoras de la operación que obligó a dimitir a Sánchez.

Más dudoso es que a Cifuentes se le haya pasado por la cabeza hacerse con la presidencia del PP, aunque quizá llegue un día, en un futuro no muy lejano, en el que efectivamente empiece a dar pasos para dirigir su partido y, por qué no, lograr la presidencia del Gobierno. Lo cierto es que su nombre circula en algunos sectores del PP y en ciertos medios de comunicación desde que empezó a destacar como delegada del Gobierno en Madrid por su forma de trabajar, lo que demuestra que en el PP hay personas que son absolutamente leales a sus siglas pero a la vez defienden ideas muy alejadas de las que se consideran señas de identidad de un partido conservador. Todavía se ha puesto

más atención en Cifuentes cuando fue elegida presidenta del gobierno regional al lograr un pacto con Ciudadanos —después de una negociación en la que Cifuentes se dejó la piel—, a pesar de que cedió bastante menos de lo que alardeaba ese partido. La mayoría de las medidas que le exigía la formación de Albert Rivera figuraban ya en el programa electoral de la candidata popular que, sin embargo, para lograr el pacto prefirió no recordar que ya había enarbolado la bandera de la lucha contra la corrupción, lo que en algunos casos le provocó problemas con miembros de la dirección madrileña de su partido.

Curiosamente, cuando desde Ciudadanos se ponía veto a Rajoy como candidato a la presidencia del Gobierno —veto que después negó Rivera cuando emprendió negociaciones con Rajoy para su investidura tras las elecciones del 26 de junio de 2016—, desde las filas de Ciudadanos se decía abiertamente que solo apoyarían un presidente del PP si el candidato fuera Cristina Cifuentes, Alfonso Alonso, Ana Pastor, Alberto Núñez Feijóo o Pablo Casado. Un par de años antes habría sido impensable que Cifuentes figurara en una lista de «presidenciables», aunque lo mismo podría decirse de Pablo Casado. A pesar de que el protagonismo de Cifuentes se potenció al ser elegida presidenta del gobierno de Madrid, su trayectoria política era importante desde muchos años antes, como ocurría en los casos de Esperanza Aguirre y de Susana Díaz cuando llegaron a sus respectivas presidencias.

Pocos militantes del PP pueden presumir de formar parte del partido desde los tiempos de Alianza Popular, como es el caso de Cifuentes. Esperanza Aguirre inició su vida política en el Partido Liberal, que formó parte de Alianza Popular, junto a los democristianos del PDP —de donde procedían Javier Arenas o José Ignacio Wert— y otros partidos territoriales menores. Esa amalgama de partidos de distinto signo e ideología finalmente se disolvió y la mayoría de sus miembros se convirtieron en militantes del Partido Popular, el nuevo nombre que Fraga eligió una vez que volvió a tomar las riendas de AP, visto el fracaso de Antonio Hernández Mancha. Tras unos meses de «intervención», desde una sede alquilada enfrente de la actual en la calle de Génova, Fraga convocó un congreso en Sevilla a principios de 1990 en el que se eligió a José María Aznar nuevo presidente del Partido Popular, con la gaviota como emblema y el azul como color corporativo. Fraga decidió entonces dejar definitivamente atrás sus deseos de presidir el Gobierno de España para intentar ser el presidente de los gallegos, cosa que consiguió sin excesivo esfuerzo.

Cifuentes, en esos años, era una militante destacada de Madrid y un año después de que se iniciara la «era Aznar» fue elegida diputada del parlamento autonómico, donde permaneció durante once años, los últimos en cargos de responsabilidad como portavoz adjunta y portavoz de las más importantes comisiones. Fue en esa fase donde empezó a destacar en el partido por su valía y también porque la propia Esperanza Aguirre le dio cancha, aunque después se produjera una rivalidad no confesada entre las dos mujeres políticas. Y fue en ese periodo cuando Cifuentes tuvo oportunidad de conocer bien a Pedro Sánchez, diputado regional durante varios años y sin un papel excesivamente destacado como parlamentario. No por falta de valía, sino porque en los partidos la oportunidad de destacar suele tener que ver con los apoyos de «más arriba» y Sánchez solo fue un socialista a tener en cuenta cuando se fijó en él José Blanco, a la sazón vicesecretario general del PSOE, y le incorporó a su gabinete junto a Antonio Hernando. Gabinete en el que ya estaba Óscar López. Pero esa es otra historia.

También en su etapa previa al gobierno regional madrileño tuvo ocasión Cristina Cifuentes de conocer a otro dirigente político con el que tendría que lidiar Rajoy en el futuro, tras las elecciones de diciembre de 2015 que dieron entrada en el Congreso de los Diputados a Podemos y Ciudadanos y se rompió el bipartidismo de las últimas décadas: Pablo Iglesias. Como delegada del Gobierno, Cifuentes se vio obligada a seguir muy de cerca los movimientos que nacieron en torno al 15-M, algunos de ellos muy violentos aunque presumían de defender sus ideas a través del diálogo. Precisamente en esos momentos Cifuentes sorprendió a propios y extraños al convertirse en una auténtica experta en grupos antisistema —que los había de todos los colores y con muy diferentes actitudes públicas— y en bandas callejeras, desde las peligrosas maras centroamericanas hasta las nacidas en barrios marginales o bajo la excusa del fanatismo futbolero que, con frecuencia, derivaban hacia posiciones abiertamente delictivas y que cosechaban incluso algún muerto de los equipos rivales.

En sus años de «gobernadora» —como gustaba llamarse Ana Tutor, antecesora de Cifuentes y primera mujer que ocupó el cargo de delegada del Gobierno en Madrid—, Cifuentes se tomó con gran seriedad su trabajo de máxima responsable de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Madrid; mantuvo excelentes relaciones con los profesionales de los dos cuerpos de seguridad y se implicó directa y personalmente en los casos que provocaban mayor alerta social, entre ellos las manifestaciones, concentraciones y batallas

organizadas por los grupos y bandas mencionados. Cifuentes había oído hablar de Pablo Iglesias mucho antes de que decidiera crear Podemos; antes de que emprendiera su personal cruzada política —utilizando inicialmente su propio canal de televisión— y de que acudiera a las tertulias televisivas de canales nacionales que le abrían sus puertas conocedores de que con un invitado de Podemos tenían asegurada la subida de la audiencia.

Cuando todavía era delegada del Gobierno Cifuentes recibió dos invitaciones de Pablo Iglesias, como contó ella misma en el programa *Al rojo vivo* cuando ya era candidata a la presidencia del gobierno regional. Una para recorrer juntos el barrio de Lavapiés, donde Iglesias y Podemos pisaban con fuerza y tenían gran predicamento. Otra para ver la serie *The Wire* —policías, jueces, periodistas, políticos, escuchas más o menos legales— en el sofá de la casa de Pablo Iglesias. Explicaba Cifuentes a Antonio García Ferreras que había rechazado el sofá de Iglesias «porque igual a Tania Sánchez —pareja entonces del líder de Podemos— no le habría gustado». En cuanto al paseo por Lavapiés también hubo negativa porque «en ese momento había demasiada tensión y se habría entendido como una provocación».

La prudencia de Cifuentes contrasta con el talante de Esperanza Aguirre, iconoclasta por excelencia, que no tiene complejos a la hora de expresarse públicamente. Es una mujer que hace de su capa un sayo, tanto cuando se presenta en una rueda de prensa con los patucos del avión que la traía de vuelta a Madrid tras vivir en directo un atentado en Delhi, como cuando incumple las órdenes de los policías municipales que la retenían en la Gran Vía: tras aparcar en doble fila para sacar dinero de un cajero y harta de esperar que la dejaran marcharse, se metió en su coche y se dirigió a su domicilio seguida por los munícipes, que trataban de cortarles el paso. O cuando plantó cara a Ruiz-Gallardón, a la sazón alcalde de Madrid, que pretendía colocar a su hombre de confianza, Manuel Cobo, al frente del PP madrileño. Aguirre movilizó todo lo que podía movilizar, empezando por ella misma, y provocó una contienda en la que Cobo y Gallardón sufrieron una derrota más que considerable. Los votos que sumaron no es que fueran pocos, sino que rozaban el ridículo frente a los conseguidos por Aguirre. Desde la presidencia del gobierno regional y del PP regional, Esperanza mantuvo no pocas polémicas con el alcalde Gallardón, aunque no perdía ocasión de expresarle públicamente su cariño por los muchos años de compartir aventuras políticas.

Esperanza Aguirre no solo ha sido un referente del PP madrileño, sino del nacional, y ya apuntaba maneras cuando fue nombrada para dirigir el Ministerio de Educación y Cultura por José María Aznar —creía que iba a serlo de Medio Ambiente, cargo que finalmente fue para Isabel Tocino— y circularon toda clase de historietas y chistes con los que se pretendía demostrar la escasa preparación de la nueva ministra. Si años antes Fernando Morán reaccionaba con furor ante los chistes con los que le «agasajaban» los suyos cuando era ministro de Asuntos Exteriores de Felipe González, Aguirre, sin embargo, pasaba olímpicamente de los cuentos sobre su supuesta incultura. Actitud inteligente que la convirtió en una especie de icono que provocaba filias y fobias por igual. Nunca ha dejado indiferente a nadie.

Cambió su perfil cuando fue elegida presidenta del Senado, con una imagen más institucional y se potenció aún más al convertirse en presidenta del gobierno madrileño. En esos nueve años apareció la Esperanza Aguirre rompedora, que decía sus verdades sin que le importaran las consecuencias; tuvo sonadas polémicas con Aznar primero y con Rajoy después. Incluso coqueteó con la idea de convertirse en alternativa a Mariano Rajoy tras ganar Zapatero las elecciones de 2008. Rajoy, tras unos días de dudas sobre su continuidad, decidió seguir al frente del partido —después de haberse ido de viaje con su mujer a Canarias, a reflexionar sobre su futuro—, pero el PP estaba muy tocado: fuertes tensiones internas, sensación en un amplio sector de que era necesario relevar al presidente y una crisis en el País Vasco que provocó la dimisión de la presidenta regional María San Gil —una de las personas más queridas del PP que, a pesar de los intentos de Rajoy y de algunos de sus colaboradores, no reconsideró su posición pues, decía, había perdido la confianza en el presidente del partido—. Aguirre apoyó abiertamente a María San Gil, a la que llegó a ofrecer un cargo en el gobierno madrileño que esta rechazó por razones personales. Pero además de alinearse con San Gil, Esperanza Aguirre permitió, e incluso alentó, que su nombre circulara como candidata para sustituir a Rajoy al frente del PP. No llegó a hacerlo a pesar de que se dejó querer, como se dice coloquialmente, aunque sin dar el paso que le pedían un buen número de dirigentes del partido y un número aún más amplio de militantes.

La situación se convirtió en insoportable para Rajoy en las semanas previas al congreso que se iba a celebrar en Valencia para elegir a la nueva dirección, la que tendría que marcar la estrategia en los años siguientes para tratar de ganar las elecciones a Rodríguez Zapatero. Un núcleo muy cercano a

Aguirre, defensores todos ellos del liberalismo y algunos con peso en áreas de poder de Madrid, mantuvieron toda clase de reuniones para analizar la situación del PP y tratar de captar adhesiones entre dirigentes del partido, algún que otro empresario y también periodistas influyentes que no dudaron en promover la candidatura de Esperanza Aguirre para la presidencia del PP y, por tanto, a la del Gobierno. Aguirre, sin embargo, no dio el paso aunque enredó bastante en aquellos días convulsos. Como confesaba uno de quienes trataban de empujarla, nunca dijo abiertamente que optaría a presentarse como relevo a Rajoy pero actuaba como si fuera a hacerlo. Semanas antes de la fecha del congreso mantuvo una larga reunión con Rajoy para hablar del futuro del PP, y de la conversación salió su decisión de no optar a la presidencia, aunque sí planteó —en esa reunión y en los días siguientes— que negociaría durante el congreso para conseguir que varias de las personas de su confianza formaran parte de la nueva ejecutiva. Contra todo pronóstico, y sin duda con la colaboración necesaria del PP valenciano con Francisco Camps a la cabeza, Rajoy se hizo fuerte en ese congreso, que ganó ampliamente y en el que ofreció a María Dolores de Cospedal la secretaría general del partido.

Había sido consejera de Transportes e Infraestructuras del gobierno de Madrid con Esperanza Aguirre, cargo que dejó cuando la propia Esperanza sugirió su nombre a Rajoy —el presidente del PP buscaba una persona idónea para dirigir el partido en Castilla-La Mancha y trabajar para romper con la dinámica del PSOE, que se perpetuaba en el gobierno de esa región—. Cospedal —que a pesar de ser consejera no se puede considerar del círculo político de Aguirre— no ganó las primeras elecciones regionales en las que se presentó como candidata, pero sí las segundas, por mayoría absoluta, y se convirtió en presidenta del gobierno manchego. Durante sus años de secretaria general del PP, que compaginó con la presidencia del gobierno de Castilla-La Mancha, mantuvo frecuentes choques con Aguirre. Esperanza anunció el abandono de la presidencia del gobierno regional por razones personales —había sido operada de cáncer meses antes—, aunque después potenció su actividad política como presidenta del PP de Madrid y no paró hasta ser candidata a la alcaldía. Finalmente renunció también a la presidencia regional del partido, al responsabilizarse de no haber detectado los numerosos casos de corrupción entre altos cargos del PP madrileño que afectaban a algunos de los hombres de su círculo más cercano, aunque no a ella.

Había dicho en la campaña electoral municipal que, si no era alcaldesa, sería concejal, líder de la oposición. Solo la creyeron quienes la conocían

bien, porque lo habitual en la política española es que si un peso pesado no consigue ser elegido para aquello a lo que aspira, no tarda mucho tiempo en renunciar a su cargo parlamentario o municipal para retirarse a sus cuarteles de invierno y, con frecuencia, conseguir un buen trabajo en la empresa privada. Aguirre, sin embargo, se ha mantenido en su sillón de concejal, donde intenta poner en entredicho las decisiones de la alcaldesa, Manuela Carmena, una mujer que aparentemente no tenía ninguna posibilidad de lograr la alcaldía y que, sin embargo, echó por tierra las aspiraciones de Aguirre y además relegó al PSOE madrileño a un vergonzoso tercer puesto en Madrid. Algo impensable, lo uno y lo otro.

Precisamente el bajón considerable e importantísimo del PSOE en Madrid, con una pésimamente resuelta crisis de dirección, fue una de las razones por la que un número destacado de dirigentes y exdirigentes nacionales, regionales y locales se plantearon —después de las elecciones municipales y autonómicas de 2015— la necesidad de cambiar de cartel, de elegir un secretario general que potenciara al PSOE en lugar de debilitarlo. El acuerdo con Podemos logró suavizar el impacto negativo del resultado, pues a pesar del retroceso del PSOE, el PP —que ganó esas elecciones— no había revalidado su mayoría absoluta en importantes alcaldías y gobiernos regionales. Esta circunstancia permitió al PSOE alcanzar el gobierno en regiones y ciudades en las que no había ganado. La resolución de la crisis del PSOE se aplazó hasta las elecciones generales de diciembre de 2015, y ahí aparece con fuerza el nombre de Susana Díaz.

Como en el caso de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, Susana Díaz estaba en política desde que tenía uso de razón y cuando llegó a las alturas era una persona muy conocida en el PSOE, tanto en el andaluz como en el nacional, y, desde luego, su figura era familiar para la casi totalidad de los andaluces, no solo los socialistas. Con diecisiete años se afilió a las Juventudes, fue después concejal del Ayuntamiento de Sevilla y, en 2004, diputada en el Congreso. No destacó especialmente por su trabajo parlamentario pero sí, en cambio, estableció relaciones importantes con los dirigentes nacionales de su partido que fueron importantes en el futuro. No se puede decir, en ningún caso, que quisiera sumar adhesiones con fines arribistas, porque Díaz consiguió hacerse un nombre frente a otros diputados y diputadas, que pasan sin pena ni gloria, pues se sumaba sin un «pero» a las iniciativas y decisiones del partido. Era patente su disponibilidad, contaba con un carácter extrovertido y entusiasta, que siempre ayuda, nunca provocó un

roce con un compañero y su lealtad al PSOE estaba por encima de cualquier otra consideración.

Decidió después volcar su actividad en Andalucía, donde fue senadora, y en 2010 fue elegida secretaria de Organización del PSOE andaluz. Allí su carrera para el futuro se consolidó, pues se convirtió en pilar fundamental de un partido que, al tener sus máximos dirigentes responsabilidades de gobierno, la Secretaría de Organización era básica para incrementar la implantación y la influencia del PSOE. José Antonio Griñán la incorporó a su gobierno como consejera de la Presidencia, un puesto que le permitía una gran presencia pública y mantener su peso en el PSOE regional. También, en cierto sentido, la «marcaba» como sustituta si, como se sospechaba, los casos de corrupción — ERES, cursos de formación— podían obligar a la dimisión del presidente — bien por su implicación directa, bien por no haber cumplido con la obligación de vigilar a sus subordinados—. Cuando Griñán dimitió finalmente Susana Díaz se convirtió en presidenta, en otoño de 2013, una fecha complicada para el PSOE nacional, que había tenido un fracaso electoral histórico con Rubalcaba como candidato.

Díaz, en apenas unos meses de gobierno andaluz, se había convertido en una figura nacional, un referente, por su personalidad. Ante la ambigüedad del PSOE en cuestiones tan envenenadas como el referéndum catalán, la decepción por el resultado electoral y la desazón provocada por el gobierno de Zapatero, aparecía una Susana Díaz que reivindicaba las esencias izquierdistas del socialismo frente a la aparición de partidos radicales que se promovían como únicos referentes de izquierdas. Apoyaba de forma tajante la unidad y los símbolos de España, y defendía la Constitución por encima de todo, incluida la monarquía. Tampoco tardó en pedir audiencia con Rajoy, con el que desde el primer momento estableció una relación de cordialidad institucional para defender sin fisuras los intereses de España en general y de Andalucía en particular.

El nuevo fracaso del PSOE en las elecciones europeas de 2014, que provocó la dimisión de Rubalcaba, fue causa también de que un número destacado de dirigentes y militantes del PSOE miraran hacia Andalucía, pero Susana Díaz, inteligentemente, no se dejó tentar por los cantos de sirena. Era consciente de que había llegado a la presidencia del gobierno andaluz por carambola, por la dimisión de Griñán, y su fuerza solo se consolidaría si ganaba unas elecciones. Apoyó a Pedro Sánchez para la Secretaría General del partido frente a Eduardo Madina, aunque muy poco después ya se

advertían sus discrepancias con él y su distanciamiento. Una de las pistas fue su insistencia pública para que Madina tuviera un lugar en la lista madrileña al Congreso de los Diputados que le garantizara un escaño. Luego, su malestar por no haberlo conseguido —al ser relegado a un puesto muy bajo de la lista— y su nueva insistencia en las elecciones de junio, a lo que tampoco prestó atención Pedro Sánchez. Sin embargo, Madina consiguió finalmente escaño y Díaz le ha apoyado en cuanta ocasión se ha presentado.

Sin embargo, no ha habido manera de que anunciara de una vez su disposición a dar el salto a Madrid y optar a la Secretaría General en sustitución de Sánchez. Dos han sido las razones. Una, no quería ser acusada de interferir en el proceso electoral en el que Sánchez se enfrentaba a Rajoy y a Pablo Iglesias. La segunda es que a Susana Díaz no le gusta la pelea contra otro candidato, sino las adhesiones inquebrantables o las proclamaciones. Díaz tiene vida propia, pero, a su pesar, lo que provoca más titulares es la faceta de dirigente socialista enfrentada al líder de su partido. Algo parecido, aunque en superlativo, a lo que le ha pasado a Esperanza Aguirre en los últimos años. Las tensiones entre Susana Díaz y Pedro Sánchez han sido tan evidentes que era inútil tratar de desmentirlas. En el verano de 2015, cuando Susana Díaz se encontraba de baja por maternidad, Sánchez pasó varios días en Andalucía e incluso llegó a visitar el lugar en el que se encontraba la presidenta, Chiclana, y no solo no la llamó —ni siquiera llamó al presidente en funciones, a lo que obliga la cortesía política, no digamos ya la personal—, sino que Sánchez recorrió varios lugares acompañado de adversarios de Susana Díaz en el partido.

El momento más incómodo se produjo en la Feria de Sevilla de 2016, cuando Sánchez acudió a la caseta de la Cadena Ser donde se encontraba Díaz. La saludó, acarició a su hijo para que le hicieran una fotografía y durante el tiempo que compartieron mesa prácticamente no se dirigieron la palabra. Es cierto que los dos estaban asediados por personas que les querían saludar, pero a nadie se le escapó que Sánchez llegó acompañado de Alfonso Gómez de Celis, dirigente socialista sevillano con el que la presidenta regional mantenía serias discrepancias políticas.

Susana Díaz se caracteriza por la lealtad a su partido, pero también por guardarse sus cartas. No se pronuncia ni toma decisiones hasta que ha sopesado perfectamente los pros y los contras. Lo que desconcierta a sus seguidores que, como siempre, quieren que las cosas se produzcan cuanto antes. Esperanza Aguirre, sin embargo, es todo lo contrario: lealtad al partido

también, como ha demostrado en innumerables ocasiones —aunque siempre trascienden las situaciones en las que ha movido ficha sin encomendarse a Dios ni al diablo—, pero es dada a tomar decisiones que con frecuencia luego debe corregir. Por ejemplo, cuando dio a entender a un grupo de incondicionales que optaría a la presidencia de su partido frente a Mariano Rajoy —porque eso es lo que ese grupo creyó entender—, o cuando anunció su retirada de la presidencia del gobierno regional pero después intentó seguir mandando en el PP madrileño a través de la presidencia regional del partido.

Cristina Cifuentes es de otra madera. Lealtad también a su partido, pero la ambición se le nota menos, aunque la tiene. Da pasos firmes, pero poco a poco. Quizá porque vio la muerte muy de cerca, como explica a veces, tras el accidente que sufrió en el verano de 2014. Entonces se dio cuenta de cuáles son de verdad las prioridades por las que hay que pelear.



La hiriente «sinceridad» de Sarko

El presidente Sarkozy siempre fue buen amigo del Partido Popular. La relación se gestó en su etapa de ministro del Interior de Jean-Pierre Raffarin, cuando tenía como interlocutor a Ángel Acebes y la lucha contra ETA les obligaba a un constante intercambio de impresiones sobre cómo sumar esfuerzos para localizar y detener a los miembros de la banda terrorista en España y en Francia.

Sarkozy se sentía también amigo de Alberto Ruiz-Gallardón, pariente de su entonces mujer, Cécilia Ciganer, bisnieta del compositor Isaac Albéniz, a su vez tío abuelo del expresidente del gobierno madrileño, exalcalde de Madrid y exministro de Justicia. Por otra parte, como dirigente del partido de centro derecha RPR y después de la UMP, mantuvo unas relaciones muy fluidas con José María Aznar, que le invitó en 2006 a la convención del Partido Popular que se celebraba en Madrid. Allí Sarko, que aspiraba a la presidencia francesa —la logró un año más tarde—, se expresó con más entusiasmo y contundencia que cualquier otro de los participantes, incluidos Aznar y Mariano Rajoy, como si fuera él quien se jugara el futuro del PP y las elecciones de 2008 (que volvió a ganar Zapatero). Lo cierto es que el candidato francés habló de Rajoy, al que conocía superficialmente, como si fuera a ser sin ningún género de dudas el siguiente jefe del Gobierno.

El perfil que hizo de Rajoy no lo igualó ni el propio aludido. Los asistentes salieron de la convención comentando que quien más optimista se había mostrado respecto a las perspectivas del partido y de Rajoy había sido el político francés. Un auténtico profesional de la cosa, un hombre que conocía

muy bien los resortes que hay que utilizar para movilizar al público, por desanimado o apagado que se encuentre.

Los contactos que mantuvo posteriormente con Rajoy no fueron ni frecuentes ni fluidos, aunque sí cordiales, como dirigentes de dos partidos hermanados. Pero la presidencia de Sarkozy —de 2007 a 2012— coincidió con los años en los que Rajoy era líder de la oposición y las obligaciones de un jefe de Estado francés no dan muchas oportunidades para dedicar excesivo tiempo a reunirse con un político de la oposición de otro país, por muy vecino que sea. Después, cuando Rajoy fue elegido presidente del Gobierno, Sarkozy perdía las elecciones frente a François Hollande, por lo que no se produjo su esperada reelección como presidente de la República Francesa.

Antes del verano de 2015, cuando Sarko viajó a Madrid después de fundar un nuevo partido, Los Republicanos, nuevo paso para volver a la batalla por la presidencia, viajó a Madrid para verse con Rajoy que, rompiendo los usos habituales, en vez de invitarle a comer en La Moncloa le llevó a una tasca cercana a la sede central del PP en la calle de Génova, un lugar que Rajoy frecuentaba antes de ser presidente. Mientras degustaban un gazpacho, una ensaladilla rusa y unos chipirones compartidos, hablaron de todo lo que pueden hablar dos dirigentes políticos, francés y español, de las relaciones entre los dos países, de la Unión Europea, del yihadismo, que golpeaba con dureza al mundo entero y particularmente a Francia en esa época, y de las perspectivas electorales de uno y de otro.

Rajoy habló como suele hacerlo cuando se encuentra a gusto, con sentido del humor y la retranca que según los no gallegos es seña de identidad de los gallegos. No disfrutaron de mucho tiempo, pero la conversación fue grata. Tanto, que ante la sorpresa de Rajoy el expresidente francés le dijo abiertamente, y lo reiteró varias veces, que no sabía que era tan lúcido, que le habían contado que no era un presidente como para tirar cohetes. Con toda espontaneidad le transmitió su impresión, y admiración, porque se daba cuenta de que Rajoy sabía lo que tenía entre manos frente a los desaciertos que se estaban produciendo en Grecia y los fallos en el seno de la Comisión Europea. Elogió sus resultados económicos y la forma en que España estaba superando la crisis. Un Rajoy sorprendido comentaba después a la gente de su equipo que no sabía si sentirse halagado por las palabras de un Sarkozy que siempre se había caracterizado por tener un gran concepto de sí mismo, o cabreado porque en el fondo lo que le estaba diciendo el expresidente francés es que le

había considerado un político mediocre, poco más que un don nadie, hasta que había tenido la oportunidad de hablar a solas con él.



Suárez nunca tuvo un debate de investidura

*F*ue el impulsor de la democracia en España, pero nunca se sometió a un debate de investidura. Junto al rey puso en marcha un proceso que se ha estudiado dentro y fuera de España, la transición de una dictadura a una democracia en menos de dos años de tiempo y sin una ruptura de la sociedad. Sin embargo, Adolfo Suárez, una de las figuras más destacadas de la historia política del siglo XX, se resistió a que se debatiera sobre su proyecto de gobierno y fuera votado por los diputados que habían logrado escaño en el Congreso.

Fue presidente del Gobierno en 1976 por elección del rey Juan Carlos, que mantuvo unos meses a Arias Navarro tras la muerte de Franco para disponer del tiempo necesario para, junto a Torcuato Fernández-Miranda como presidente de las Cortes, realizar los cambios legislativos precisos para poner en marcha el proceso democrático. Fernández-Miranda y el propio rey, cuando ya contaban con los elementos legales necesarios, además de provocar la dimisión de Arias Navarro —a través de una entrevista de don Juan Carlos en *Newsweek* en la que expresaba su disconformidad con el presidente, seguida de una exigencia a Arias Navarro tras una dura audiencia—, comenzaron la operación de elegir a Adolfo Suárez, para lo que se hicieron necesarias delicadas gestiones de ambos. Su objetivo era que el Consejo del Reino, tal como mandaban las leyes vigentes en ese momento, ofreciera a don Juan Carlos una terna de la que podría elegir un jefe del Gobierno. La clave era, por tanto, conseguir que Suárez estuviera en esa terna. Y lo estuvo junto a

Federico Silva Muñoz y Gregorio López Bravo quienes, como el propio Suárez, habían formado parte de gobiernos de Francisco Franco.

El rey eligió a Suárez, que juró su cargo en La Zarzuela y de forma inmediata arrancó la complicada tarea de preparar a los españoles para un giro de 180 grados. La meta principal era convocar elecciones en el espacio más breve de tiempo, y con participación de todos los partidos políticos. Lo consiguieron, aunque el profundo malestar que provocó la legalización del PCE estuvo a punto de provocar una grave quiebra social y desde luego produjo una crisis en el Gobierno con la dimisión del ministro de Marina, el almirante Pita da Veiga. Sin embargo, se reaccionó con prontitud ante la dimisión y se trató de apagar los fuegos sociales explicando la necesidad de que los comunistas pudieran participar en cualquier proceso electoral para dar credibilidad a una nueva España democrática. En junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones plenamente democráticas desde la Segunda República.

Suárez creó un partido a velocidad de vértigo, UCD, tras encargarle a Leopoldo Calvo-Sotelo que negociara la incorporación de dirigentes socialdemócratas, liberales, democristianos y personalidades que habían tenido un papel destacado en el franquismo. En esas elecciones de 1977 UCD ganó claramente con 165 escaños que se convirtieron pronto en 166 por la incorporación de Ortí Bordás, independiente en la lista de Castellón. El PSOE quedó en segundo lugar con 118 escaños más los 6 del PSP de Tierno Galván, que pronto se sumaron a la familia socialista. Iban seguidos de los 20 escaños del PCE y los 16 de Alianza Popular, que sufrió un gran fracaso. Y luego estaban los nacionalistas.

En el PSOE de Felipe González siempre defendieron que el éxito de Suárez se debió fundamentalmente a la intervención del presidente en TVE dos días antes de la jornada electoral, cuando aprovechó el espacio gratuito que ofrecía la televisión pública a los partidos para pedir el voto y Suárez pronunció un ilusionante discurso escrito por Fernando Ónega, su asesor en aquel entonces. En esta alocución se incluyó la famosa frase «puedo prometer y prometo», que se convirtió en uno de los hitos de la Transición.

Suárez, que había ganado las elecciones claramente y con importante ventaja sobre sus rivales, juró su cargo en La Zarzuela sin que hubiera debate previo, porque hasta ese momento no existía ninguna fórmula parlamentaria que validara a quien pretendía acceder a la jefatura del Gobierno. Sin embargo, durante esa legislatura, que fue constituyente porque así lo habían

decidido el rey y Adolfo Suárez, al redactar la Constitución sí se incluyó en su articulado la fórmula de elección para los sucesivos presidentes del Gobierno: «El candidato propuesto expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la cámara».

Sin embargo, nada se dice respecto a que tras la exposición se deba abrir un debate en el Congreso de los Diputados. En 1979, cuando Suárez gana nuevamente las elecciones, ahora con una Constitución recién aprobada, antes de jurar su cargo, y de acuerdo con el recién elegido presidente del Congreso, Landelino Lavilla, se decidió que su única obligación era someterse estrictamente a lo recogido en el texto constitucional: pronunciar su discurso y a continuación proceder a la votación.

El PSOE, con su secretario general a la cabeza, exigió un debate parlamentario previo a la votación para clarificar todos los aspectos del programa de gobierno sobre los que pudieran existir dudas o para rebatir los puntos considerados lesivos para los intereses ciudadanos; el PCE se manifestó en el mismo sentido, así como los partidos nacionalistas. La formación de Fraga fue menos drástica, porque al ser este ponente de la Constitución, tenía claro que al menos en ese apartado no se había previsto que lo habitual en una investidura es la celebración de un debate. Landelino Lavilla no ocultaba su desazón en los momentos previos a la sesión de investidura ante la polémica surgida.

Los servicios jurídicos del Congreso alegaban que la Constitución no mencionaba la obligatoriedad de un debate y por tanto no tenía por qué celebrarse. Lavilla consultaba qué se hacía en otros países europeos, y al final decidió una fórmula intermedia que no satisfizo claramente a la oposición pero que significaba al menos que, tras la votación, los partidos podían dar su opinión sobre el programa al dar a todos la oportunidad de explicar su voto. Oportunidad que Felipe González no desaprovechó para incidir en el pasado franquista del presidente del Gobierno. Tras criticar con dureza el programa que Suárez acababa de defender ante los miembros del Congreso, recogió el dirigente socialista parte de un discurso de años atrás, cuando el ahora presidente asumió el cargo de vicesecretario general del Movimiento y se refería a «los fecundos años de la paz de Franco». También citó otro discurso más en el que decía: «Vengo aquí a servir a las órdenes del ministro secretario general del Movimiento con voluntad de convivencia integradora, que tiene su punto de origen en el 18 de julio. Sé bien que se trata de continuar la ingente

obra del Caudillo. Soy un hombre de creencias sólidas y por ello toda mi vida, en lo personal, en lo familiar y en lo político, profundiza en las raíces últimas de mi fidelidad a España y a sus hombres, y en mi lealtad a un régimen nacido en la necesidad de recuperar la identidad nacional del país y su legitimidad como Estado que, encarnado por el generalísimo Franco, ha sabido dar respuesta... ». Si creía Felipe González que su mención al pasado franquista de Suárez iba a hacer mella en su estado de ánimo o le iba a hacer sentirse avergonzado, se equivocaba de medio a medio. No conocía bien —todavía— a quien solo llevaba tres años en la presidencia del Gobierno pero que en ese corto espacio de tiempo había tomado, de acuerdo con el rey, una iniciativa inconmensurable: emprender un proceso constitucional y democrático.

Suárez, con un tono que alguno consideró chulesco, y que ya entonces y en el futuro formó parte de sus señas de identidad, pues se crecía cuando trataban de herirlo, respondió a González de forma contundente y haciendo aún más hincapié en su pasado franquista sin renegar de él: «Se han hecho algunas afirmaciones que afectan a mi historia personal. No me siento, en modo alguno, ofendido por ellas. No las he ocultado en ninguna ocasión ni en ningún momento de mi vida. Soy un hombre que cuando aceptó la presidencia del Gobierno de este país, en circunstancias evidentemente poco satisfactorias para la inmensa mayoría de los españoles, y pienso que también para la inmensa mayoría del mundo internacional, asumí el compromiso firme de devolver la soberanía al pueblo español; asumí el compromiso no de protagonizar, sino de trabajar con todas las fuerzas políticas que entonces estaban en la clandestinidad, en el logro de una España que fuera perfectamente habitable para todos los españoles».

«Dije en mi primera comparecencia pública —señaló Suárez— , cuando solicité el voto de los españoles, para que nadie pudiera llamarse a engaño, que en la formación política que en aquel entonces acaudillaba se presentaban hombres y mujeres que habían servido en el régimen anterior con honor, y hombres y mujeres que habían estado en la oposición democrática al régimen anterior. Y aquella coalición obtuvo un respaldo mayoritario del pueblo español. Naturalmente, sigo sintiéndome orgulloso de mi trayectoria política. No me siento, en modo alguno, deshonesto por la trayectoria política personal que he seguido. He procurado, y es una acusación que se me hace desde sectores muy a la derecha, el cambio de un sistema autoritario a un sistema democrático, apoyándome fundamentalmente en las leyes que entonces estaban vigentes y siguiendo todos los trámites que en ellas se explicitaban para hacer

el cambio político». Y concluyó: «No me siento, por tanto, ofendido por el hecho de que se me recuerde que he sido vicesecretario general del Movimiento cuando fue ministro Fernando Herrero Tejedor; he sido director general de Radiodifusión y Televisión; he sido gobernador civil y jefe provincial del Movimiento; he sido jefe de sección, jefe de negociado... He trabajado mucho, y ahora soy presidente del Gobierno y voy a ejercer como tal presidente del Gobierno. Soy presidente de un gobierno democrático, amparado por un partido que tiene mayoría parlamentaria, y soy también el presidente del primer gobierno constitucional en este país después de cuarenta años de franquismo».

Tenía toda la razón, pero fue también el único presidente de la España democrática que fue investido sin debate parlamentario previo. Un año y medio más tarde de ese discurso en el que reivindicó su biografía, con una UCD desarbolada por las tensiones internas, y distanciado del rey, Adolfo Suárez dimitía de su cargo. Cuando se producía la votación tras el debate de investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, el teniente coronel Tejero irrumpió en el hemiciclo pistola en mano al grito de «quieto todo el mundo» y dio la orden de que todos se tirasen al suelo. Adolfo Suárez se quedó sentado en su escaño, al igual que Santiago Carrillo. El vicepresidente Gutiérrez Mellado, teniente general, se levantó para enfrentarse a Tejero, pero fue zarandeado por varios guardias. Adolfo Suárez acudió de inmediato a su auxilio sabiendo que se exponía a recibir un tiro, pero no lo dudó ni un instante. Impidió así que los golpistas tiraran al teniente general al suelo.



La expresidenta acude al expresidente

Mayo de 2015. Las elecciones municipales y autonómicas fueron muy duras para el PP. Ganó en la mayoría de las regiones y ciudades donde gobernaba, pero en pocas de ellas con mayoría absoluta, por lo que los pactos alcanzados entre el PSOE y Podemos le arrebataron la mayoría de los despachos de poder.

Esperanza Aguirre, después de ser presidenta del gobierno madrileño y anunciar su abandono del cargo por problemas personales, había aceptado la propuesta de Rajoy de ser candidata a la alcaldía de Madrid. Contra todo pronóstico, y debido probablemente a una mala campaña electoral, obtuvo un resultado muy por debajo de lo esperado: 21 concejales, muy lejos de la necesaria mayoría absoluta, con la candidata de Ahora Madrid pisándole los talones. La jueza retirada Manuela Carmena, a la que Podemos había ofrecido al candidatura al Ayuntamiento de Madrid como independiente, había logrado 20 concejales, seguida del PSOE con 9 y Ciudadanos con 7. Una situación muy mala para el PP, con el agravante de que Carmena, vinculada históricamente al Partido Comunista, una mujer de edad avanzada que nunca había tenido un cargo político y que partía con escasas posibilidades de éxito, provocó una ola de simpatía basada en gran parte por el empeño de Esperanza Aguirre de centrar la campaña contra ella, contra su trayectoria y contra su imagen.

Sin darse cuenta, Aguirre la convirtió en una especie de abuela amable, simpática, bondadosa y ajena a los navajeos políticos. Algo absolutamente opuesto a su carácter y, por qué no decirlo, a su conocido sectarismo, ya desde sus tiempos como destacada jueza que se movía en el círculo más intransigente

del PCE. Aguirre cometió además un error imperdonable en política, y más aún en campaña electoral: lanzar una acusación falsa. Dijo que Carmena había accedido a la judicatura a través del cuarto turno, algo que en los medios judiciales se considera como un acceso de segundo nivel. Antiguamente tanto jueces como fiscales debían aprobar una dura oposición... hasta que se abrió la mano para que juristas de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional pudieran convertirse en jueces tras su paso por la Escuela Judicial. Eso es lo que se llama «cuarto turno».

Carmena no tardó en acreditar que era jueza por oposición, como le faltó tiempo también para acusar a Esperanza Aguirre de actuar de mala fe con esta acusación falsa. Aguirre pidió disculpas y aseguró que le habían dado un dato erróneo, que no había mentido a sabiendas. Sin embargo, su crédito bajó puntos y aunque no fue el asunto clave para que Carmena lograra un resultado muy superior al que daban todas las encuestas, y al que esperaba la propia marca Podemos, todos los analistas coincidieron en que aquella acusación contribuyó al éxito de una candidata a la que nadie, ni siquiera en los sueños más optimistas de Pablo Iglesias, se le daba la menor posibilidad de convertirse en alcaldesa de la capital de España.

Pero lo fue, gracias a ese resultado de veinte concejales y también gracias a que Pedro Sánchez —con el peor resultado conseguido en Madrid por los socialistas— se empeñó en arrebatar al PP gobiernos municipales y autonómicos y alcanzar pactos con quien hiciera falta, incluso con Podemos, para conseguirlo. Una decisión muy cuestionada en su partido y que tuvo consecuencias muy negativas en las elecciones generales celebradas meses más tarde. Pero en aquel momento el secretario general socialista solo tenía como objetivo dañar a Rajoy y al PP. Y no dudó en ofrecer la alcaldía a Carmena con el voto de los concejales de su partido. Esperanza Aguirre no tardó en calificar aquel pacto como una desgracia para los madrileños. Y para insistir en su idea de que una alcaldía en manos de Podemos sería un desastre para la ciudad, se tragó su orgullo y, en lo que muchos consideraron un gesto de responsabilidad y de anteponer los intereses de los madrileños a cualquier tipo de ambición personal, ofreció el apoyo de los veintiún concejales del PP para que el candidato del PSOE a la alcaldía, Antonio Miguel Carmona, fuera elegido alcalde a pesar de haber quedado en tercera posición.

Carmona, un economista que como otros tantos políticos de nueva hornada se había fraguado un nombre gracias a su participación en numerosas tertulias de televisión y radio, y que había hecho una campaña imaginativa, intensa y

aparentemente eficaz, no contaba con el respaldo de la dirección federal del partido, ya que era hombre de probada lealtad al exsecretario general de los socialistas de Madrid, Tomás Gómez, al que Pedro Sánchez se la tenía jurada hacía tiempo y había destituido de forma fulminante apenas dos meses antes, nombrando una gestora.

Carmona rechazó personalmente la oferta de Aguirre, pero la interpretación general es que habría estado encantado de aceptar la alcaldía si hubiera contado con el respaldo de Pedro Sánchez... que no estaba dispuesto a dar tanto poder a un Carmona que jugaba en el lado contrario, el de los socialistas que apoyaban a Tomás Gómez y que, además, expresó su desacuerdo con la forma en que Sánchez procedió a la destitución de aquellos sin contar con los órganos regionales y federales, cosa que exigen los estatutos del partido. A pesar de la negativa, Esperanza Aguirre no se conformó. Llamó al despacho de Felipe González y pidió ser recibida por el expresidente del Gobierno. Aunque González ya no ejercía cargos institucionales en el PSOE, Aguirre sabía que estaba muy al tanto de lo que ocurría dentro y fuera del partido. Y sabía también que las consideraciones y las sugerencias de Felipe González eran importantes en el PSOE.

Tuvo respuesta rápida y Felipe González no solo la recibió poco después de pedirlo, sino que además de dar muestras de una gran cordialidad estuvo con Aguirre durante más de dos horas, intercambiando opiniones sobre la actualidad política y acerca de cómo veían el futuro tras la aparición de dos fuerzas aparentemente emergentes como Ciudadanos y Podemos. Aguirre le trasladó su preocupación por la posibilidad de que Manuela Carmena fuera alcaldesa de Madrid y le aseguró que su propuesta de facilitar la alcaldía a Antonio Miguel Carmona era firme, leal, sin dobleces, sin exigir nada a cambio. La tomaba porque estaba firmemente convencida de que era lo mejor para los madrileños, Carmena se presentaba como independiente, pero estaba a las órdenes de lo que indicara Podemos. Felipe González la escuchó con atención, pero desde el primer momento fue muy claro: acababa de participar en una de las reuniones del Comité Editorial de *El País* y habían acordado apoyar a Manuela Carmena como alcaldesa si el PSOE llevaba a buen puerto un acuerdo con Podemos. La suerte ya estaba echada.

Tartar de solomillo y otras delicias de La Moncloa

Los distintos presidentes han ido adaptando el palacio a sus circunstancias familiares y también a las necesidades del cargo. Los cambios han sido tantos que cualquiera que conociera La Moncloa de los tiempos de Suárez no la reconocería hoy. Sin embargo, una persona ha permanecido allí con todos los presidentes hasta finales de 2011, cuando llegó Mariano Rajoy. La jubilación impidió que Julio González de Buitrago, excelente cocinero, pudiera contar con todo detalle los gustos culinarios del último, hasta ahora, inquilino de La Moncloa, pero en su libro *La cocina de Moncloa* da buena cuenta de un número considerable de anécdotas sobre qué se come en allí y cuáles eran los platos favoritos y las manías de los presidentes y sus familias.

Felipe González fue el único presidente que se metió en los fogones. Bajaba de vez en cuando a preparar pescados que le enviaban desde Andalucía y, mientras vigilaba el horno, tomaba un vino con el cocinero y sus ayudantes y él mismo cortaba unas tapitas de jamón. No hay amigo de González, o periodista, que no conozca la maña del expresidente con los pescados; presume de prepararlos en su punto y al finalizar una de las campañas andaluzas invitó a todos los que habían participado, periodistas incluidos, a una multitudinaria cena en el jardín de su hermana, Lola, en Dos Hermanas, cena que preparó él mismo. También participaba personalmente en la preparación de los menús y aperitivos que ofrecía en La Bodeguilla.

Cuenta González de Buitrago que Sonsoles Espinosa era obsesiva con las dietas saludables y que tenía a sus dos hijas permanentemente a régimen. En cuanto desaparecía un par de días las dos niñas y el propio Zapatero pedían

inmediatamente que les prepararan los platos que Sonsoles había prohibido: fritos, natas y dulces. Zapatero se volvía loco por unos buenos espaguetis a la *puttanesca*, una salsa preparada con ajos laminados en aceite de oliva, guindillas y anchoas, a la que se añade tomate, alcaparras y albahaca fresca. A José María Aznar le entusiasmaba el picante y a Leopoldo Calvo-Sotelo un buen tartar de solomillo. Rajoy, el primer día que llegó a La Moncloa, pidió a Buitrago que le preparase una fritura de pescado. Carmen Romero estuvo más de dos años tomando lentejas a diario por prescripción médica. Y todos los presidentes y sus familias, sin excepción, preferían por encima de cualquier otra cosa los platos caseros españoles.

Se advierte en el libro que Ana Botella no era la «presidenta» favorita de González de Buitrago. Ya el primer día que llegó a La Moncloa pidió algo que sorprendió a las personas encargadas de la limpieza y la cocina: que formaran en la puerta, donde fue saludando a cada uno. Una imagen que recordaba a las series y películas británicas en las que el servicio espera en perfecto estado de revista al señor y a la señora de la mansión. También tomó una decisión que no fue muy bien acogida. Los cocineros de La Zarzuela y La Moncloa solían hablar por teléfono antes de que llegara una visita de Estado para cambiar impresiones sobre los menús, de manera que el de la cena del Palacio Real que ofrecían los reyes no coincidiera con el que se serviría al día siguiente durante el almuerzo oficial en La Moncloa. Ana Botella indicó a González de Buitrago que preparara el menú al margen de La Zarzuela, menú sobre el que daba opinión como el resto de las mujeres de los presidentes, que se ocupaban personalmente de que todo estuviera siempre perfecto. Sin embargo, a las diez de la mañana de un día en el que se celebraba un almuerzo oficial en La Moncloa, Botella llamó al cocinero: en la cena del día anterior en el Palacio de Oriente habían servido perdices, que era lo que estaba previsto servir en La Moncloa. González de Buitrago tuvo que preparar un nuevo menú y encargar la compra correspondiente.

Todos los presidentes, sin excepción, además de invitar a media docena de periodistas —que se van cambiando— a las cenas oficiales —una costumbre que iniciaron los reyes Juan Carlos y Sofía—, los han invitado a almorzar o cenar en La Moncloa para cambiar impresiones sobre los asuntos de actualidad, generalmente *off the record*. Es decir, pueden contar lo que allí se diga y tenerlo en cuenta para sus análisis, pero jamás deben revelar la fuente. Se ha cumplido ese compromiso a rajatabla, excepto en una sonada ocasión en la que una periodista publicó absolutamente todo lo que había dicho Felipe

González, con comillas incluidas, como si fuera una entrevista en exclusiva. Una deslealtad y falta de respeto al presidente y a sus compañeras que provocó la ruptura del grupo de «Los desayunos del Ritz», que tan bien trabajó durante los años de la Transición. Pero esa es una historia, desgraciada, que merece ser contada algún día en otro contexto para que caigan determinadas caretas.

Los periodistas que han acudido habitualmente a La Moncloa han tenido por tanto oportunidad de advertir los cambios en los asuntos del comer y los caprichos presidenciales. Los primeros almuerzos se celebraban en un comedor anexo al Salón de Columnas, que durante los primeros años de democracia acogía también las reuniones del Consejo de Ministros. No había almuerzo en el que alguien no pusiera en marcha un mecanismo curiosísimo por el que, en la barroca lámpara situada sobre la mesa, unos pajaritos giraban mientras se escuchaban una especie de trino. Ya con Zapatero y Rajoy esos almuerzos se celebraban en el edificio del Consejo, en algunas de las salas pequeñas de la planta baja. Y las cenas o almuerzos oficiales, en el Salón de Tapices, un espacio que llama la atención por sus dimensiones y por la riqueza de las telas que cubren sus paredes.

Cuando era presidente Felipe González, las mesas se adornaban con los bonsáis que cultivaba en un invernadero especial que tenía en La Moncloa. No se trataba de uno por mesa, sino de bosques de bonsáis distribuidos por el salón que provocaban la admiración de los ilustres invitados extranjeros, que con frecuencia regresaban a sus países con alguno regalado por Felipe González y que transportaban con cuidado en el avión que les había traído a España.

Cuando gobernaba Aznar siempre llamaba la atención a los periodistas invitados a los almuerzos en *petit comité*, no a los oficiales, que a la hora del postre, mientras los camareros servían tartas siempre exquisitas o macedonias de frutas más exquisitas todavía, al presidente le colocaban un bol en la mesa con helado de café. Siempre. Y no ofrecía a los demás. Daba por hecho que esa manía suya no tenía por qué ser compartida por los demás. Solo al leer el libro de González de Buitrago se ha sabido que Aznar toma —o tomaba— a diario helado de café de Häagen-Dazs a la hora del almuerzo y la cena, y no puede pasar sin él. Más de una vez han tenido que salir a buscarlo cuando se encontraba fuera de La Moncloa.

Ana Botella propuso en una cena oficial en Moncloa que antes del postre se sirviera torta extremeña del Casar. Fue tal el éxito con los invitados

extranjeros que se convirtió en parte habitual del menú a partir de entonces. Y también se han utilizado los menús con dignatarios extranjeros para fomentar productos españoles, no solo los vinos o cavas, sino también algunas especialidades de la huerta como los cardos. O platos como ajoblanco o gazpacho. Y, por supuesto, teniendo siempre en cuenta las prohibiciones religiosas o si el invitado de honor o sus acompañantes sufrían algún tipo de alergia. Cuando el presidente de Israel, Jaim Herzog, visitó La Moncloa, se estrenó vajilla: los judíos ortodoxos consideran impuros los platos o recipientes de cocina que han contenido alimentos no *kósher*.



No al rescate y sí a la banca

El 27 de diciembre de 2011 el recién nombrado ministro de Hacienda del primer gobierno de Rajoy llama al presidente para comunicarle que, nada más tomar posesión de su cargo, la Intervención del Ministerio le ha dado la cifra real del déficit. Rajoy sospechaba que sería más del que había reconocido Zapatero —el 6 por ciento— y le tantea: «¿El siete? ¿El ocho?». La respuesta de Cristóbal Montoro deja temblando al presidente, como minutos antes había dejado patidifuso al propio ministro: «Nueve». Eso significaba ni más menos que, además de un inmenso, y previsto, esfuerzo presupuestario —10.000 millones de euros por cada punto de déficit—, quedaban en el aire algunas de las más importantes promesas electorales del recién elegido presidente. El cual se vería obligado, de momento, a subir los impuestos cuando había asegurado que haría todo lo contrario. La bajada de impuestos no figuraba literalmente en el programa del PP, sino solo la bajada del IVA, pero los candidatos del partido habían prometido durante toda la campaña que sería algo más general. Un incumplimiento que arrastraría durante toda la legislatura. Y que fue utilizado de manera sistemática por todos los partidos de la oposición cada vez que necesitaban hacer una crítica a la gestión del gobierno de Rajoy.

Tras recibir la llamada de Montoro, Rajoy convocó a media docena de personas que podrían considerarse el anticipo de la comisión delegada de Asuntos Económicos. Esta aún no había iniciado sus reuniones, pues todavía no se había nombrado a la mayor parte de los secretarios de Estado. Formaban parte de ese primer sanedrín, además del presidente —que decidió dirigir semanalmente la comisión delegada—, Álvaro Nadal, secretario de Estado y director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, como

secretario ejecutivo; la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros Montoro y Guindos. Ni siquiera contaban con una sala específica para las reuniones, por lo que se sentaron en torno a una mesa en el antiguo comedor privado del palacio de La Moncloa. El mismo lugar en el que, durante los primeros años de la democracia, se celebraban los Consejos de Ministros.

Tras analizar la gravedad de la situación, se empezó a trabajar de inmediato en lo que sería el Decreto-Ley de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, del 30 de diciembre, y que entraría en vigor el 31. Es decir, de forma inmediata. Apenas habían pasado diez días desde la jura del presidente. Un equipo de seis expertos en cuestiones presupuestarias pasó la madrugada del jueves al viernes trabajando en la redacción de ese decreto para que fuera aprobado por el Consejo de Ministros al día siguiente. Decreto cuyo desarrollo, y la consiguiente modificación presupuestaria, obligó a semanas de trabajo intensivo que retrasaron la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

El incremento del déficit es lo que determinó ese retraso, aseguró siempre el equipo de Mariano Rajoy, aunque desde la oposición se acusó al Gobierno de dilatar sin necesidad los plazos. Según aquella, al recoger medidas de una dureza extrema, Rajoy trataba de no interferir en el resultado de las elecciones andaluzas. El PP esperaba ganarlas por mayoría absoluta y convertir a Javier Arenas en presidente del gobierno andaluz. Ganó el PP esas elecciones por primera vez en la historia, pero no con la mayoría deseada y Arenas no fue presidente. Quizá caló la idea en los votantes andaluces de que en cierto modo Mariano Rajoy había hecho trampa, como decía la oposición, al no anunciar las duras medidas que estaba preparando, y todo con el objetivo de conseguir un mejor resultado electoral.

La situación económica era crítica, y en las semanas iniciales del gobierno de Rajoy se sucedían las reuniones del equipo económico. Mientras, desde Bruselas, y sobre todo desde importantes despachos empresariales, financieros y bancarios, así como por parte de miembros destacados de la oposición e influyentes comentaristas de diferentes medios de comunicación, se exigía al Gobierno que aceptara de una vez el rescate como única salida posible. Sin embargo, Rajoy estaba empeñado personalmente, con convicciones firmes e inamovibles, en trabajar para evitarlo. El presidente pensaba que cualquier imposición de las autoridades comunitarias y del FMI

sería más dolorosa para los españoles que las medidas que pudiera aprobar un Consejo de Ministros que conocía mejor la realidad española y las dificultades de sus ciudadanos. Mucho mejor, en todo caso, que cualquier equipo de expertos «hombres de negro» enviados desde Bruselas y Washington.

Seguía Rajoy muy de cerca lo que sucedía con el Portugal rescatado, donde la ciudadanía se veía obligada a sacrificios insoportables para presentar los deberes hechos. El país vecino sufría las exigencias de unos organismos internacionales que, de hecho, les gobernaba a pesar de no haber sido elegidos.

El primer reto que tuvo que superar el presidente español fue una reunión con Angela Merkel en Berlín, durante el mes de enero. Rajoy le dijo a la canciller que la lucha contra el déficit y el desempleo iba en serio y que España necesitaba cierta flexibilidad por parte de las autoridades comunitarias, porque la situación que se había encontrado al asumir la presidencia era mucho peor de la esperada. En esa reunión Merkel se refirió al futuro del prestigioso economista José Manuel González Páramo, miembro del Banco Central Europeo, y de quien el Gobierno pretendía que fuera renovado en el cargo. También había quien defendía su candidatura como gobernador del Banco de España, en sustitución de un Miguel Ángel Fernández Ordóñez que provocaba polémicas importantes antes incluso de que el PP ganara las elecciones, y cuya gestión era cuestionada incluso por miembros destacados del equipo de inspectores de la institución. Merkel le dio a entender que no apoyaría a González Páramo —que efectivamente salió del BCE—, pero en cambio estudió con interés el esquema de reforma laboral que le mostró Rajoy y que Fátima Báñez tenía esbozado desde antes de llegar al Gobierno.

Días después, con esa reforma más elaborada, la ministra de Empleo la presentó al sanedrín económico, y un Guindos que por lo general no se muestra en exceso entusiasta con los proyectos ajenos, dijo abiertamente que ese documento había que llevarlo a Europa, donde recibiría sin duda el apoyo generalizado porque diseñaba un escenario realista en una España que no había tomado medidas serias ante la crisis. También apuntó que recogía propuestas eficaces para crear empleo. En cierta medida se trataba de una propuesta con la que callar a quienes defendían que España no tenía más salida que aceptar el rescate.

Las dificultades crecían a diario, porque además en Bruselas habían «comprado» lo que difundía el equipo de la exvicepresidenta económica Elena Salgado durante los últimos meses de su mandato, cuando sabía que el PP ganaría las elecciones y quizás con mayoría absoluta: el PP presentaba un programa demagógico de imposible cumplimiento, con propuestas irreales que tenían como objetivo captar el voto. Por otra parte también importantes funcionarios de Bruselas creían que el gobierno de Rajoy daba prioridad al calendario electoral andaluz y retenía medidas que España necesitaba poner en marcha de forma inmediata para salvar la crisis económica.

Como ocurría en ciertos sectores españoles, y ha sucedido a lo largo de los años, en determinados círculos de la Unión Europea pensaban que los tempos de Rajoy no eran los mismos que los del resto de los mortales. Una idea que se ha impuesto a pesar de que con el transcurso de los años el presidente español siempre ha tenido muy claro en qué momento concreto debía tomar determinadas decisiones sin dejarse influir por cuestiones externas. Dicen las personas que trabajan con él que madura mucho los temas y les da vueltas antes de decidir. Solo entonces actúa, sin admitir ningún tipo de presión. Convencido de que a España no le convenía solicitar el rescate bajo ninguna circunstancia, y defendiendo esa posición contra viento y marea a pesar de las voces críticas que le llegaban desde muy distintos sectores, algunos de ellos muy influyentes, llegó muy pronto a la conclusión de que había que tomar medidas expeditivas con los bancos. Es lo que esos sectores influyentes que no se conformaron con que Rajoy se negara al rescate llamaron «rescate bancario», para sentirse así cargados de razón.

La situación era insostenible, con los bancos en una situación caótica porque sus activos inmobiliarios, absolutamente sobrevalorados, obligaban a una inyección económica considerable para que pudieran cumplir sus compromisos con los depositantes y clientes. El Banco de España se resistía a esa operación y el Gobierno decidió entonces hacer un análisis exhaustivo, profundo, de la situación bancaria y cuantificar exactamente el coste de un posible rescate. Como Rajoy le explicó a Merkel, se había hecho un *striptease* a la banca española.

La palabra maldita ya entonces era Bankia, entidad sobre la que se manejaba una información no preocupante, sino angustiosa, por las pérdidas no reconocidas que acumulaba. El propio Obama, en una reunión en la que coincidió con Rajoy, llegó a preguntarle por Bankia. Era un asunto que trascendía el escenario exclusivamente español por la envergadura del propio

banco, la antigua Caja Madrid. Antes de las elecciones Rajoy había mantenido en Marsella un encuentro con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el cual había expresado su interés en cambiar impresiones con quien, con toda seguridad, iba a ser el próximo presidente español. Rajoy le preguntó qué se opinaba en su país sobre la situación de España y el americano le respondió con sinceridad que preocupaba el futuro económico. Le sugirió que, una vez elegido, lo abordara con serenidad, con mucha transparencia y tomando las decisiones que consideraba precisas.

Ya en el gobierno, a Rajoy le preocupó especialmente todo lo relacionado con Bankia, sobre la que tanto se ha escrito y, también, especulado. La intervención del Gobierno no se hizo de forma precipitada, sino después de multitud de consultas y revisión de informes. Rajoy era consciente de que tanto Bankia como su presidente, Rodrigo Rato, eran algo más que un banco y su presidente: se trataba de dos símbolos, dos iconos, para los españoles. Era consciente también del coste que esa operación iba a tener para el Gobierno y para el PP. Cuando se ordenó la intervención se contaba ya con el apoyo previo de la Unión Europea, a la que se había informado de la situación y de que además de la recapitalización se promovería el nombramiento de un nuevo equipo directivo.

La decisión para Rajoy fue «durísima», tanto desde el punto de vista político como personal: la relación con Rodrigo Rato había sido muy estrecha durante décadas y juntos habían formado parte del gobierno de Aznar. Muchas de sus decisiones en aquel entonces habían sido muy cuestionadas y necesitaron de una unidad en el PP que Rajoy y Rato habían compartido. Por otra parte Rato había llegado a la presidencia de Caja Madrid gracias a Mariano Rajoy, que defendió su candidatura una vez que aquel le había pedido el puesto cuando el PP gobernaba en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, instituciones decisorias a la hora de proceder al relevo del anterior presidente, Miguel Blesa.

Independientemente de lo ocurrido con Bankia, las grandes entidades seguían presionando a favor del rescate, y criticaban de forma abierta al Gobierno por su resistencia al respecto. Sin embargo, el ejecutivo no quería, por razones financieras, cuantitativas —haría falta una cantidad desorbitada que probablemente la UE, el BCE y el FMI no podrían asumir— y políticas. La posición del gobierno de Rajoy, tan cuestionada en ciertos sectores de poder español, encontraba cierta comprensión en otros ámbitos de poder de distintos países europeos.

Fue muy bien recibido el comentario que hizo a un alto cargo del Gobierno el viceministro de Economía de Mario Monti, jefe del Gobierno «sugerido» por Bruselas ante la crisis institucional que vivía Italia. Ese viceministro, Vittorio Grilli, había hecho la reflexión de que lo que diferenciaba a un gobierno político de un gobierno tecnocrático era que el primero tenía detrás un partido con militantes y cargos electos que apoyarían de forma incuestionable sus decisiones. Sin partido, decía, no se pueden tomar decisiones económicas de calado. Quizá intuía Grilli lo que ocurriría en las siguientes elecciones, cuando Monti formó un partido de prisa y corriendo y obtuvo un resultado tan precario que no solo perdió el gobierno, sino que desapareció de la vida pública.

En aquel ambiente tan polémico respecto al rescate, el presidente reúne a su sanedrín y pide opinión a todos, uno a uno, tanto sobre el rescate como sobre la ayuda financiera a la banca. Y todos coinciden en el «no» al rescate general y el «sí» al de la banca. Entre otras razones porque si los bancos no tienen dinero para prestar a los ciudadanos en momentos de crisis tan grave, la situación se vuelve insostenible. La filosofía se resumía en dos líneas: si la banca quiebra, quienes asumen el mayor castigo son los depositantes que no pueden recuperar la totalidad de su dinero. Por otra parte prevaleció también el criterio de que si la banca no tenía dinero para prestar, se le prestaría dinero para que pudiera atender las demandas de quienes necesitaban crédito para superar la situación de precariedad a la que les había llevado la crisis económica. Dinero que la banca estaba obligada a devolver, evidentemente.

Al final se pidió la ayuda financiera, pero una cantidad muy inferior, 40.000 millones, a la que el MEDE —Mecanismo Europeo de Estabilidad— estaba dispuesto a dar (que era de 100.000 millones). A cambio del rescate financiero la UE, el BCE y el FMI obligaban a España a un ejercicio profundo de transparencia que fue asumido por el Gobierno y por toda la comunidad bancaria. Y, por supuesto, impusieron medidas de ajuste y compromisos de déficit que el Gobierno se comprometió a asumir.

Hasta bien avanzada la legislatura en Bruselas se tenía la certeza de que Rajoy acabaría pidiendo el rescate, y además en las reuniones informales y charlas de pasillo se manejaban datos supuestamente confirmados respecto a las intenciones del presidente español. En una reunión del Partido Popular Europeo, de las que se celebran habitualmente la noche anterior a las cumbres, Merkel le dijo a Rajoy que le habían contado que al día siguiente de las elecciones de Galicia —octubre de 2012— iba a pedir el rescate, a lo que

respondió Rajoy: «Me alegra mucho que lo sepa, porque yo desde luego no tenía ni idea».



Los papeles por el suelo

*E*l primer cara a cara que se celebró en España, en 1993, enfrentó a Felipe González, presidente del Gobierno, con José María Aznar. El PP no se fiaba de la televisión pública, que consideraba en manos de personas afines al PSOE, y se llegó al acuerdo de celebrar dos debates. El primero en Antena 3 moderado por Manuel Campo Vidal y el segundo una semana más tarde en Telecinco moderado por Luis Mariñas. Las reuniones entre los dos equipos fueron exhaustivas; midieron tanto los detalles que los candidatos no tuvieron ninguna oportunidad de expresarse con libertad, absolutamente encorsetados no ya por las cuestiones de forma, sino también por las de fondo. Solo se podían debatir los asuntos acordados por sus respectivos equipos. Contra todo pronóstico, Felipe González no salió bien parado, Aznar le vapuleó bien, estuvo más enérgico, más contundente, más rápido en la réplica y en varios momentos colocó al presidente en situación difícil. Tan es así que finalizada la contienda el propio Felipe González hizo un comentario a su gente en el que reconocía que no le había salido bien.

Esa gente, su gente, su equipo, explicaba que González había regresado de un mitin en Canarias la noche anterior. Tuvieron un vuelo complicado, muy movido, que les hizo pasar miedo, hasta el punto de que pensaron que tendrían que hacer un aterrizaje forzoso. Al llegar a La Moncloa Felipe González tomó un tranquilizante que le dio uno de sus colaboradores, supuestamente por indicación del médico de Presidencia. Ese tranquilizante le permitió descansar y dormir después del susto, pero a la hora del debate sufrió las consecuencias de la medicación y no se encontraba con la mente en condiciones de absoluta lucidez para responder a las diatribas de Aznar o presentarle los argumentos con los que desmontar sus acusaciones. ¿Efectivamente perdió el debate por

tomar esa pastilla? Nadie lo confirma ni lo niega, pero en aquellas fechas fue la versión que se dio desde determinados despachos de Ferraz.

Manuel Campo Vidal es el periodista que ha moderado mayor número de debates entre los candidatos a la presidencia del Gobierno. Fue quien propuso que los organizara la Academia de Televisión, que presidía, la cual proporcionaría la señal a las cadenas interesadas en retransmitir los cara a cara electorales. Los profesionales que participaron eran gente de incuestionable trayectoria, la mayoría de ellos ya retirados y cuyos nombres forman parte de la historia de la televisión española, pública y privada. Personas que trabajaron para infinidad de directores de diferentes ideologías y, en el caso de las públicas, designados por distintos gobiernos. Nadie podrá acusar a estos profesionales de inclinaciones políticas determinadas que pudieran hacer pensar que favorecían a un candidato frente a otro.

En el debate entre Rajoy y Rodríguez Zapatero, en 2008, todo se había preparado hasta el mínimo detalle. Las encuestas coincidían en que se encontraban muy igualados y las que manejaba el PP eran más optimistas respecto a las perspectivas de Rajoy, que se había convencido de que la victoria era posible. Campo Vidal había dado instrucciones al realizador y los cámaras para que trabajaran cuidando los detalles, que ninguno de los contendientes o sus equipos pudieran pensar que el otro había recibido trato de favor. Todo estaba medido para que no se produjera el menor fallo. Había buen ambiente y Manuel Campo había advertido al realizador, Fernando Navarrete, que su intención era intervenir lo menos posible para dejar más tiempo y más libertad a los candidatos. Llegó Rajoy con un buen número de carpetas. Una para cada uno de los temas a debatir que previamente habían acordado los dos equipos y que, además de decidir qué cuestiones podían ser tratadas y cuáles no, habían dedicado mucho tiempo a pensar en el decorado, sillas, atril, revisión de micros y de luces... Todo para que nadie tuviera ventaja.

A medida que transcurría el debate y se iban dejando atrás los asuntos ya debatidos, Rajoy tiraba al suelo las carpetas y los papeles que había utilizado para no equivocarse, pero llegó un momento en que el suelo, por su lado, era una desordenada alfombra de hojas que habían caído de cualquier manera y ofrecían un aspecto de desorden que podía perjudicar a Rajoy. Navarrete, siguiendo las instrucciones de Campo Vidal de no aprovechar ninguna ocasión de lucimiento que pudiera favorecer o perjudicar a uno de los contendientes,

decidió anular la cámara cenital para que no se viera en qué situación se encontraba la zona de Rajoy.



Cherchez la femme

*E*stá aceptado universalmente que la mayoría de los grandes escándalos los provocan colaboradores a los que no se ha tratado con suficiente tacto o andan necesitados de dinero. También son protagonistas esposas y esposos desechados que quieren venganza. *Cherchez la femme* —que en buena ley debería ir aparejado al *cherchez l'homme*— suele ser un elemento al que se da prioridad a la hora de investigar el origen de una noticia que provoca una conmoción. Ese escenario se ha dado con frecuencia en política.

El caso Juan Guerra, en 1990 —que provocó una crisis profunda en el PSOE y afectó directamente a la relación entre Felipe González y Alfonso Guerra, casi rompiendo en dos el partido—, se inició cuando la mujer del hermano del entonces vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general del PSOE acudió a un periodista para contarle que su marido trabajaba como asistente del todopoderoso —entonces— Alfonso Guerra. También le dijo que tenía un despacho en la sede de la Delegación del Gobierno en Sevilla y que cobraba comisiones por facilitar determinadas gestiones a quienes acudían a él porque conocían su facilidad de abrir puertas, aligerar trámites burocráticos o concertar encuentros con dirigentes de la Junta de Andalucía.

También es notable el caso Filesa, Malesa y Time Export, que causó tantos quebraderos a Felipe González porque apuntaba directamente a la financiación ilegal del PSOE. Este caso saltó a los medios de comunicación cuando el contable de esas sociedades, Carlos van Schouwen, apartado de sus funciones, denunció al administrador Luis Oliveró. Las investigaciones fueron letales para el PSOE, con sus vergüenzas financieras al aire, y obligaron a tomar decisiones que afectaban a algunos de los colaboradores más directos de González y Guerra, para demostrar así que se tomaban en serio la lucha contra

la corrupción. Años más tarde los casos Juan Guerra o Filesa serían considerados juegos de niños comparados con otros de mucha mayor enjundia como los ERE, Gürtel, los cursos de formación, Bárcenas o Pujol.

La *femme* del caso Pujol tenía nombre y apellido, Victoria Álvarez, y fue durante varios años novia y amante de Jordi Pujol Ferrusola. Una vez rota la relación con el hijo del muy influyente expresidente de la Generalitat, protagonizó una peripecia rocambolesca propia de una película de serie B si no fuera porque provocó la caída y el deshonor de quien fue protagonista de la vida política y social de Cataluña y de España durante más de treinta años, Jordi Pujol. Una Cataluña en la que la burguesía mantiene estrechos lazos entre sí a pesar de las diferencias ideológicas que se dan en distintas familias. La situación fue tal que el jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas —amigo de Victoria Álvarez—, sugirió a la entonces presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, que acudiese a almorzar con «Vicky», pues le iba a facilitar importante información sobre la familia Pujol. Familia que desde años atrás se encontraba en el punto de mira de quienes investigaban la corrupción en Cataluña.

Era *vox populi* que la mujer y los hijos del presidente se estaban haciendo de oro facilitando contratos con la Generalitat a distintas empresas o a ellos mismos. Marta Ferrusola, dueña de una empresa de flores y plantas, tenía adjudicado el suministro a la Generalitat y a sus distintas instituciones, y varios de los hijos vivían a base de pedir comisiones como conseguidores. Todo ello con la impunidad que significa que nadie va a denunciar la situación por miedo a las consecuencias de enfrentarse a la Generalitat y a dos partidos, Convergència Democràtica de Catalunya y Unió Democràtica de Catalunya, que bajo las siglas CiU hacían y deshacían en Cataluña todo y a todos los niveles. Y sin que los medios de comunicación osaran investigar a la familia Pujol y a su círculo de amigos a pesar de que circulaban en la calle historias que, como mínimo, merecían ser analizadas con detalle.

Y esto aunque no fuera más porque la rumorología se convirtió en datos — que se manejaban con toda naturalidad, dándolos por ciertos—, hasta el punto de que a nadie sorprendió que, en sede parlamentaria, en el año 2005, el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, acusara a Artur Mas de que su partido tenía «un problema que se llama 3 por ciento». El debate, muy tenso, era en torno al nuevo estatuto que defendía Maragall y cuya aprobación dependía del apoyo de CiU. Un Mas enfurecido por la acusación del presidente del gobierno regional se levantó para decir que «Maragall ha

mandado esta legislatura a hacer puñetas», lo que provocó la rectificación del aludido, que no sostuvo su acusación. Pero a pesar de esa enmienda, que buscaba el necesario respaldo de CiU a la reforma del estatuto, el mal ya estaba hecho. Las palabras de Maragall ratificaron que lo que sospechaba la mayoría de los catalanes: que eran habituales las actividades *non sanctas* de miembros de la dirección de CiU y de altos cargos de la Generalitat, sobre todo de la familia Pujol. Un clamoroso silencio ha cubierto siempre esas actividades a pesar de que en Cataluña ha habido excelentes periodistas de investigación que han destapado casos de corrupción... siempre que no estuvieran vinculados a los Pujol.

Todo eso se vino abajo tras el almuerzo entre Victoria Álvarez y Alicia Sánchez Camacho preparado por Jorge Moragas. Un rocambolesco almuerzo que, además de servir para que Álvarez facilitara la prometida información sobre las idas y venidas de Jordi Pujol Ferrusola a Andorra —con bolsas de dinero contante y sonante—, derivó en un escándalo más cuando trascendió que la conversación entre las dos mujeres había sido grabada por una agencia de detectives. Agencia que a su vez apareció implicada en turbias historias que afectaban a personas muy conocidas de la vida social catalana, con ramificaciones en despachos importantes de la Generalitat e incluso del Barça. Estas ramificaciones también fueron sometidas a investigación y destaparon nuevos e importantes casos de corrupción. Aunque el mayor logro fue que, al fin, se conociera el alcance de las operaciones financieras de la familia Pujol gracias a la «ayuda inestimable» de Vicky Álvarez.

La UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), dedicada a investigar los delitos financieros, puso manos a la obra. Que los Pujol tenían problemas porque los focos judiciales estaban puestos sobre ellos pronto fue el asunto que comentaba toda Barcelona —e incluso lo que no era Barcelona—, pero el expresidente de la Generalitat negaba todo. Ante las insinuaciones que empezaban a escucharse mostraba una soberbia impropia en cualquier persona —más todavía cuando se trata de una con responsabilidades públicas—, pero él se creía impune. Buena muestra de esa soberbia, que rozaba la mala educación y también la mendacidad, la vivió la periodista Susanna Griso. En octubre de 2015, durante una entrevista al expresidente en el programa *Espejo Público* de Antena 3, cuando le preguntó por las investigaciones que estaba realizando la UDEF, le respondió un irritadísimo Jordi Pujol: «¿Qué coño es eso de la UDEF?» Al mismo tiempo desmentía cualquier tipo de irregularidad en sus finanzas.

Esa UDEF, sin embargo, sabía cómo realizar su trabajo, y apenas seis meses más tarde del exabrupto los españoles en general y los catalanes en particular se quedaron anonadados cuando Jordi Pujol hizo público un comunicado en el que confesaba que desde hacía treinta y cuatro años tenía una cuenta corriente en el extranjero que no había declarado porque, durante todo ese tiempo, no había encontrado el momento adecuado para hacerlo y pedía perdón por su actitud. Afirmaba que se trataba de una herencia de su padre, Florenci Pujol. Cuando la hermana del expresidente afirmó que desconocía que su padre hubiera dejado una herencia y su marido narró las dificultades económicas que habían sufrido él y su mujer —sin recibir la menor ayuda de su cuñado, el presidente—, desde el entorno de Pujol se cambió de inmediato el término «herencia» por «legado», tal como aconsejaban su abogados.

Al día siguiente del comunicado el presidente de la Generalitat, Artur Mas, mantenía un encuentro con Pujol que tuvo como consecuencia inmediata el anuncio de que este renunciaba a su estatus de expresidente, a su despacho, sueldo y personal auxiliar, y a su cargo de presidente fundador de CDC y CiU. Poco después el *conseller* de Presidencia de la Generalitat, Francesc Homs, anunciaba también que Pujol perdía su título de «Molt Honorable» y la Medalla de Oro de la Generalitat. Fueron las primeras pérdidas de una serie de honores —medallas, títulos, calles, estatuas— de los que Pujol fue despojado durante las semanas siguientes. La cantidad de dinero depositada en bancos de Andorra, Suiza y Luxemburgo nunca fue concretada —se partía de 4 millones de euros—, pero según algunas fuentes podía superar los 500 millones. Victoria Álvarez hablaba con naturalidad de bolsas llenas de dinero que Jordi Pujol Ferrusola llevaba en su coche durante los viajes frecuentes que la pareja hacía a Andorra y se refería también a varios negocios en países latinoamericanos.

Los Pujol intentaron presentarse como víctimas de una operación «española» que pretendía escarmentar a quienes habían iniciado la senda del independentismo. Esa estrategia ni siquiera fue bien aceptada por los independentistas más acérrimos, que precisamente para salvar la creciente ola independentista marcaron distancias con el expresidente y sus hijos a medida que aparecían noticias más y más escandalosas. Pujol, Marta Ferrusola y sus hijos mantuvieron una actitud de desprecio hacia las acusaciones, lo que provocó un rechazo generalizado incluso en sus propias filas, las de Convergència. Los Pujol, además de abundar en el victimismo, trataban a los

críticos con un profundo desprecio. En una comparecencia ante el Parlament de Catalunya, el expresidente lanzó una soflama generalizada contra los parlamentarios por el hecho de haberle convocado para responder a sus preguntas. De nuevo la soberbia.

¿Ha estado relacionada la investigación sobre la familia Pujol con el desafío independentista que se inició cuando Artur Mas consiguió ser elegido finalmente presidente de la Generalitat, en diciembre de 2010, la tercera vez que ganaba las elecciones? Puede ser. Mas llegó al gobierno cargado de rencor contra Zapatero y el PSOE, lo que puede traducirse por rencor contra España y su Gobierno. Había ganado las elecciones anteriores, pero la formación de un gobierno tripartito le arrebató las dos primeras oportunidades con un agravio añadido: había acordado con Zapatero, en sus negociaciones sobre el estatuto, que si ganaba las elecciones por segunda vez no se repetiría el tripartito. Se repitió, así que tuvo que ganar por tercera vez para alcanzar la presidencia de la Generalitat. Inició entonces una trayectoria independentista que un amplio sector de la sociedad catalana no creía posible que capitaneara un Artur Mas que, antes de esa presidencia, se declaraba un nacionalista a ultranza que lucharía por mayores cuotas de soberanismo, pero que no abrazaba los postulados independentistas, como decía a quien le quería oír. Sin embargo, esa mecha que encendió personalmente y que sabía triunfadora —pues es la que pretendía encender Esquerra Republicana de Catalunya, un partido creciente— prendió con velocidad de vértigo, y pronto se convirtió en el principal problema con el que tuvieron que lidiar los hasta entonces partidos de gobierno españoles, PP y PSOE. Aunque en buena ley hay que reconocer que, además de la promesa incumplida de Zapatero, Aznar «ayudó» a potenciar el independentismo al mantener una postura tan intransigente respecto a ERC cuando era presidente, cuando un mínimo diálogo podría haber suavizado la posición de Esquerra. Como «ayudó», también, la escasa visión política de Zapatero cuando avaló la reforma del estatuto catalán en el peor momento y abrió excesivamente la mano al aceptar artículos que rompían el *statu quo* y que posteriormente fueron rechazados por el Tribunal Constitucional. Ese rechazo dio alas a una confrontación contra «España» que quizá otros presidentes con más visión de la jugada y una estrategia política más acertada pudieran haber evitado.

En aquellos meses iniciales en los que Artur Mas tomó decisiones que sorprendieron incluso a la gran mayoría de los militantes y votantes de su partido, CDC, y que desde su socio Unió se vivieron con cierto rechazo

público y grandes dosis de cobardía —pues Durán i Lleida pudo haber sido más firme en la defensa de la Constitución y, sin embargo, mantuvo una ambigüedad durante años que acabó pasándole factura: sus sucesivos fracasos electorales le han expulsado de la política y Uniò ha desaparecido—, Jordi Pujol no abrazó el independentismo hasta bien avanzado el proyecto que capitaneaba Artur Mas con la ayuda inestimable de ERC.

Pujol, de vez en cuando, se reunía en Madrid con periodistas a los que invitaba a almorzar en un reservado de Edelweiss —un restaurante alemán situado detrás del Congreso de los Diputados, con buena relación calidad-precio—. Se trataba de media docena de cronistas políticos a los que conocía desde los tiempos de la Transición. Algunos de ellos incluso le habían tratado de tú muchos años antes, cuando fue diputado de la legislatura constituyente. Eran años en los que solo a dos políticos se les trataba en privado de «usted» —en público, a todos—: Manuel Fraga y Enrique Tierno Galván, «Don Manuel» y «Profesor». Pujol aparecía en esos almuerzos con sus últimos libros o con fotocopias de artículos y conferencias que distribuía entre los periodistas comensales. Las reuniones siempre daban para mucho juego —pues era un hombre que conocía como pocos las profundidades de la política de Estado, pero sobre todo las profundidades de la vida política y social de Cataluña— y ninguno de los periodistas contactados rechazaba la invitación. Pocas citas se consideraban más importantes: cambiar impresiones con Pujol era un privilegio y siempre ofrecía un análisis interesante, e importante, de la situación.

Fue destacable la reunión celebrada cuando el proceso independentista estaba en marcha —aunque todavía no se habían convocado las manifestaciones de la Diada que se convirtieron a partir de 2014 en las grandes celebraciones del independentismo—. Pujol apareció impuntual, como casi siempre —impuntual porque, como ocurría con Fraga, se presentaba antes de tiempo—, y no tardó en expresar su satisfacción cuando finalmente tuvo a los seis o siete periodistas sentados en torno a la mesa. Satisfacción, contaba, porque durante el escaso tiempo que había estado en la calle, en Madrid, fueron varios los viandantes que le reconocieron y se acercaron a saludarle para expresarle su agradecimiento porque, cuando era presidente de la Generalitat, había actuado con sentido de Estado y parado los pies al independentismo. Y lo decía, hay que insistir en ello, con satisfacción.

Sin embargo, la vida, política y no política, da muchas vueltas. Sin ir más lejos, Victoria Álvarez, la enamorada pareja de Jordi Pujol Ferrusola, se

convirtió en la principal baza para ponerle contra las cuerdas. A *Junior* — como se le conoce— y al resto de su familia.



... Y Rajoy salió a pelear

*E*l equipo negociador (Fátima Báñez, Fernando Maíllo, Rafael Hernando, José María Bermúdez de Castro y Álvaro Nadal), entre otros que se sumaron para debatir cuestiones concretas, pidió a Mariano Rajoy que les diera instrucciones sobre lo que podían aceptar o no en las negociaciones que iniciarían en pocas horas con el equipo de Ciudadanos. Se lo pidieron uno a uno, a medida que el presidente en funciones les fue llamando para decirles que contaba con ellos como parte del grupo negociador. Y a todos respondió lo mismo: «Conseguid un acuerdo». Sin más. Daba por hecho que conocían sobradamente lo que él defendía, lo que el PP consideraba inamovible porque formaba parte de sus señas de identidad y lo que él mismo y el partido podían aceptar a cambio de seguir gobernando. Un gobierno que ya proponía importantes cambios en su programa electoral, como sabían todos; por tanto, algunas de las exigencias de Ciudadanos serían aceptadas con facilidad, aunque otras les indignaban especialmente porque presentaban al PP como un partido que amparaba la corrupción. Sin embargo, Rajoy no marcó líneas rojas, por utilizar la terminología que en los últimos meses se había puesto de moda en el escenario político. Confiaba en el criterio de aquellos a los que había elegido para negociar, y de ahí que su única indicación fuera «conseguir un acuerdo».

Mariano Rajoy acumulaba frentes abiertos. Conocía perfectamente las aguas en las que se movía desde las elecciones de diciembre de 2015 y sabía de dónde le iban a llegar las acusaciones más hirientes. La principal, que su partido había amparado la corrupción, que él mismo era corrupto por haber aceptado dinero en negro de Bárcenas y que el PP era el único partido imputado por corrupción. De nada servía que desde su entorno se recordara

que si el PP era el principal partido corrupto era porque el gobierno de Rajoy había aprobado una reforma del Código Penal que permitía atribuir responsabilidades a partidos y sindicatos. Tampoco servía que no se hubiera podido demostrar que Bárcenas pagara en negro a dirigentes del PP cuando era tesorero del partido, ni que durante el gobierno de Rajoy se hubieran aprobado medidas anticorrupción de enorme calado que, entre otras cosas, habían llevado a prisión a algunos de los más destacados miembros del PP, varios de ellos amigos personales del presidente. El sambenito de la corrupción, sin embargo, le perseguía más que cualquier otra cosa. Y eso a pesar de que en tiempos del más relevante presidente socialista, Felipe González, los casos de corrupción habían sido graves, de escándalo, y si el PSOE salvó los muebles cuando se demostró la trama Filesa de financiación del partido a través del cobro de comisiones fue porque en aquellos años no existían leyes que regularizaran la financiación de los partidos. Por tanto, solo fueron condenados aquellos que cobraron comisiones ilegalmente, no el partido.

Tras las elecciones de diciembre de 2015, las que marcarían —y se sabía de antemano— el fin del bipartidismo que había gobernado España durante cuarenta años, tanto PP como PSOE rebajaron sensiblemente su representación parlamentaria con la aparición de Ciudadanos y Podemos. Pero más que un problema de números, Rajoy se encontró con un problema de interlocutor en el PSOE: Pedro Sánchez se negó a aceptar cualquier fórmula de gobierno que pasara por mantener a Rajoy en La Moncloa. Tras las fiestas navideñas Rajoy intentó de nuevo iniciar algún diálogo con Sánchez, sin éxito. Además los medios de comunicación le informaba sobre el veto que Albert Rivera ponía a su persona y las declaraciones en las que insistía en que Ciudadanos jamás apoyaría un gobierno de Rajoy.

El 22 de enero de 2016 se produjo un acontecimiento, provocado por Rajoy, impensable en la corta historia de democracia española. Al finalizar la ronda negociadora del rey Felipe VI con los portavoces de los grupos parlamentarios —que cerraba Rajoy como presidente del grupo mayoritario, el que había ganado las elecciones—, el gallego le dijo al rey que no estaba en condiciones de aceptar el ofrecimiento de ser candidato a la presidencia. Una situación inaudita que no se había dado con anterioridad, y que fue utilizada durante muchos meses por los partidos de la oposición para mostrar a un Rajoy que había dado muestras de escasa altura de miras al rechazar la oferta. Se dijo incluso que la negativa provocó algún roce entre el presidente en

funciones y el jefe del Estado. Cuando se conoció la noticia de que Rajoy había rechazado el ofrecimiento del rey, saltaron los rumores sobre el malestar de Felipe VI por lo que consideraba una falta de responsabilidad de Rajoy al no asumir el compromiso, casi obligatorio para quien ha ganado las elecciones. Aunque nadie confirmó ese malestar, tampoco se desmintió que el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, hubiera trasladado al presidente en funciones la incomodidad que producía su decisión y que dejaba en una posición equívoca al jefe del Estado. Noticia que se publicó —el cruce de palabras entre Alfonsín y Rajoy— sin que fuese confirmada ni desmentida, lo que dio síntomas de veracidad a quienes la transmitían.

Curiosamente Jaime Alfonsín, gallego, era amigo personal de Mariano Rajoy desde años antes de que el primero dejara su trabajo en el prestigioso bufete Uría y Menéndez para ocuparse de la Secretaría del príncipe Felipe, cargo que le llevaría a ser jefe de la Casa del Rey tras la abdicación de don Juan Carlos I. Sin embargo, a pesar de esa amistad, era un secreto a voces que entre el presidente del Gobierno y el jefe de la Casa del Rey existían diferencias de criterio sobre asuntos importantes relacionados con la labor del rey Felipe. Diferencias que probablemente alcanzaron su punto culminante cuando Rajoy declinó la investidura.

Días después el rey inició una segunda ronda y ofreció la candidatura a Pedro Sánchez, que se puso a la tarea de conseguir apoyos al mismo tiempo que acusaba a Rajoy de irresponsable y de falta de respeto institucional por rechazar la oferta del rey. Sin embargo, mientras la acusación de falta de respeto calaba en cierto sector de la sociedad e incluso se refería a ella algún miembro destacado del PP, políticos de larga experiencia, entre ellos algún socialista, consideraban que Rajoy había tomado una inteligente decisión política. Con su rechazo provocaba que Sánchez fuera candidato sin que pudiera salvar la investidura, ya que Ciudadanos jamás votaría con Podemos, ni Sánchez podría nunca contar con los votos de los partidos independentistas catalanes: el Comité Federal de su partido, además de negar la posibilidad de apoyar la investidura de Rajoy, también le negaba la posibilidad de ser investido presidente con los votos independentistas. Una situación insostenible que aparentemente solo Pedro Sánchez fue incapaz de ver y, hasta el último minuto, tras conseguir un acuerdo de gobierno con Ciudadanos, creyó que contaría con un apoyo de Podemos... que nunca llegó.

Antes de la negativa final, Pablo Iglesias provocó alguna situación humillante para Pedro Sánchez con sus exigencias. Entre ellas, apariciones

públicas ante los fotógrafos previamente avisados para escenificar una supuesta sintonía política que no era tal, como Sánchez comprendió demasiado tarde. En el debate de investidura reapareció Rajoy, que se había mantenido en silencio absoluto mientras Sánchez intentaba buscar apoyos y negociaba con Albert Rivera un pacto de gobierno. El Rajoy de ese debate dejó boquiabierto a la mayoría de los diputados: inició su intervención con un tono absolutamente alejado de lo que era su habitual línea parlamentaria, muy institucional, para meterse de lleno en la demolición del programa presentado por Sánchez con un tono irónico, ácido, sarcástico, demoledor. Provocó risas e indignación por igual. Los socialistas y parlamentarios de Ciudadanos comprendieron que no erraban quienes les habían advertido de que Rajoy era un gran parlamentario. Lo era, y ese día en el que era otro quien intentaba ser investido, el presidente en funciones —que había gobernado durante cuatro años y llevaba desde los veintiséis ocupando diferentes cargos políticos, entre ellos cinco ministerios y la vicepresidencia del Gobierno, antes de llegar a La Moncloa— pronunció probablemente el discurso más brillante de su carrera. No en su propio beneficio, sino para machacar a su adversario.

Como Rajoy había supuesto, Sánchez no logró ser investido. Se convocaron nuevas elecciones en la fecha marcada por ley y, contra todo pronóstico, el PP de Rajoy incrementó considerablemente su número de escaños mientras los perdían PSOE y Ciudadanos. Podemos repetía, pero con dos cruces en su «debe»: no había conseguido superar al PSOE y la lista conjunta con Izquierda Unida, un empeño personal de Pablo Iglesias, fue un fiasco, pues obtuvieron un millón menos de votos que los alcanzados en diciembre con la suma de Podemos e Izquierda Unida. Solo un hombre había acertado el resultado: el denostado Pedro Arriola —sociólogo de cabecera de Mariano Rajoy, como antes lo había sido de Aznar—. Unas semanas antes de las elecciones de junio había advertido en un almuerzo con un grupo de periodistas que, de su análisis de las encuestas publicadas, deducía que el PP podía alcanzar quince escaños más, no los dos o tres que les daban esas mismas encuestas cuyas «tripas» él escudriñaba con tanta atención. Fueron catorce los escaños de más que tuvo el PP en relación con las elecciones de seis meses antes. En honor a la verdad hay que señalar que ni el propio Rajoy dio credibilidad al optimista pronóstico de su asesor y amigo. Un Rajoy nuevo apareció después de las elecciones de junio. Lo había pasado bien en la campaña electoral, se había pateado media España en una actitud muy distinta a las ocasiones anteriores: más cercano a la gente, sin rehuir la calle, aunque

siempre rodeado por unos colaboradores que con frecuencia obstaculizaban esa cercanía. También había acudido a programas de televisión en los que, apenas un año antes, era impensable la presencia de un presidente del Gobierno, aunque fuera en funciones.

Se sentía bien, y el resultado le hizo sentirse aún mejor y con la sensación de que era posible repetir gobierno. Le preocupaban los plazos. La Comisión Europea apretaba y amenazaba con una multa brutal si no se presentaban a tiempo las propuestas de ajuste que se incluían en los Presupuestos Generales del Estado. Además existía el problema añadido de que, sin la aprobación del techo de gasto presentado por un nuevo gobierno, no se podían transferir fondos a las comunidades autónomas, que a su vez se verían impedidas de cumplir con sus compromisos sociales y el pago a proveedores y funcionarios, entre ellos los relacionados con dos campos tan sensibles como la Sanidad y la Educación. Pero a pesar de todo se sentía bien tras la campaña diseñada de forma tan distinta a las anteriores, bien ante el resultado obtenido —a pesar de que convertía en una empresa muy difícil el objetivo de gobernar— y bien porque su adversario, Pedro Sánchez, había sufrido un bajón considerable en número de votos y escaños y, por tanto, su empeño en formar gobierno era algo prácticamente impensable. Más aún después del fracaso anterior en el que se había demostrado sobradamente, para desgracia de Sánchez, lo que cualquier analista político daba por sentado: jamás Ciudadanos y Podemos formarían parte de un mismo equipo. En definitiva, el nuevo resultado electoral expulsaba de la carrera presidencial a Sánchez, aunque el socialista pareciera ser el único español que no se había dado cuenta.

Con esas fichas y cartas sobre la mesa Mariano Rajoy se dispuso a pelear todo lo que no había peleado en la ocasión anterior. Tras nuevas reuniones con Rivera y Sánchez advirtió que era posible llegar a algún tipo de acuerdo con Ciudadanos, que ya no hablaba de vetos hacia su persona, sino de necesidad de regeneración. En cuanto a Sánchez, aún se mantenía en el «no» y no le dio esperanzas de cambiar de idea, pero al menos se había sentado a hablar con el candidato. No se había levantado como un autómatas al finalizar la sesión fotográfica y habían hablado del presente y del futuro durante una hora larga. Así que Rajoy se dispuso para la batalla y asumió esa responsabilidad personalmente. Le echó una mano el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, para tantear el terreno con otros grupos con cuyos portavoces mantenía una buena relación personal —a pesar de que Hernando se caracterizaba desde siempre por lanzar exabruptos y descalificaciones personales que con

frecuencia envenenaban el escenario político—. Contó también con Jorge Moragas para algo tan fundamental como concertar algún encuentro con Pedro Sánchez. Cosa complicada porque Sánchez se quitó de en medio poco después de la fecha electoral, se tomó unas largas vacaciones familiares, apenas interrumpidas, y casi no atendía al teléfono. Moragas optó por llamar a José Enrique Serrano, siempre al quite desde hacía muchos años, dispuesto a facilitar cualquier gestión con sus sucesivos jefes —Felipe González, Zapatero y ahora Sánchez—, defensor de cualquier iniciativa que fuera importante para España y poniendo por encima de todo un sentido de Estado que no siempre tenían los dirigentes socialistas para los que trabajaba.

En esos días posteriores al 26 de junio, fecha electoral, surgió con fuerza el rumor de que Rajoy barajaba la idea de rechazar nuevamente la investidura si el rey volvía a proponérsela porque seguían sin salirle las cuentas. Pero nunca se planteó esa alternativa: estaba decidido a aceptar y, además, transmitía a su equipo la voluntad de dejarse la piel para conseguir los votos necesarios. Pero una vez aceptada la candidatura surgió con fuerza el rumor de que Rajoy no se sometería a la investidura si no contaba con los apoyos suficientes para ganarla. Fue el propio Rajoy el que abrió ese melón cuando, tras su encuentro con Sánchez después de la cita electoral, hizo unas declaraciones ante los periodistas de clara ambigüedad. El escándalo ante la posibilidad fue mayúsculo, porque la Constitución obliga al candidato a someterse a la investidura, aunque no fija la fecha para esa sesión.

Desde el entorno del presidente en funciones nunca dieron argumentos para eludir esa sesión de investidura, sino que se insistían en que el candidato tenía la intención de someterse al trámite, como exigía la Constitución. Se aclaraba que lo que insinuaba el candidato era que esa sesión podía alejarse del modelo habitual. Esto es, que si no contaba con los necesarios apoyos previos no se sometería a un debate sobre su programa. Expondría sus intentos de contar con los apoyos necesarios, de cómo se encontraba con decisiones de bloqueo que impedirían ser investido y que por tanto renunciaba a exponer un programa y a que fuera debatido. Que cuando lo indicara la presidencia de la Cámara se podía producir la votación que pondría en marcha el proceso para unas terceras elecciones, pues este solo podía iniciarse tras la votación de la investidura. Que esa explicación fuera una versión edulcorada de lo que pretendía el presidente tras el debate suscitado por sus declaraciones sobre la investidura cabe dentro de lo posible. Aunque en apoyo a esa versión hay que decir que el candidato nunca dijo claramente que no pensaba someterse a la

investidura si no salía de ella como presidente. El problema de Rajoy ha sido siempre que hay que interpretar lo que dice, y en esta ocasión fue lo suficiente ambiguo como para que las interpretaciones fueran antagónicas.

En cualquier caso, los hechos demostraron que perseguía ser investido en cuanto advirtió un cambio de actitud en Albert Rivera, ahora dispuesto a cooperar en la elección de un nuevo gobierno aunque sin formar parte de él. Porque el dirigente de Ciudadanos, como la mayoría de los españoles, consideraba que España no podía seguir más tiempo sin gobierno y las consecuencias del bloqueo podrían ser nefastas e incluso irreversibles. La sintonía personal entre Rajoy y Rivera fue, además, mejor de la prevista, a pesar de que el líder de Ciudadanos y sus compañeros de partido nunca dejaron de denunciar la corrupción en las filas del PP. De hecho, de los seis puntos innegociables para Ciudadanos, los que provocaban problemas entre los populares eran los relativos a la creación de una comisión parlamentaria que investigara todo lo relacionado con el caso Bárcenas y la supuesta financiación ilegal del PP. Los demás eran perfectamente asumibles por el PP, e incluso alguno de ellos figuraba en su programa.

A pesar de que en principio no entrañaba dificultad y por tanto el partido respaldaría lo que propusiera Rajoy, la primera sorpresa llegó tras la reunión para concretar el inicio de las negociaciones: el presidente en funciones anunció que reuniría a la ejecutiva de su partido una semana más tarde para solicitar su aprobación para negociar con Ciudadanos. La razón de contar con el visto bueno de la ejecutiva antes de iniciar las negociaciones era comprensible, pero esperar una semana no se entendía cuando se trabajaba contrarreloj. La segunda sorpresa se produjo tras la reunión de esa ejecutiva, cuando en rueda de prensa se anunció que Rajoy contaba con el respaldo de su partido para negociar con Ciudadanos, pero se afirmó también que no se había dedicado ni un minuto a analizar las condiciones exigidas por esa formación. Esto se contradecía con el supuesto objetivo de reunir a la ejecutiva. La razón de la falta de discusión estaba en que, en la semana transcurrida desde el encuentro entre Rajoy y Rivera, desde las filas de Ciudadanos se habían realizado duras descalificaciones hacia el PP. Se le presentaba como un partido que amparaba la corrupción y se decía, además, que el gobierno de Rajoy había echado abajo algunos de los más importantes logros sociales aprobados antes de su presidencia.

La sensación que transmitían la mayoría de los dirigentes del PP convocados aquella mañana en la sede de la calle de Génova era de total

contrariedad por esos ataques, que no se atrevían a rebatir para no poner trabas al posible acuerdo de investidura. Y existía también la sensación de que Ciudadanos estaba dispuesto a apoyar la investidura de Rajoy, entre otras razones porque su retroceso electoral les había hecho comprender que su acercamiento al PSOE de Pedro Sánchez no había gustado a sus votantes. Pero querían presentar el pacto, pensaban en el PP, colocándose todas las medallas y presentándose como un partido que había tragado con sus exigencias y al que Ciudadanos iba a llevar hacia la senda del bien. Rajoy, por tanto, no quiso entrar en el análisis de las exigencias de Ciudadanos, sino que dijo a la ejecutiva que él se hacía responsable personalmente de las negociaciones. Él designaría al equipo negociador, seguiría el día a día de su trabajo con el equipo de Ciudadanos y pedía el respaldo de la ejecutiva para asumir ese papel, en el que el peso negociador caería sobre sus hombros. Desde La Moncloa llamó a la gente que consideraba más adecuada y cuando todos y cada uno de los contactados le preguntaron qué instrucciones concretas debían defender, fue cuando Rajoy les respondió que la única instrucción era que alcanzasen un acuerdo de investidura.

Siguió paso a paso las negociaciones, en las que no hubo escollos insuperables. Quizá lo que más preocupaba a la gente de Rajoy era que así como su grupo estaba cohesionado y sabía qué tenían que defender, en Ciudadanos no encontraban una postura unánime. Fátima Báñez, por ejemplo, cerró cuestiones relacionadas con la reforma laboral en tres ocasiones y en las tres se volvieron a abrir para que se reuniera con un distinto interlocutor. Sin embargo, en el PP siempre existió la certeza de que habría acuerdo porque los obstáculos iniciales se fueron salvando y, sobre todo, porque encontraron en la gente de Ciudadanos más comprensión y más flexibilidad de la que se imaginaban al principio. Incluso establecieron relaciones personales que auguraban que en el futuro la línea de diálogo entre los dos partidos se podría mantener a todos los niveles. En esa mesa negociadora se sentaron las bases, incluso, para la amistad entre los supuestos adversarios.

Rajoy, hasta pocos días antes de su primera investidura tras las elecciones de junio de 2016, pensó que podría superarla. En su encuentro previo con Pedro Sánchez, el dirigente socialista le había insinuado que si se presentaba a la investidura con 170 escaños no se entendería que no tuviera los apoyos necesarios para ser elegido presidente, lo que para Rajoy significaba que en ese caso podría contar con la abstención de los diputados del PSOE. Ese mismo argumento lo escuchó a otros destacados dirigentes socialistas... pero,

a medida que se acercaba la fecha de la sesión, las declaraciones de Sánchez eran más y más distantes, más y más negativas, incluso más y más hirientes. No se movía ni un milímetro, se mantenía en el voto negativo y movilizaba a los militantes para que le prestaran públicamente su apoyo. Desde Ferraz se distribuían sondeos, o supuestos sondeos, que indicaban que la militancia estaba a muerte con su secretario general.

Mariano Rajoy perdió esa investidura, como se temía. Su miedo, sin embargo, no era perder la presidencia, aunque le incomodaba profundamente, sino las repercusiones que tendría para España mantenerse unos meses más sin gobierno. Un peligro que, al parecer, Pedro Sánchez no contemplaba, o no lo tenía en cuenta, aunque sí la mayoría de los presidentes de gobierno regionales del Partido Socialista, que vivirían en su propia piel las consecuencias de no contar con unos nuevos presupuestos.

Quien salió perdedor del envite fue Sánchez, que perdió la secretaría general del partido tras una lucha interna de imprevisibles consecuencias. Nunca España ha vivido una etapa de mayor incertidumbre, una etapa en la que los políticos, presidente y expresidentes incluidos, se han visto más desprestigiados. Una etapa en la que es habitual oír comentarios respecto a que los grandes políticos han pasado a la historia, para dar paso a nuevos dirigentes que, con excepciones, se empeñaban más en alcanzar sus ambiciones personales que en luchar por los intereses de los ciudadanos. Una etapa en la que, como en otros países europeos, la decepción generalizada hacia la clase política ha abierto la puerta a los populismos, con imprevisibles consecuencias para el futuro. Una etapa en la que es imposible esbozar siquiera un epílogo. Mucho menos escribirlo.



Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

© Pilar García-Cernuda Lago, 2016
© La Esfera de los Libros, S.L., 2016
Avenida de Alfonso XIII, 1, bajos
28002 Madrid
Tel.: 91 296 02 00
www.esferalibros.com

Primera edición en libro electrónico (epub): noviembre de 2016
ISBN: 978-84-9060-869-2 (epub)
Conversión a libro electrónico: J. A. Diseño Editorial, S. L.